



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales

Carrera de Derecho

La función simbólica del derecho, reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto: análisis de contexto en la ciudad de Cuenca en el periodo 2018

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Abogada de los Tribunales de la República y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales

Autora: Brenda Karina Espinoza Gárate
Cl. 0105186670

Director: PhD. Pablo Sebastián López Hidalgo.
Cl. 0103113080

Cuenca-Ecuador

Marzo 2019



Resumen

Es estrictamente necesario tener conciencia de cómo el Estado ejerce su poder punitivo, a través de la función simbólica del Derecho, pues siempre que este se omite en el discurso de la criminalización, dicha omisión se vuelve sospechosa. Es un tema que relata la presente investigación identificando la confrontación de fuerzas de varias/os actores sociales y su relación con la función simbólica del Derecho.

El discurso penal y criminológico ha sido materia de disputa entre los entes de poder. Es identificado como un debate del poder en sí mismo, siendo el nuevo escenario “el cuerpo de la mujer”. El Derecho se inaugura bajo la legitimación de dicho poder, y se sostiene sistémicamente en la relación privilegiada de los intereses del Estado. Esto es explicado en la primera parte la investigación, en la que se examina el ámbito sociológico del Derecho, introduciendo el estudio de la función simbólica como un elemento performativo.

Observaremos en la segunda parte de esta investigación la transmisión y repaso de ciertas imágenes, símbolos, ideas sentimientos y representaciones en los destinatarios/as. Abordando también, los complicados procesos de estandarización de valores e imágenes que interesa al Derecho con la penalización del aborto, identificando la amplia vulneración los derechos de las mujeres, sin mencionar las dificultades que existen en su interpretación, pues en definitiva así se construye su criminalización.

Nuestro ordenamiento jurídico ha definido tradicionalmente a las mujeres a través de la norma por medio de un sistema jerarquizador en el que los estereotipos de género son consecuencia y adquieren significado, mismos que son asignados por el contexto en los que se encuentran, siendo posible su identificación, a través del análisis de los discursos sociales.

Palabras Clave: Poder. Función simbólica. Criminalización. Mujeres. Aborto



Abstract

It is extremely necessary to be aware of how the State practices its punitive power, through the symbolic function of Law. Whenever this is omitted in the discourse of criminalization, the omission becomes suspicious. This theme relates the present investigation identifying the confrontation of forces of various social actors and their relationship with the symbolic function of Law.

Criminal and criminological discourses have been a matter of dispute between the entities of power. This is identified as a debate about power itself in which the main scenario is "the woman's body". The Law is inaugurated under the legitimation of previously power mention, and it is maintained systemically in the privileged relation of the State's interests. This is explained in the first part of the research, which surveys the sociological field of Law, introducing the study of the symbolic function as a performative element.

We will observe in the second part of this investigation, the transmission, and review of certain images, symbols, ideas, feelings and representations in the recipients. Also addressing the complicated processes of standardization of values and images of law with the criminalization's interest of abortion, identifying the full-scale violation of women's rights, without mentioning the difficulties that exist in their interpretation, because at the end, this is how criminalization is constructed.

Our legal system has traditionally defined women through the policy across a hierarchical system in which gender's stereotypes are a consequence and acquire meaning. This meaning is assigned by the context in that they are found, being possible their identification, through the analysis of social discourses.

Keywords: Power. Symbolic function. Criminalization. Women. Abortion



Índice

Introducción	10
Metodología de la Investigación	14
CAPITULO I	17
La función simbólica del Derecho y la crítica feminista	17
1.1 El reflejo del poder simbólico en el Derecho	17
1.2 El funcionamiento simbólico del Derecho	22
1.3 La estructuración del poder punitivo del Estado	38
1.4 Antecedentes de un estudio feminista del Derecho	46
1.4.1 La simbología del sistema patriarcal en el Derecho	46
1.4.2 La acción del poder simbólico del Estado sobre el cuerpo de la mujer	55
1.4.3 El ejercicio del poder punitivo del Estado sobre el cuerpo de la mujer	62
CAPITULO 2	70
La criminalización de las mujeres por aborto	70
2.1 Análisis histórico de la criminalización de la mujer por aborto en el Ecuador	70
2.1.1 Contexto internacional del debate de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres	88
2.2 Discusiones actuales sobre la criminalización del aborto	99
2.3 Los discursos sociales y su correlación con la función simbólica del Derecho en la criminalización de las mujeres por aborto	110
Conclusiones	126
Bibliografía	130
ANEXOS	148
Anexo 1.	150
Instrumento de Investigación para Mujeres que han decidido interrumpir su embarazo (cualitativa) .	150
Anexo 2.	151
Instrumento de Investigación para Administradores/as de Justicia (cualitativa)	151
Anexo 3.	153
Consentimiento informado de los y las entrevistadas	153
Anexo 4.	154
Licencia y Autorización del Derecho de la Autora del uso del documento Informe Investigación Cualitativa De Percepciones Sobre “Derechos, Salud Sexual Y Reproductiva, Violencia Y Aborto De Las Mujeres Ecuatorianas” Emitido por SENDAS	154
Anexo 5.	155



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Informe Investigación Cualitativa De Percepciones Sobre “Derechos, Salud Sexual Y Reproductiva, Violencia Y Aborto De Las Mujeres Ecuatorianas”	155
Anexo 6.	190
Cruce de variables, software Atas Ti.....	190



CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Brenda Karina Espinoza Gárate, autora del trabajo de titulación "*La Función simbólica del derecho, reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto: análisis de contexto en la ciudad de Cuenca en el periodo 2018*", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, marzo de 2019

Brenda Espinoza G.

Brenda Karina Espinoza Gárate

C.I: 0105186670



UNIVERSIDAD DE CUENCA

CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

Brenda Karina Espinoza Gárate en calidad de autora y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación *"La Función simbólica del derecho, reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto: análisis de contexto en la ciudad de Cuenca en el periodo 2018"*, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, marzo de 2019

Brenda Espinoza G.

Brenda Karina Espinoza Gárate

C.I: 0105186670



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dedicatoria

A Sebastián Espinoza, a su constante y aferrada memoria que vive en mí de formas inexplicables. A mi madre, por haber forjado los saberes de mi mundo, mujer de mi gran viaje.

A mi padre por su esfuerzo, y haberme enseñado a volar en vientos contrarios. Y a todas las mujeres que han aprendido a vivir en este mundo ordinario y violento sin resignarse, por su valentía y resistencia.

Dignos y Firmes



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Agradecimientos

*A todas las personas que han apoyado este proceso, de manera especial a mi hermano por no
dejar de creer en mí.*

A la Mgs. Paola Pila por todo el conocimiento y la sororidad compartida.

*Al PhD. Sebastián López Hidalgo, Director de esta investigación, por haber inspirado mi
formación académica, por la confianza, y por haber apoyado incondicionalmente esta tarea
hasta el final.*

A mi familia, porque sin ellos nada fuera posible.



Introducción

"El chamán Quesalid - dice Levi-Strauss- no se convirtió en un gran hechicero porque curaba a sus enfermos, sino que sanaba a sus enfermos porque se había convertido en un gran hechicero"

(Levi-Strauss, C. 1984, pág. 163).

Se describe al poder como un todo casi líquido que se esparce por todas las esferas silenciosamente, parcializándolo y causando esa división “natural” fricción que ha sido creada para justificar su legitimidad. Es esta denominación tan conocida, reconocida, pero a la vez tan temida, de “lo estatal” siendo el medio a través del cual el poder se distribuye, ya que como se afirma, el sistema considera, al estilo medieval, que el poder no se ha construido sino de hecho es natural, y las conductas de los que se encuentran subordinados/as a él también debería ser natural.

De aquí se genera un nuevo planteamiento respecto a la relación que este tiene con la mujer y su posición social. Planteando finalmente que todas aquellas construcciones y expresiones éticas deberán declararse en contra de lo bien conocido como poder natural y sus múltiples manifestaciones, en la cultura. Este proceso de subjetivación del poder se construye a través de tres conceptos la vigilancia, la prohibición, y la sanción. (Butler, 2001, p. 47).

Ahora bien, el discurso jurídico se estructura tomando al lenguaje como una de sus herramientas fundamentales, tal es así que los esquemas de naturalización, no podrían ser asimilados sin el poder que se ejerce a través del mismo. El signo de culpabilidad y la transgresión se han convertido en el resultado de la ya mencionada naturalización. Sin embargo, no es tan



sencillo como aparenta, Foucault lo bosqueja de la siguiente forma como “la articulación de los hechos del discurso sobre los mecanismos del poder” (Foucault, 1980, p. 154).

Se mantiene la idea de que el Derecho dice más en lo que ha dejado de enunciar que en lo que se encuentra prescrito, tal estrategia se concibe con el ejercicio de poder estatal. Umberto Eco plantea la categorización de este ejercicio a través de la analogía de lo simbolizante y lo simbolizado, pues el lenguaje por sí mismo constituye un conjunto de símbolos. Sin embargo, la alusión vaga e implícita de sus contenidos establece otro agregado de símbolos (Villegas, 1993, pp. 22-38).

Dichos símbolos a lo largo de su manifestación y legitimación a través del proceso de formalización del Derecho se convierten en conceptos que a su vez son aceptados, asimilados y reutilizados por la sociedad de manera autónoma. Es decir, en determinada instancia la simbología implícita prescinde de la explícita pues la estrategia del poder finalmente da resultados cuando los conceptos se han impregnado en la sociedad (Villegas M. G., 1993, pp. 22-38).

El Derecho funcionalmente permite la apreciación de dos acciones; formar e informar y estas no se sirven de manera exclusiva a través del sentido explícito del ordenamiento jurídico. El poder propio del discurso jurídico como veremos se encuentra en la percepción que se tiene de él, reflejándose en ideologías, y devenires sociales. Pues la función que imparte ilusoriamente es la de la “verdad única”, de modo que la fuerza del derecho se manifiesta no solo de manera instrumental, sino además manera simbólica.

El ideal del derecho es mantener su legitimidad, de manera independiente. Los oficios para los que este sea empleado, explícita o implícitamente no pueden poner en juego dicha legitimidad. De esta forma se puede explicar la función simbólica del derecho en relación a la eficacia del



mismo, pues pretende conciliar la realidad y ese ideal. La paradójica situación de aceptar que el derecho es un ideal, sin que esto implique renunciar al Derecho como algo legítimo.

Veremos que la eficacia del Derecho constituye la realización de la función simbólica del mismo, entendiéndola como la aceptación interna del Derecho. Esto reducido a un sentido un tanto más subjetivo se define como la representación emocional, o simbólica de conceptos jurídicos, vinculados directamente con imágenes de criminalidad en la subjetividad del agente jurídico o imperado (Rivera, 2014, p. 94).

De esta forma el derecho se convierte en la máxima expresión de violencia simbólica hacia la mujer, puesto que los agentes intervienen dotados de poder, para decidir el alcance de las normas a partir de su definición en la literalidad, como en lo implícito de su contenido, en un campo en el que rescinde la fuente de las relaciones de poder que mantiene la estructura patriarcal. A partir de este planteamiento, se ha instaurado esta idea del mal arraigado a la mujer creando un sin número de símbolos que la aíslan de las construcciones razonables y moralmente aceptados por el sistema.

Existen por supuesto, determinados factores que son verificables según el contexto en el que concentremos nuestro análisis, por lo que a través del estudio de los discursos de mujeres que han decidido abortar y otros actores sociales, identificaremos factores individuales como las consideraciones cognitivas del comportamiento, factores situacionales como las condiciones predispuestas por el entorno en el que la o el individuo se desarrolle determinado por la notable influencia política, cultural, y legal (Cusack 37,38).

Evidenciando que la aceptación de los atributos de la feminidad y la masculinidad, a través del tiempo y del espacio permiten que el derecho alcance su legitimidad, sin olvidar que la legitimidad de los atributos antes mencionados también encuentra su legitimidad a través del



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Derecho, es decir la gradual armonía entre la realidad y el sentido, cuestiones a las que ya hemos hecho referencia, se dan gracias a la tan mencionada función simbólica del derecho, y el ideal femenino como uno de sus resultados junto a una gran influencia social, verifican la realidad de la criminalización de las mujeres por aborto (Mcdowell, 2005, p 4-23).



Metodología de la Investigación

En el presente proyecto de investigación se alcanzan los objetivos planteados a través de un método cualitativo, a partir de la transversalización del enfoque de género, el mismo que orientó el proceder en el desarrollo de esta investigación. Sin perder rigurosidad científica se ha dado paso a un análisis de la construcción del Derecho arraigado en un sistema patriarcal histórico, que se evidencia en la criminalización de las mujeres aborto en el Ecuador.

A partir de un análisis bibliográfico y documental, y un estudio investigativo de información de fuentes principalmente académicas, que han permitido conceptualizar, definir y describir los aspectos teóricos críticos relevantes respecto al tema objeto de esta investigación. Se ha realizado un análisis comparativo de los diferentes momentos del discurso legal y social de la criminalización de la mujer por aborto en la ciudad de Cuenca, con la intención de presentar de manera fundamentada la relación del poder simbólico del Estado con la función simbólica del Derecho.

Se ha dado paso a la reconstrucción de discursos sociales, a partir de la ejecución de entrevistas semi estructuradas, tomando una muestra de cinco mujeres que han decidido abortar. De modo que representan referencias claves dentro del discurso legal y social de la criminalización aborto. Así mismo esta investigación se ha encaminado en un diseño etnográfico ya que ideas, costumbres, creencias y por supuesto significados dimensionan la cultura y práctica de un grupo social, por lo que las entrevistadas residen en la ciudad de Cuenca.

Como se puede discernir del título de este proyecto de investigación, se ha tomado en cuenta a las y los sujetos principalmente involucrados/as. Se ha decidido además tomar una



muestra de dos administradores/as de justicia que conforman el Tribunal de Garantías Penales del Azuay y la Sala Especializada de lo Penal de la Provincia del Azuay, respectivamente identificados/as a partir de las variables planteadas en el problema descrito en la base teórica de esta investigación. Entendiendo que el autoritarismo jurídico dentro de la actividad legislativa sobre todo se ha estructurado como un escudo instrumental de la justicia en sí misma. La muestra de entrevistados/as ha sido seleccionada aleatoriamente, hasta alcanzar el punto de saturación teórica, equilibrando reflexivamente las metas supuestas que han sido planteadas de manera objetiva dentro de esta investigación.

Además, se ha manejado la información obtenida a través de grupos focales con hombres jóvenes y adultos de la ciudad de Cuenca respecto a sus percepciones sobre el aborto. Esta investigación corresponde al año 2014 y ha sido realizada por la Organización sin fines de Lucro SENDAS conjuntamente con SEDATOS, denominada Informe de Investigación Cualitativa De Percepciones Sobre “Derechos, Salud Sexual Y Reproductiva, Violencia Y Aborto De Las Mujeres Ecuatorianas” La misma no ha sido publicada, sin embargo, la organización ha emitido la autorización del uso de la información comprendida en el documento.

Se ha efectuado un análisis comparativo de la investigación proporcionada por SENDAS con los datos primarios recolectados en esta investigación, abarcando el contexto histórico y geográfico que determina el sistema social, cultural, político y educativo de las mujeres criminalizadas por aborto en la ciudad de Cuenca.

Esta investigación se ha ejecutado en base a criterios éticos tales como el consentimiento y anonimato de los y las informantes, para lo que se ha utilizado nombres ficticios con la intención de proteger la identidad de las y los entrevistados con la rigurosidad y calidad de las técnicas de



UNIVERSIDAD DE CUENCA

investigación, conforme a su derecho a la intimidad y demás derechos que le otorga la Constitución, garantizando el uso exclusivo de la información recolectada para fines académicos.



CAPITULO I

La función simbólica del Derecho y la crítica feminista

1.1 El reflejo del poder simbólico en el Derecho

Toda relación implica en determinado momento, un choque de poderes. Aunque creyéramos que el vínculo Estado y Derecho, en su mayoría se encuentra influenciada por el factor político, nos tropezaríamos a menudo con la realidad de que incluso esa variable política, responderá a una relación del poder. Pues en definitiva el derecho no es más que la manifestación del poder simbólico del Estado sobre el soberano.

Por supuesto, que cada relación de poder, direcciona o envía una condición o señal determinada hacia el campo de lo político, más este se materializa formalmente a través del derecho. En la omnipresencia del poder simbólico del Estado en el derecho, predomina la fuerza, como diría Foucault toda relación de fuerzas será una relación de poder

De esta forma nos acercamos a la naturaleza misma del Derecho. Lo paradójico es que el saber jurídico debe ser abordado desde una perspectiva constructivista, ya que es el resultado de un proceso de constante retroalimentación social. Este transcurso podría advertir de la relación de poder, consentida, como producto del contrato social que se constituye como fuente de legalidad.

Sin embargo, asumimos además que nuestra realidad social, sin duda, tiene determinada correspondencia con el lenguaje, dentro de esta ilusión simbólica de que el lenguaje guía. Cuestión que es tomada y aceptada por todos y todas (Villegas M. G., 1993, p. 59). Nuestra actitud frente a



cualquier situación, definida como una manifestación volitiva, justifica su sentido en el lenguaje utilizado por el Derecho.

Sería algo que entendemos como predefinido, como un componente adicional del poder simbólico. Partiendo de esto es preciso manifestar la importancia de la confianza que depositamos en las palabras, y más aún cuando estas están escritas, convirtiéndose de esta forma en una fuerte herramienta de dominación. Siendo entonces el Derecho lo que fija los límites de la dimensión simbólica inherente a nuestra forma de entender el mundo (Villegas M. G., 1993, p. 60).

Precisamente lo más relevante de abordar al lenguaje como un manifiesto de dominación, es comprender como los contenidos del lenguaje jurídico se han convertido en una lucha por darle sentido a las palabras. En tal caso del discurso jurídico supera tal dificultad, identificando valores y asignándoles significados que gozarán de legitimidad, las palabras que se referirán a los valores serán parte de la cotidianidad.

La polisemia es mayor, cuando el Estado, o modelo de estado juega un papel protagónico, pues se presume que el límite de esta polisemia es definido por el Estado a través de la respectiva asignación de significado de los valores establecidos en el derecho. De esta forma, por ejemplo, toda esa tensión entre el liberalismo y socialismo no ha sido una discusión en el aire, ya que parte de la dificultad para conciliar la definición de dos valores: igualdad y libertad.

Todo esto se replica en los países democráticos, pues los ideales de justicia según el Estados son definidos en el derecho, esto entendido desde una posición constructivista de la realidad, es decir, cuando el énfasis no recaiga sobre descifrar la relación, o correspondencia entre el derecho y los comportamientos de los sujetos sociales, sino en la capacidad del derecho para producir significados.



La fuerza social y política del derecho, debe dotarse de fuerza simbólica para normalizar y legitimar la realidad social. Esto otorga un enorme poder a quienes encarnan todo el proceso que se desarrolla en el campo jurídico. Estos se adhieren a la estructura como protagonista de la institucionalidad, pues se apropia del poder simbólico que se encuentra en los textos jurídicos, dada la capacidad que tiene para crear con esto realidades historias.

Es evidente la cantidad de realidades políticas que el Estado puede crear con tan sólo dar significado a lo válido y a lo inválido. Dado el cómo se ha distribuido el capital social y simbólico, no es una sorpresa que, dentro de esta estructura, entre los que ostentan dicho capital, se discuta lo que es de su interés. Lo preciso sería consolidar una “posesión-posición y distribución” (Villegas M. G., 2012, p.110).

Entendiendo que lo que determina la distribución de capital simbólico, son las pugnas políticas, nos llevaría afirmar que el control del derecho como realización y expresión del capital simbólico hegemónico, es algo importante para consolidar el control social, bajo parámetros de un Estado patriarcal. Los textos legales definen la consagración de determinados derechos.

Tal es así que el trabajo de la o el juez se resume a resolver el alcance de la definición de los valores. Precisamente en la práctica y en la argumentación lo que cobra real importancia para el Estado es la jerarquización de valores, ya que es en ésta donde radicaré la eficacia de su definición.¹ Comprendiendo de esta forma como se materializa la dominación social (Villegas M. G., 2012, pp. 66,67).

¹ Victoria Camps: ¿Qué vale más, la vida o la libertad, esta o la igualdad?; ¿qué conviene sacrificar en caso de conflicto entre ellas? ¿cómo debe entenderse la igualdad para no entorpecer el uso de la libertad?; ¿cuándo el ejercicio de la libertad es una violación clara al derecho a la vida? ¿es permisible la defensa, el alargamiento de una vida con el simultáneo descuido de otras vidas? (Camps, 1988, pp. 108-109)



Es preciso resaltar la idea de que el poder simbólico del Estado, no está sujeto a límites materiales extraordinariamente, como lo legislativo, o la actividad judicial. Es más bien un proceso comunicativo, que es entendido a través de lo permitido y lo prohibido. Desde su efecto colonizador, el derecho viene apropiarse de las miradas del conflicto, mientras excluye otras, delimitando las posibilidades de regulación de eventos sociales.

Lo cierto es que el ejercicio del poder del Estado, y su dominación a través del Derecho, no es percibido de inmediato como represiva, aunque esta lo sea explícitamente y a profundidad. Los significados transmitidos por el Derecho son adoptados casi siempre como positivos aparentemente, pues bajo la idea de mitigar los conflictos sociales cuando en realidad “Funciona según todo un juego de represión y exclusión” (Foucault M., 1980, p.32).

Habría que distinguir cuales son las intenciones reales, detrás de la imposición de una determinada norma, pues existe cierto filtro por descubrir, detrás de ese aspecto presuntamente desinteresado y paternal. El saber oficial, es siempre representado por el poder político a través del Derecho, lo que implica, y una conformación legítima del poder atribuido.

Como ya se ha dicho para cumplir con la función del derecho de establecer un significado respecto a lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo prohibido y lo permitido, dentro del campo social², será esencial un enorme poder político. Esto es fundamental para establecer un orden, es

² Instrumento fundamental de la teoría de Bourdieu, corresponde a una noción técnica que indica el espacio de actividad social determinado por las actividades estructuradas y reguladas al interior del mismo. Se trata del espacio en que los agentes y las instituciones luchan permanentemente por apropiarse de productos específicos que se encuentran en disputa. El campo está caracterizado por ser un espacio limitado, un espacio de lucha, un espacio definido mediante regularidades de conducta y reglas aceptadas, que presenta momentos de crisis coyunturales, donde las reglas vigentes se cuestionan, y donde la distribución de fuerzas es desigual. (Jiménez, 2002)



decir se construye una realidad ilusoria, a lo que el derecho pretende llamar deber ser, el mismo que responderá a los intereses del Estado.

La autoridad estatal, logra manifestar su poder legal siendo una de las manifestaciones más privilegiadas del poder.

“Especialmente en términos de violencia simbólica legítima, producida y monopolizada por el Estado. El uso de lo simbólico dice Bourdieu, es una práctica inherentemente violenta, en cuanto es capaz de imponer significados en el mundo y en las relaciones sociales a partir de las cuales el poder económico y el político pierden su arbitrariedad original y su connotación exclusiva, y aparecen como algo normal y aceptable”³ (Villegas M. G., 2012, p. 110).

Es preciso aclarar la dimensión política del poder simbólico, es decir definir el alcance que este tiene a nivel político. Entendiendo al mismo como una sombra oculta, que además se empeña en apropiarse de las relaciones mutuas, pero además disimula las verdaderas relaciones de fuerza empleadas. De modo que deduciríamos la emanación de uso político de la eficacia simbólica consolidada, así como su origen, de forma que constituyen una derivación del poder consolidado en el Derecho.

Reconociendo la importancia de verificar cuales son los actores principales de este proceso, de modo que esta estrategia política no se encuentra en manos de los movimientos progresista, o colectivos sociales, que muchas veces se apropian del uso simbólico del derecho para montar una bandera. Precisamente, como se ha mencionado, consiste en una estrategia política que se materializa en diferentes espacios.

³ Bourdieu, P. (1980), *Le sens pratique*, Minuit, Paris.



Ambos pueden ser prácticos, sin embargo, el poder del que se sirve y legitima sus acciones, marcará su diferencia. Lo importante es identificar la posición política de cada uno de los actores que componen el Estado a través de sus diferentes instancias, que utilizarán el derecho como medio para ocultar la realidad, o fabricar una realidad que pueden enfrentar, corriendo el riesgo de que su legitimidad se vuelva dudosa.

En un contexto crítico, el Estado construye una idea de lo que está dispuesto abordar y procede a la codificación. Intentando mantener el control de sus variaciones, no prestaría atención a la relación causal de la norma y la realidad social que se enfrenta, es decir los resultados.⁴ El estado por lo general aborda los conflictos sociales, instalándose en el terreno del derecho por apropiarse de la legitimación del que goza su tecnicismo.

La violencia es enfrentada a partir de la codificación de una conducta. En definitiva, no le interesaría abordar toda la problemática social o económica que alimenta una problemática social, ya que esto lo obligaría cuestionarse discursos, y la comunicación del uso simbólico del derecho en sí mismo.

1.2 El funcionamiento simbólico del Derecho

Se ha desarrollado en líneas anteriores, un análisis respecto al poder, planteándolo como elemento clave para comprender la función simbólica del derecho. No se puede abordar el estudio funcional del derecho a partir de una reducida percepción, respecto a lo subjetivo y a lo objetivo,

⁴ Bourdieu menciona algo al respecto "...mientras más peligrosa es una situación, en mayor medida de las practicas tienden a estar codificadas [...]; a mayor probabilidad de la ocurrencia de violencia mayor será la necesidad de introducir forma, y en mayor medida la libertad dejada a la improvisación del *habitus* deberá ceder frente a la conducta reglada a través de un ritual metódicamente instituido, esto es codificado" (Bourdieu, 1987, p. 26)



pues las formas de pensar y actuar del sujeto normado, está determinado por estructuras externas que le permiten internalizar realidades.

Esto quiere decir que no podemos plantear nuevamente una discusión clásica respecto a un concepto universal entorno a la funcionalidad, y que esta abordada como una teoría general rijan la funcionalidad del *Derecho*. Sería errado metodológicamente, entendiendo que el análisis funcional se produce en realidad a partir del estudio de la finalidad, los medios y resultados, concibiéndolo como una acción estratégica.

Es preciso abordar las diversas posibilidades que de esta acción pueden derivarse. De Bourdieu, se desprende la lógica de que la conciencia de los sujetos, no responde a una mera coincidencia con la norma, es preciso abordar el motivo del Derecho. Un fenómeno complejo que ha servido, especialmente como medio de dominación, se alberga en la legitimación del Derecho a partir de la creación de una conciencia colectiva.

Si bien, el estudio de las finalidades del Derecho, constituyen uno de los elementos esenciales de un análisis funcional, no es suficiente, menos si es abordado en abstracto. La realidad social del Derecho, precisamente, puede ser explicada a partir de las representaciones de los sujetos normados. Bourdieu, manifiesta que no pueden excluirse, las condiciones de experiencia vivida por parte de los mismo como un elemento adicional.

Está por demás afirmar la existencia de experiencias de vida como, determinante de las representaciones finales que exteriorizará el sujeto, mas no podemos ignorar que dichas experiencias están condicionadas por una estructura que colmará de sentido a sus experiencias, lo que le permitirá además juzgar sus acciones y la de los demás actores sociales (Corvalán, 2014, pp. 35-42).



El funcionalismo, entendido clásicamente como una forma estructural de carácter integracionista y orientado hacia un idealizado consenso social, presenta la realidad social misma que es asumida como un orden de interacción armónica y pacífica; donde los conflictos sociales surgen como fallas del proceso de socialización, de los instrumentos de corrección social.

Estos son aceptados como corregibles mediante mecanismos de control que tácitamente ignoran la capacidad de innovación de la acción social y la diversidad de interacción. Es innegable su carácter ontológico e ideológico, rodeando los límites de la metafísica se refleja en las diferentes funciones del Derecho.

Profundizar en la explicación de las funciones del derecho, exige el desarrollo conceptual de una clasificación de funciones propuestas por Merton, ya que la distinción entre ellas enriquece el análisis de las manifestaciones sociales que aparentemente pueden resultar irracionales. Estas persisten en el tiempo, aunque la intención funcional de la misma no logre cumplirse.

Este fenómeno es explicado por Merton mediante lo que denomina, funciones latentes y manifiestas. aunque resulte complicado verificar empíricamente la intención de una norma, resulta fundamental para comprender la eficacia simbólica e implicaciones políticas de la misma. (Corvalán, 2014, p. 37)

(...) La producción social del discurso jurídico-sostiene- no puede ser explicada a cabalidad si no se amplía el espectro de funciones cumplidas por el derecho y si, además, no se acepta que los creadores y aplicadores de las normas jurídicas, en ocasiones, son conscientes de que actúan por razones diferentes a las manifestadas. (Corvalán, 2014, p. 37)

Es posible que, para comprender la correspondencia real entre el enunciado y la práctica, debamos analizar un agregado de funciones, además de las ya mencionadas manifiestas y latentes.



Villegas incluso las plantea como resultado de la ineficacia de las primeras, como medios para explicar cómo el discurso jurídico puede determinar la práctica, o incluso como el enunciado jurídico no logra coincidir con la práctica.

Agregando a estas dos situaciones la posibilidad de que la práctica pese a no responder al enunciado, no se hubiese dado sin la existencia de este. Sin embargo, si se intenta abordar un análisis funcional del derecho, resultaría casi incompatible, con el planteamiento de las funciones generales del derecho, pues resulta inútil dar cuenta de ellas como si el derecho o los derechos fuesen únicos, cuando, se encuentran determinados por la multitud de fenómenos que se presentan, como los tipos ideales planteados por Weber (Corvalán, 2014, p.35-42).

Se aborda el estudio de las funciones generales del “Derecho” como un todo, como una idea histórica, a partir de un análisis funcional no puede darse. Pues sería como plantear un análisis abstracto sobre un todo abstracto que es el Derecho (Corvalán, 2014, pp. 35-42). Mertón ignora que esta consecuencia entre el propósito subjetivo y la consecuencia objetiva deba existir para calificar una función como manifiesta.

(...) Para calificar a una función como manifiesta solo basta hacer referencia a las funciones que explícita o patentemente se le han asignado a un elemento, es decir, basta establecer que aquellas aparecen como buscadas o reconocidas, sin entrar a analizar si coinciden efectivamente con el propósito subjetivo de los participantes del sistema (Corvalán, 2014, p. 35)

La teoría funcionalista tradicional y conservadora, ha propuesto el estudio de las funciones generales del derecho. Por esto podríamos comenzar por definir a las funciones manifiestas, a partir de la clasificación propuesta por Mertón como parte de ese análisis funcional. Las funciones



manifiestas serán aquellas consecuencias prácticas que contribuyen a la adaptación de una unidad⁵ de personas (Merton, 1995, pp. 138-139).

Es decir, serán manifiestas cuando el objeto o fin del derecho contribuye a la conciliación o armonía de un grupo social o agentes sociales, una persona o incluso un sistema cultural (Merton, 1995, pp. 138-139). Diríamos que es aquella consecuencia objetiva que mantiene correspondencia con los propósitos subjetivos de sus participantes. La seguridad pública se convertiría en una consecuencia práctica de esta función (Corvalán, 2014, p. 35).

Por otra parte, tenemos las funciones latentes, mismas que no tienen relación con las anteriores pues prescinden totalmente de las consecuencias objetivas, ya que los participantes del sistema no buscan precisamente las mismas; por el contrario, serán inesperadas. El propósito subjetivo y las consecuencias objetivas divergen totalmente. (Merton, 1995, pp.126-139)

La ambigüedad con la que resuelve Merton las posibilidades que rodean a las funciones latentes, no deja claro qué situación se comprendería dentro de este concepto. Por eso, García Villegas menciona que podrían resultar de propósitos subjetivos que se encuentran implícitos. Se busca guardar armonía entre el carácter colateral y las intenciones implícitas de los sujetos, es decir que funciones latentes son:

⁵⁵ Concepto de unidad servida por la función, es uno de los conceptos y problemas planteados por Merton dentro del análisis funcional. Es definido como “determinadas funciones desempeñadas por el objeto de análisis pueden ser funcionales para unos individuos y subgrupos y, a la vez disfuncionales para otros, es necesario determinar el campo de unidades para los cuales una cosa tiene consecuencias. Debe entonces considerarse en el análisis a los individuos en posiciones sociales diferentes, subgrupos, sistemas culturales, sistema social en general” (Corvalán, 2014, p. 35)

Merton Robert, (1995): *Teoría y estructuras sociales. Fondo de Cultura y Economía, México.*



(...) Aquellas funciones que, consistiendo en proyectos de acción de los sujetos, no aparecen como queridas o buscadas por ellos, sea por que no las previeron o por que obedecen a un propósito no declarado, y aquellas funciones que sin consistir en esos proyectos de acción son ignorados o desconocidos por los sujetos. (Corvalán, 2014, p. 36)

Esta interpretación respecto a funciones manifiestas y latentes, permiten una interpretación sociológica de prácticas sociales, que persisten en el tiempo pese a las irracionalidades aparentes, de una finalidad manifiesta cercenada. Esto permite la observación de los estrechos límites entre los fines que consigue el Derecho y aquellos que aun sin presentarse resultan fructíferos (Corvalán, 2014, p.37).

En este caso lo importante sería identificar y conocer que dentro de esta misma línea teórica que diferencia a las funciones manifiestas y latentes, se identifican como una producción social dentro del discurso jurídico. García Villegas señala la valor que esta diferenciación tiene para el estudio y comprensión de la eficacia simbólica, y la realización de la función a partir de sus implicaciones políticas (Villegas M. G., 1993, p.84).

Si realmente se quiere identificar la forma en la que el Derecho incide en la vida social, se requiere conocer la forma en la que se desempeñan estas funciones, además de emparejar como la ineficacia de las funciones manifiestas constituye en si misma la eficacia de las funciones latentes. Esto determina las múltiples posibilidades de juego y estrategia que ponen en relación al Derecho y la vida social (Corvalán, 2014, pp.37-38).

Que el enunciado jurídico sea la causa explícita de la práctica es sólo una de las posibilidades. Que el enunciado jurídico sea completamente ajeno a la práctica es otra posibilidad. Entre estas dos situaciones se presenta una gran variedad de casos en los cuales el discurso jurídico hace posible una práctica que, si bien



no resulta de sus objetivos, tampoco habría sido posible de no existir el enunciado⁶ (Villegas M. G., 1993, p.85).

La interpretación armónica entre los proyectos de acción antes mencionados y el mantenimiento estructural, permite la caracterización de las funciones del Derecho, mismas que conformarán una nueva clasificación entre; positivas y negativas. Esta clasificación resulta de una acción a priori a la identificación de las distintas tareas-funciones que desempeña el Derecho en la sociedad (Corvalán, 2014, pp.38-39).

En relación a la realidad socio-jurídica, diríamos que conceptualmente la función positiva se apoya en la función del Derecho, de consensuar las acciones humanas en la medida en la que esté dotado de legitimación. Contribuye como generador de un mensaje de legitimación entre las acciones de los sujetos y el mensaje que remiten estas acciones, Ferrari⁷ señala que; “Esto significa justificarla exhibiendo su adhesión a un modelo normativo...” (Corvalán, 2014, p. 40).

La legitimación puede tratarse como la posibilidad de retener el poder, en condiciones relevantes de las que puede derivar la acción humana (Weber, 2002, p. 171). Referencias como estas permiten la comprensión de la teoría de funciones positivas y negativas, las funciones positivas alcanzan dos aspectos de la legitimación, por un lado, lo que respecta al mantenimiento de la institución, y por otro los proyectos de acción de los sujetos.

El marco de confianza y permanencia en el tiempo, que rodea al Derecho, naturaliza la traducción o adaptación de un conflicto social al discurso jurídico, en los términos

⁶ También citado por Cristopher Corvalán en: La función simbólica, la eficacia simbólica y el uso simbólico del Derecho. Delimitación conceptual y metodológica, 2014, págs. 37-38

⁷ Ferrari, Vincenzo (1989): Funciones del Derecho, Editorial Debate, Madrid.



estratégicamente escogidos por quienes transmiten el mensaje jurídico. Estas afirmaciones, contribuyen en la construcción de la estructura judicial y su legitimación, lo que además explica históricamente razones particulares de los procesos políticos por los que atraviesa un Estado (Corvalán, 2014, pp. 39-40).

Se podría afirmar que las variaciones que se presentan en diversos conflictos sociales, pueden encontrar su justificación, en áreas ajenas al derecho; mas, al final, el origen de estas áreas se encontrará influenciada por el derecho en un momento indeterminado. Desarrollan exigencias y recursos de forma que el Derecho actúa como argumento para aquellos que reciben el mensaje jurídico, legitimando una estructura y funcionamiento de un grupo social. (Corvalán, 2014, p.40)

Además, la función legitimadora del derecho contribuye en el mantenimiento de la estructura social, como judicial, las partes que se involucran en este proceso no identificarán, a los errores judiciales como una errónea intervención del Estado plasmada en el discurso legal, más el reproche, se internaliza y se manifiesta en la deslegitimación de quien administra justicia (Fariñas, 1989, p.126)

Por tanto, el sistema jurídico está a salvo de cualquier proceso de acción que cuestione su legitimación. La función de legitimación, del Derecho, puede ser calificada como positiva en la medida que esto contribuye a la justificación de la acción social⁸. “La acción social es una acción

⁸ Weber propone el estudio de la acción social a través de la sociología comprensiva, entendiendo que este se encarga de investigar “cuál es el sentido que toda acción social implica; lo cual significa analizar por qué se produce una acción en un determinado contexto social, cuáles son sus motivos y causas su desarrollo y efectos” (Fariñas, 1989, pp. 125-126)



en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Fariñas, 1989, p. 126).

El Derecho ha impregnado cada vez más la cultura, de tal forma que los conflictos sociales son traducidos y explicados en términos legales, de manera que estos son aceptados, bajo la lógica que el derecho plantea, reafirmando su capacidad funcional. Por tanto, lo que hay que entender es el sentido subjetivo de la acción social⁹, que por supuesto responde a los que Weber llamaría “un contexto de motivaciones” (Weber).

Lo peligroso del derecho es que este en su mayoría es planteado como un concepto general, ignorando la realidad del comportamiento humano, sin embargo, el derecho está inserto en este contexto como uno de los elementos cruciales para interpretar los comportamientos, es decir acciones repetidas por los agentes normados (Bourdieu, 2000, pp. 191-192). Razón por la que Funktionsbegriff, define que las funciones generalmente son definidas como: “(...) las prestaciones causales que son necesarias para el mantenimiento de una unidad supra ordenada, de un organismo, de una cultura, de una sociedad o de una organización...” (Funktionsbegriff, 97).

Lo que nos lleva abordar un conjunto de máximas de comportamiento, que en este caso las funciones del Derecho proponen como unidad de un orden legítimo, formulando modelos de conducta. En palabras de Bourdieu afirma “que la constitución del campo jurídico es un principio de constitución de la realidad: los hechos jurídicos son una construcción jurídica, el Derecho

⁹ Weber la define “...en virtud del significado subjetivo que se le adjudica por parte del individuo (o individuos) actuantes, toma en cuenta la conducta de los otros, y es orientada por ella en su curso” (Weber en Schütz, 1993, p.45)

Es decir, la definimos como aquella conducta que se forma a partir de una vivencia producto de la asignación de significados. (Dukuen 2)



construye su propio objeto”¹⁰ (Bourdieu, 2000, p. 191). El Derecho crea su propio campo de acción que ocupa y crea su propio terreno, pudiendo apreciarse el carácter estructural del Derecho. (Bourdieu, 2000, pp. 191-192)

Legitima lo que tendrá que ser considerado formalmente como una verdad, impide el desarrollo de las realidades caóticas de cada conflicto social, lo cual a nivel operativo impide la atención de cada uno de los elementos que integran este conflicto, en principio entonces el Derecho formula la realidad que quiere atender, definiendo así sus fines, y delimitando las necesidades que va atender.

(...) En síntesis, la función positiva puede ser definida como aquella tarea o conjunto de tareas desempeñadas por un elemento, objeto de análisis funcional, que resultan armónicas o útiles para el mantenimiento de una estructura social y/o los proyectos de acción de determinados actores sociales. (Corvalán, 2014, p. 43)

Por otra parte, el criterio respecto a la función negativa, aborda el concepto de disfuncionalidad, en lo referente a una tarea que resulta incompatible con el mantenimiento de una estructura social. Por ejemplo, pese a identificar la ineficacia instrumental, y regularizarla con penas privativas de libertad que denoten una presencia considerable de personas privadas de libertad, deja de ser negativa para el derecho el momento en el que los sistemas carcelarios contribuyen a la criminalidad por la deficiencia en sus políticas de rehabilitación o seguridad, esto respecto a la instrumentalidad, pues la interpretación simbólica variaría en cuanto a la criminalidad.

¹⁰ (Corvalán)



La función de legitimación del poder social pese a no ser una función general del Derecho se encuentra relacionada directamente con la función simbólica por lo que, profundizaremos en su análisis, ya que como ha podido apreciarse la acción social juega un papel particular en la definición de un amplio catálogo conceptual que rodea la funcionalidad del Derecho. Por tanto, cuando nos referimos a función de legitimación del poder social:

(...) Se entiende como aquella tarea desempeñada por el Derecho consistente en dotar de consenso, legitimar las acciones llevadas a cabo en su nombre, pues como señala Chevalier y Loschak en relación al Estado no basta recurrir a la coacción, los conflictos también se previenen impregnando en los espíritus la creencia en lo justo y el orden político existente (...) (Corvalán, 2014, p. 55)

Según Garzón Valdés se debe partir de la diferenciación propuesta por Habermas, así como por Luhman respecto a los términos legitimación y legitimidad, se estipula que la legitimación de una norma, independientemente de las herramientas internas de un Estado, en la producción de una norma, se remite a la legitimidad alcanzada en las masas. Es decir, las consecuencias de la permanencia de una norma en el tiempo son producto de la aceptación de las masas (Garzón Valdés, 1990, pp. 13-28).

El consenso de quienes participan en el proceso comunicativo, es decir los miembros de la sociedad son quienes juzgan la validez y permanencia de una estructura social y política, por ello el Derecho, utiliza como estrategia la legitimación social, pues así se crea subjetivamente un criterio colectivo respecto a la legitimidad de determinada norma, es decir este consenso estará condicionado una situación ideal predeterminada por el Derecho, configurándose así la eficacia del mismo (Garzón Valdés, 1990, pp. 13-28).



Lo preciso es identificar parámetros básicos para el análisis del Derecho, esencialmente por que de manera independiente al conjunto de procesos que se manejen a nivel interno, por parte de un Estado para construir un ordenamiento jurídico y dotarle de legitimación, está la legitimidad que empañe al mismo. Entendiendo que la función simbólica del Derecho parte, de una presuposición que unifica ambas categorías.

La utilidad de esta identificación de parámetros entre el análisis del Derecho, y el estudio de su función de legitimación social, será evitar que este análisis caiga en criterios ideológicos del positivismo. De modo que la utilización de métodos causalistas en el ámbito de las ciencias sociales no es posible ya que cierto determinismo ontológico impediría la explicación de las diversas causas sociales, que producen el efecto funcional del Derecho (Alcover, 1993, p.51).

Reducir la legitimidad a una mera legalidad será la razón de la función simbólica y su operatividad. Se interpreta erradamente el concepto propuesto por Luhmann, quien plantea que la legitimidad del Derecho se agota en la aceptación y convencimiento generalizado de la validez del Derecho, por supuesto, que la referencia resultaría insuficiente, mientras no agreguemos el carácter simbólico que rodea al sistema.

Luhmann parte del concepto de sistema social al que define como “una conexión de sentido entre acciones sociales... que se remiten entre sí y pueden delimitarse frente a un ambiente de acciones no pertenecientes (al sistema)” (Luhmann, 1995, 115). Esta conexión está dada precisamente por un conjunto de símbolos que son transmitidos a través de diversas formas, aunque particularmente a través del Derecho.



La legitimidad no puede ser resuelta como un proceso técnico o una cuestión meramente procedimental, sin identificar lo que existe en el interior de una teoría de sistemas, como menciona Bourdieu los diversos fenómenos que rodean al Derecho son aceptados pasivamente por las personas, convirtiéndose en una herramienta que manipula la percepción social (Bourdieu & Teubner, 2000, p. 153).

Entonces, sería como afirmar la autonomía del formalismo jurídico del mundo social, más o menos como una teoría pura del Derecho. La estructura de un sistema simbólico, detrás de la legitimidad, es decir el plano ético y moral del derecho, no puede disociarse de la legitimación del mismo, como ya ha sido analizado esto sería parte de las funciones positivas del Derecho (Bourdieu & Teubner, 2000, p. 153).

Como hemos mencionado la desaprobación de los valores que representa el Derecho no niega el reconocimiento y cumplimiento del mismo, ya que dicha relación será lo que permite a una norma ser eficaz, y no la adhesión a esta en particular. Lo que no puede dejarse de un lado es identificar cuáles son las condiciones históricas que sostienen el campo del poder que es capaz de influir y ser influenciado, por el universo del Derecho.

Es entonces donde la violencia simbólica, principalmente representada por el Derecho, a través de sus intentos por imponer como legítimas determinadas significaciones disimulando las relaciones de poder que se fundan en su propia fuerza. Maneja las representaciones de los y las ciudadanas, vinculando lo técnico a lo ético. Las diferentes modalidades del poder son representadas artificialmente por el Derecho (Bourdieu & Passeron, 2001, p.19).



Se exteriorizan condicionamientos, cubriéndolos bajo las teorías ideológicas de legitimidad, ocultando las relaciones de poder que las fundamentan. Finalmente comprenderíamos cómo llegamos a la cuestión que vincula a la función de la legitimación del poder social con la función simbólica del Derecho, ya que permite delimitar el estudio a los mecanismos mediante los cuales los discursos jurídicos estatales, logran unificar legitimación con legitimidad del sistema jurídico (Bourdieu & Passeron, 2001, p.20).

Desde este punto de vista, la función de legitimación, permite la justificación del poder, encarnado por un sujeto histórico (hombre-blanco) que representa, y dispone de él, ejecutando cualquier tipo de decisión. Podrá ampliarla o disponer de ella a su gusto, utilizando al Derecho, para conseguir consenso sobre estas decisiones, y estableciendo además cuál es su alcance (Corvalán, 2014).

Para Fariñas quien no niega la posibilidad de un concepto sociológico sí que señala que La coacción debe entenderse como un elemento externo de la definición conceptual de Derecho, a través del cual se garantiza la realización efectiva del mismo y que permite diferenciarlo de otros órdenes sociales extrajurídicos como la convención, el uso y la costumbre (1991: 167). Para Fariñas, el concepto comprende dos elementos: a) el de reconocimiento o de la legitimidad de un orden jurídico, que tiene lugar cuando los individuos reconocen un orden como legítimo orientando hacia él sus comportamientos empíricos, y b) el elemento de la coacción, entendida como garantía de la legitimidad y de la eficacia del orden jurídico. (Corvalán, 2014, p. 60)

Liberando al concepto de Derecho de su noción tradicional, respecto a la dimensión de Estado-Nación, pues este involucraría, ignorar la presencia de procesos políticos y acciones sociales, como una superestructura que lo maneja. Esto, admite que dentro del pluralismo que



pueda proponer la sociología respecto al Derecho, abordaremos exclusivamente la noción estatal (las elites que conforman esta superestructura) del mismo lo cual nos obliga a identificar las propuestas teóricas de Bourdieu para comprender la función simbólica del Derecho.

De esta forma al relacionar un proceso de origen del Estado, y sus percepciones políticas identificaríamos la relación estrecha con una concentración de capital simbólico. De modo que el ejercicio de su poder resultar de reconocer la influencia que determina una conciencia social (elitista), así como la vida cultural, lo que impone el Derecho es la producción y reproducción de estas condiciones sociales a través del ejercicio del poder.

Es así que a partir de los estudios realizados por Bourdieu definimos a la función simbólica del derecho como aquella practica que resulta de la dimensión material (legitimación) y las dimensiones simbólicas (legitimidad), que enfatiza en la consecución de la unidad de la vida social a partir de la eficacia del derecho. (Fernández, 2013) La cuestión respecto a la función simbólica del derecho es que precisamente los efectos que resultan de la misma es alcanzar la eficacia a partir de la difusión de determinados mensajes.

La cuestión crítica es que estos mensajes no siempre se traducen en la protección de bienes jurídicos o la preservación de un derecho fundamental, más atienden la prevención de la conquista de comportamientos indeseados. Ahora bien, las representaciones mentales cuando son interiorizadas, pueden ser explicadas a través de dos pasos lógicos que vinculan las cosas y los cuerpos. (Gutiérrez, 2004, p.291).

Según Bourdieu la realidad social existirá de doble manera como se ha mencionado entre *habitus* y cuerpo esto genera una complicidad ontológica, que se constituye como fundamento de



un discurso legal que vigila y sanciona, esto nos permite comprender de mejor manera como el Derecho a través de su función simbólica crea una realidad social. “(...) se instituye entre dos ‘realidades’, el habitus y el campo, que son dos modos de existencia de la historia, o de la sociedad, la historia hecha cosa, institución objetivada, y la historia hecha cuerpo, institución incorporada.” (Bourdieu, 1997, p.9)

Esto es interpretado por Weber quien afirma que el Derecho es el principal instrumento en el que estas realidades son instituidas pues representan “el monopolio de la violencia simbólica legítima, es decir, el poder de constituir y de imponer como universal y universalmente aplicable dentro de una determinada "nación", mejor dicho, dentro de las fronteras de un territorio dado, un conjunto común de normas coercitivas” (Bourdieu y Wacquant, 1992, p. 112). Además de que el Estado lo manifiesta en coacción física a partir de la pena.

Por tanto todo este proceso de realización de la función simbólica del Derecho, ocupa la construcción legítima de la apropiación del capital simbólico, mismo que se manifiesta en violencia simbólica, lo cual no es palpable o directamente identificable porque al contrario de la función instrumental que cambia una situación o intenta cambiarla a partir de la protección de un bien jurídico, obedece a una lógica funcional que moviliza todo el capital acumulado a la creación de una conciencia reconocida como legítima, debido al rol que cumple el poder estatal a partir del Derecho. (Hassemer, 1995)

Esto no es abstracto, de modo que cuando analizamos sus efectos, la tentación de abordar la criminalización de la mujer en el derecho penal, podría sustentarse en esta hipótesis, más cualquier fomento funcionalista del derecho en especial el simbólico, puede ser identificado en



los declarados fines del Derecho positivo, en casos concretos en los que detrás de esta función simbólica, existen un entramado de valores culturales y orales, que simbolizan determinado estilo de vida, muy común en el derecho penal de tal forma que su éxito se traduce en una prohibición penal, pero además una realidad aparente o ficticia que manipula, emotivamente la percepción de la sociedad respecto a un fenómeno. (Hassemer)

1.3 La estructuración del poder punitivo del Estado

El aumento de respuestas legales a las demandas sociales puede sumarse a la estructura del *ius puniendi* a partir de las inagotables variaciones que pueden generarse del uso simbólico del Derecho, conforme el modelo de Estado. Es así que un modelo estatal de tipo conservador otorga especial importancia al derecho pues, es utilizado para ocultar la “realidad inaceptable” a partir de normas que la regulen, pero, y sobre todo a partir de verdades impuestas coercitivamente. Esto es neutralizado a partir de la trampa de la legitimación como sinónimo de legitimidad que se presume del Derecho (Villegas M. G., 2012).

La materialización de esta trampa serán las formas en las que el Estado ejerce control a partir del derecho penal. Estas formas actuales y diversas se localizan en el poder punitivo, traspasando la estructura estatal y la sociedad, a través de jerarquías. Lo que representa el poder punitivo es precisamente la imposición del castigo y el ejercicio de la fuerza a partir de la prerrogativa de un poder legitimado, reconociendo a esta jerarquización.

La opresión que difiere de la estructuración de un poder que tiende a inmovilizar o disminuir un grupo, es característico del poder punitivo ejercido por el Estado (Young, 2000, p. 77). Esta forma de ejercer el poder tiende a clasificar a los individuos de una sociedad a la vez que



define y designa su propio destino. Elabora categorías que permiten identificarlos, es entonces que tendemos a criminalizar incluso en la cotidianidad, pues la simbología del derecho penal y la continua lucha totalizadora por la homogenización e individualización busca impregnarse en las estructuras sociales (Young, 2000, p. 86).

Esta técnica es utilizada por algunos países de Latinoamérica, como la herencia occidental, que a través de una forma política que nace en las instituciones cristianas, da origen a un código de moralidad y ética. Mismo que se extiende por todas las relaciones, satisfaciendo una relación de poder eminente que se ordena bajo el precepto implícito de que habrá que sacrificar al infractor de dicho código por la preservación del rebaño (M. Foucault). Lo dicho, es distinguido por el poder soberano, y a su vez será juzgado.

El poder punitivo es asumido como la orientación a la salvación, pero esto no puede adjudicarse estrictamente como un poder eclesiástico, además la afirmación puede tornarse injustificable el momento en el que abordamos teorías del Estado moderno, por esto se afirma que a partir de una estructura muy sofisticada la moral a transversalizado el derecho, a través del sometimiento. De la misma forma los castigos han sido sofisticados, de tal forma que los mecanismos específicos puedan integrarse sin ser percibidos (Foucault M., 1988, pp. 7-8).

El contexto en el que se traduce dicha salvación, será salud, bienestar, seguridad, protección, a lo que nosotros le nombraríamos *paternalismo*, no es exagerado, ya que esta analogía permite explicar lo que en palabras de Dworkin y John Rawls, es reconocido cómo un *paternalismo justificado*, lo cual bordea el límite de una dictadura. Esto será importante para la definición de una estructura jurídica, moral y política que integra el Derecho Penal (Alemany, 2007, p.37).



Garzón Valdés propone el análisis de la teoría de *paternalismo justificado* a partir de dos condiciones necesarias; la primera respecto de la prohibición u obligación. respecto a la constatación de una incapacidad básica del sujeto tratada/o paternalistamente, lo cual podría considerarse una afirmación peligrosa, pues consientes de la influencia liberal que se identifica en dicha afirmación y estudio, el destinatario o destinaria de dicha acción no resulta ser la persona que en la norma se presume protegida (Valdés G., 1988, p.156).

La segunda se referirá a la finalidad de evitar daños físicos, psíquicos y/o económicos al destinatario de la norma o en su defecto de la acción paternalista. Aunque claramente puedan existir casos en los que realmente llegue a ser justificado se debe indagar en esta analogía el poder paternal y el poder político, que aparece entorno a la justificación. Esto determinará una conciencia de deberes positivos y negativos dentro de un modelo paternalista (Valdés G., 1988, p.156).

Partiendo del caso que rodea a la penalización del de tráfico de drogas, utilizado por Garzón Valdés para ejemplificar su teoría, aunque se niegue la finalidad moralista, ni siquiera al analizar la instrumentalidad de la norma se puede afirmar que la penalización del tráfico de drogas beneficia al consumidor, tanto como beneficia la moralidad de una sociedad, traducida en prohibición a partir de estructuras cognitivas que son creadas por el Derecho Penal como parte del proceso de criminalización (Alemany, 2007, p.37).

El discurso criminológico plantea un aparato, cuyo funcionamiento es analizado preservando un orden natural, pero es no es un dato impuesto al azar, una mirada indiscreta a la estructura del poder punitivo, no permite visualizar como ha sido propuesta la criminalización. Históricamente se han fundado una idea que configura las relaciones sociales a partir de la



conceptualización de determinadas identidades, y como consecutivas de ellas las consecuencias de su criminalización (Quijano A., 2014, p. 203).

Las relaciones de dominación, son asociadas a jerarquías sociales que reafirman roles, este patrón de dominación sin duda es colonial, por esto impone la criminalización en torno a conceptos como la raza o el fenotipo criminal. Diríamos que en estos términos el poder colonial, manifestado el ejercicio punitivo de la fuerza estatal propone una clasificación social básica, que en este caso permitiría medir la criminalidad o en su defecto predecirla (Quijano, 2014, p. 203).

Esto permite al Estado la naturalización de una relación de dominación, que significa, además, la difusión de ciertas prácticas basadas en un expansionismo colonial. De tal forma que se legitiman históricamente las imágenes de la criminalidad. Se ha ido articulando bajo una perspectiva que por muchos años no fue discutida, el Derecho representa un proceso fuerte de simbolización y legitimación de la fuerza, es asumido como una propuesta univoca de este poder colonial (Quijano A., 2014, p. 285-286).

De esta forma, la teoría de Hobbes que sostiene, el ejercicio de la autoridad, debido a un acuerdo social como respuesta a los componentes dispersos y desorganizados, es sustentada y mantenida por un orden adecuado al neoliberalismo que además de limitar las innumerables variables que confluyen en la criminalidad, materializa este acuerdo en un poder punitivo que mantiene su funcionalismo de modo estructural, de manera que su principal elemento de control, es ordenarlo en torno a un ejercicio legitimado de la fuerza, a través de castigo y sanción, lo cual describe el poder punitivo (Quijano A., 2014, p. 285-286).

De hecho el desafío será estar al tanto de como históricamente la escuela clásica liberal ha implantado cuestiones relativas al poder punitivo, planteándola como una ideología de control



social, entendiendo al termino *ideología* como lo plantea Marx, como una falsa conciencia, que legitima lo que realmente es ejercido para atribuir funciones ideales a través de la cual el poder punitivo se ejerce a la vez que oculta las grandes contradicciones de un sistema penal aparentemente garantista que argumenta, la expansión de su poder punitivo (Santamaría, 2013, p. 9-10).

En esto se basa el positivismo penal, sosteniendo teóricamente que existen dos tipos de personas en una sociedad, por una parte quienes ejercen sus derechos en el marco de la ley por otra los que han decidido vulnerarla o pretenden hacerlo por lo que estas últimas son asumidas por el sistema penal como “enemigos”¹¹ ante esto llega a justificarse la privación de sus derechos como resultado de una renuncia a la convivencia presuntamente civilizada (Santamaría, 2013, p. 9-10).

Es así como la exclusión se manifiesta a través de la privación de libertad:

El funcionalismo ha resucitado la teoría del peligrosísimo, propia del positivismo penal, por el que se debe usar el derecho penal para prevenir infracciones por medio de medidas de seguridad contra las personas que, natural o socialmente, podrían cometer infracciones. (Santamaría, 2013, p. 11)

Las constituciones modernas intentan limitar la línea de ejercicio del poder punitivo, a la vez que promueven la tipificación de delitos que de configurarse podrían vulnerar derechos humanos.

Esta es la razón por la que el derecho internacional incluso ha legitimado el uso del derecho penal. Tenemos el caso de la Convención contra la tortura y otro tratos crueles, inhumanos o

¹¹ El derecho penal simbólico define que de hecho la coacción constantemente ejercida entre grupos es producto de una estructuración social bajo el entorno de valores considerados aptos para la supervivencia dentro de un sistema social, pero dicha lucha entre los miembros no está muy aleja del estudio de lucha de clases pues introducirse en dicha teoría de lleno, lleva abordar elementos de carácter político que son introducidos en el tecnicismo penal, lo que en definitiva es estudiado por la criminología crítica. (Ruiz, 2006, p.28)



degradantes, así mismo la Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio. Por puesto también tenemos algunos instrumentos a nivel general como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, esto, se reflejará en un marco de constitucional (Santamaría, 2013, pp. 11-12).

Sin embargo, esta idea vaga de un sistema penal legitimado por una teoría de derechos humanos, será la razón, de una tendencia actual entre una discusión legitimadora del derecho penal y el poder punitivo que confronta el ejercicio de determinados derechos planteando por cierto una posición crítica pues se permite utilizarlo de tal forma que se expande en base a teorías emancipadoras (Santamaría, 2013, p. 14).

Desde la emancipación, el discurso de los derechos humanos tiene que encaminarse a diseñar técnicas de contención de un poder inmanentemente violador de derechos, hacerlas vinculantes y eficaces para lograr dos fases en la evolución del derecho penal: la una, minimizar al máximo su utilización y, la otra, abolirlo. (Santamaría, 2013, p. 14)

En tal caso Ramiro Ávila Santamaría, afirma que sería mejor definirlo de esta manera caso contrario se derivarían consecuencias fatales del ejercicio del poder punitivo del Estado, que apuntarían más bien al resultado de una condición básica y necesaria para su uso excesivo.

Dos consecuencias fatales de la apuesta por el funcionalismo o maximalismo penal. La primera se relaciona con la reducción del problema de la seguridad ciudadana al delito; la segunda, con la inutilidad del derecho penal como herramienta para abordar un problema social. (Santamaría, 2013, p.19)

Esto se relaciona con lo que teóricamente ha sido definido como el sentimiento de inseguridad ciudadana y el maximalismo penal, se han convertido en la fuente estructural del poder punitivo, tanto a nivel formal como social. Esto da lugar a una de las formas en las que se manifiesta el



funcionalismo simbólico del derecho penal, a través del ejercicio del poder punitivo (Santamaría, 2013, p. 26-27).

Se debe agregar una conciencia generalizada como un soporte del poder punitivo, esta es creada respecto a prohibiciones y permisiones, se fundamentará, en prácticas discriminatorias de origen moral ya que a nivel social los espacios en lo que se encarna el poder punitivo de no ser formal será moral. Esto ha sido estudiado como un efecto del funcionalismo penal (Santamaría, 2013, p. 26-27).

La criminología crítica ha identificado este fenómeno, mismo que se denomina *teoría del etiquetamiento*¹² fue tratado por Howard Becker a partir de su obra *los extraños* en el que a partir de un estudio sociológico plantea como las circunstancias determinan el momento en el que variados grupos de individuos imponen reglas sociales o a su vez las incumplen (Hikal, 2017, p. 3).

A esto debe agregarse una emoción generalizada respecto a lo correcto a partir del mensaje que transmite una regla acordada, será lo que define a un marginal definiendo el proceso que da lugar a la criminalización. El ejercicio del poder punitivo dentro de un sistema penal como el que hemos descrito se alimenta del dislocamiento de tres pilares fundamentales de un estado constitucional, estos son: dignidad, igualdad y la libertad (Santamaría, 2013, p.25).

¹² La teoría de las etiquetas “señala que lleva consigo un proceso o una serie de pasos; a saber: la sociedad genera expectativas de comportamiento; este (no desviado aún) se da en él; dicha conducta se rotula como «desviada».” Por supuesto esta, no es una cualidad en sí mismas sino producto de la causalidad de la aplicación que los demás hacen de las reglas y las sanciones que corresponden. Es decir, esta categoría según Becker encuentra su justificación en los hechos que se desprenden del acto, pero además de las reglas que se vulneran será más importante quien lo hace y contra quien lo hace, así como también la reacción de los demás. (Hikal, 2017, p. 3)



El derecho penal se ha planteado como una formula irracional y en gran medida inquisitoria, el problema no está en la lógica selectiva, pues sería irracional proponer que el sistema penal eficientemente persiga toda conducta que ha sido tipifica, contra todos los miembros de una sociedad, de hecho, atentaría contra los principios que han de regir constitucionalmente un sistema penal garantista.

El problema radica en la intervención irracional y discriminatoria, pues la criminalidad tiende a ser relacionada con las personas más pobres, tomando en cuenta que dentro de este grupo ha de verificarse una variable que también delimita a este proceso, la presencia de las mujeres. Esto como producto de un proceso de selección completamente entorpecido ha de poblar las cárceles con personas que son definidas socialmente como excluidas (Zaffaroni, 2005).

Entonces la teoría de las etiquetas definida por Becker comprendería la concepción de los demás a partir de la lógica de la criminalidad, como una de las bases de las relaciones de poder, que además de un sistema penal del enemigo, que no ha sido superado, deberemos lidiar con que este construya amistad suficiente con el patriarcado. De forma que el poder punitivo es utilizado como una herramienta de adoctrinamiento y subordinación (Zaffaroni, El discurso feminista y el poder punitivo).

De tal forma que la lucha contra la discriminación debe incluso reconfigurar el uso del Derecho Penal, pues es de esta forma como un nexo errado, entre legitimación y legitimidad es asimilado por la sociedad, efectivizándose la funcionalidad simbólica del derecho penal en la promulgación del mismo a través de una neutralización del discurso hegemónico, pues el poder es legitimado, gracias a tres pilares que ya hemos abordado en líneas anteriores, el patriarcado, confiscación del



conflicto a la víctima, y la búsqueda de la verdad por medios violentos (Zaffaroni, El discurso feminista y el poder punitivo).

1.4 Antecedentes de un estudio feminista del Derecho

“Los seres humanos nos vemos enfrentados a un hecho básico. que es idéntico en todas las sociedades: la diferencia corporal entre mujeres y hombres. específicamente la relativa a los genitales. La cultura es resultado de la forma como interpretamos esta diferencia. De cómo la simbolizamos [...]; pero también la cultura es una mediación: un filtro a través del cual percibimos la vida. Nuestra conciencia y nuestra percepción están condicionadas. ‘filtradas’. Por la cultura que habitamos”¹³
(MARTA LAMAS, “Cuerpo. Diferencia sexual y género”).

Para poner en manifiesto el cruce patriarcal en el discurso legal habría que analizar todo el ordenamiento jurídico minuciosamente, sin embargo es posible plantear a partir de análisis históricos, bibliográficos y una metodología caprichosa, como la de Alda Facio, la influencia simbólica que tiene el sistema patriarcal en el derecho, pues es importante analizar el espíritu del Derecho cuando se trata de levantar actas de un sistema moderno en el que el Estado a sabiendas de la posibilidad de ampliar un reconocimiento conceptual del análisis crítico feminista que permita un esquema hilemórfico de inclusión, afina su discurso legal a estereotipos de género que progresivamente se ve reflejado en desigualdad estructural, lo que revela consecuentemente una violencia simbólica.

1.4.1 La simbología del sistema patriarcal en el Derecho

¹³ Citada también por Verónica Spaventa en “Género y control social” (Spaventa, 2018, pp. 213-234)



La lógica del Derecho ha sido planteada de diversas formas, a la vez que en cada una de ellas invita a comprender las diversas dimensiones en las que acciona. Sin embargo, en todas ellas asume un trabajo que vincula al sistema jurídico con una razón de occidente, basado en el adoctrinamiento, a través de una estructura básica, orientada a la institución de la vida, anulando la diversidad y programando patrones biológicos como una representación univoca de la realidad social que debe existir (Facio, 1999, p.20).

Alda Facio desarrolla una teoría crítica al derecho afirmando que; aunque muchas de las críticas al derecho lo han hecho desde el feminismo, son varios los argumentos que pueden llevarse a cabo fuera de esta lógica. Sin embargo, no dejarían de evidenciarse relaciones de poder, en base al género que consecuentemente podría llegar alterar el orden patriarcal que define al Derecho, y plantea a un sujeto de derecho hombre, blanco, de clase dominante (Facio, 1999, p.20).

Los estudios feministas, deben ser concebidos como un pensamiento vivo y no auto metabólico en palabras de Cecilia Amorós, de esta forma comprenderíamos que es cada vez más grande la necesidad de registrar aquellos canjes que quiebren a un sistema patriarcal. No hay nada que haya introducido de manera más profunda y patológica el sexismo de un sistema patriarcal, que el Derecho demostrado las laminaciones y agudas líneas de un complejo campo jurídico que presenta de pronto condiciones de una perversa desigualdad (Amorós, 1991, p. 24).

Sobre todo, han de surgir aquellos problemas sociales a nivel de práctica social que reproducen reglas, como formas de representación de un poder masculinizado. Cada cual traduce y elabora su concepción del mundo a través de claves e instrumentos que le son otorgados pues, como hemos revisado sería muy ambicioso considerar que nuestro inconsciente actúa a partir de



la libertad que asumimos y reflexionamos, mas no de la que se nos es permitida (Amorós, 1991, p. 25).

A partir de esta malformación teórica de los derechos humanos el sistema patriarcal, ha definido conceptos de desigualdad a partir de una aparente igualdad de género lo mismo que ha de limitar determinados ajustes valorativos en el discurso legal. Hemos revisado como Alda Facio propone, una definición de la igualdad a partir de la desigualdad lo que nos ayudaría a comprender, el curso teórico de las mujeres en un sistema que las ha adoptado como dependientes y obedientes (Amorós, 1991, p. 25).

Prácticamente la discriminación ha sido asumida sin reproche pues, no se ha puesto en cuestión la legitimidad del Derecho. El sistema heteropatriarcal ha sido audaz aprovechando las entrañables herramientas que dé el surgen, como simbología dominante, simbología que el Derecho a adoptado por años, frente a la liberación de las mujeres. La ocupación de espacios públicos, es una lucha que el Derecho a nivel formal ha cubierto, pero no puede ser asumido como una conquista, lo que no ha sido del todo satisfecho, de forma que la representación no será lo mismo que la exposición (Amorós, 1991, 25-27).

El conjunto de rasgos que presenta el sexismo suelen ser considerados para una sociedad desgarrada por las diferencias. Lo dicho solo será posible a través de una medida que asume el pacto social entre hombres, pues serán el sujeto de un realismo universal, esto con el significativo apoyo de una estructura patriarcal se verá reflejado en cuestiones formales, estructurales, políticas y culturales, satisfaciendo un sistema de dominación, que actúa operativamente, distribuyendo cada particular definición, adjudicando a las personas como preceptos formales, lo que realmente son condiciones morales (Amorós, 1991, 25-27).



Se verifica como a partir de una ideología amplia y satisfecha de manifestaciones que proporcionan un campo de acción dominante, la ilusoria idea de un Estado de Derecho para todos y todas, en la complejidad de una realidad androcéntrica, han sido compensadas por un discurso de derechos humanos, sin embargo la virtual pertenencia de un poder al aparentemente opresor, distribuye las prerrogativas que han de definir los límites, derechos, y deberes a partir de un conjunto de normas estereotipadas por género (Amorós, 1991, p. 27).

Será entonces, que el reparto aquellas prerrogativas no alcanza la realidad de las mujeres, ejemplos formales de ellos no dejará de ser el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El derecho de familia define con claridad, y disimulo una realidad inventada para las mujeres, en el espacio privado y el espacio público, propia además de una razón liberal, del Derecho. (Amorós, 1991, p. 27).

Es posible adoptar el planteamiento de Alda Facio en lo que respecta a los componentes de un fenómeno legal, como es definido por la misma autora, debido a su carácter dialectico. Describan una fenomenología que está influida, determinada y definida por la constante manera de incidir en el derecho, esto de manera sistémica pues de la misma forma están relacionados entre sí. El primer componente; será el componente formal, mismo que es definido, como norma o ley en sí misma, a partir de un concepto positivista del derecho (Facio).

Un texto legal no puede ser analizado sino a través de su desarrollo en la historia por ello hemos de identificar como la mujer es considerada, un elemento que configura la propiedad de los hombres. Así mismo el contexto económico delimita la posición social de subordinación en el que la mujer será clasificada. No podría entenderse de otro modo, además de un razonamiento que



administra las libertades de las personas a partir del reconocimiento de su ciudadanía las mujeres mantenían un status que reposa en la dominación que estipula el código de la época.¹⁴

De la misma forma símbolos como el *marianismo* y el adoctrinamiento de la libertad sexual y el ejercicio de los derechos reproductivos son determinados por una sacralización del cuerpo de la mujer, de esta forma el ordenamiento jurídico¹⁵ arrastra la influencia cristiana sobre el cuerpo. La intervención estatal está definida por un por la abolición de una dualidad entre cuerpo y alma, a sabiendas que el alma no caracteriza a un objeto las mujeres no serían consideradas sujeto dentro del Derecho.¹⁶

En el caso ecuatoriano, el ordenamiento jurídico representa la influencia romanista, adoptando instituciones que hasta la fecha no han superado, el entendimiento conceptual androcéntrico que, afirma el orden del mundo a partir del control de las esferas de experiencia humana respecto al género. La herencia de instituciones del derecho romano que representan efectos de leyes construidas a partir de la perspectiva del hombre.

De tal forma las necesidades que serán evidenciadas permean instituciones sociales que a su vez ha sido reafirmadas por el Derecho civil, por ejemplo, aparentemente propone leyes genéricas, pero no se puede ignorar que “...las leyes, aunque no lo digan explícitamente, en su

¹⁴ Ley 119: Si una deuda ha tomado un hombre y si él ha dado por el dinero su esclava, que le ha dado hijos, el amo de la esclava pesará la plata que el negociante había pesado, y librára su esclava.

Ley 129: Si una casada es sorprendida yaciendo con otro hombre, se los atará y se los arrojará al agua. Si el marido deja vivir la esposa, el rey dejará vivir a su servidor.

¹⁵ Hammurabi, 2019)

¹⁶ Ley 145: Si uno tomó una esposa de primera categoría y si esta esposa no le dio hijos, y se propone tomar otra mujer (suggetum), tomará esta otra mujer y la llevará a su casa, pero no será igual que la esposa de primera categoría.

Ley 146: Si uno tomó una esposa de primera categoría y ella dio una esclava a su marido, y si la esclava tuvo hijos, si luego esta esclava es elevada (en el aprecio del esposo) a igual categoría que la patrona por haber tenido hijos, su patrona no la venderá, la marcará y la tendrá entre sus esclavas.



inmensa mayoría parten de los hombres y son para los hombres, o para su idea de lo que somos y necesitamos las mujeres (...)" (Facio, 1991, p. 191).

La posición jurídica de la mujer es muy inferior al hombre. No sólo carece de capacidad para participar en las tareas políticas, sino que sufre graves limitaciones dentro de la esfera privada. En efecto no puede ejercer la patria potestas, ni puede tampoco-salvo particulares excepciones en la época justiniana ser tutora de impúberes y adoptar hijos. Igualmente le está vedado intervenir como testigo en un testamento, figurar en juicio por otros- postulare pro aliis-, entablar una acusación pública y contraer obligaciones en favor de terceros-intercedere pro aliis, en los términos del S.C Velejano, del año 46 de C.-. una ley Voconia, del 169 a.C., limitó su capacidad de suceder por testamento y limitado fue, así mismo, por obra de la jurisprudencia, su derecho de sucesión legítima o ab. Intestato. La mujer se halla siempre sometida a una potestad familiar: la patria potestas, si es filiafamilias; la manus, si es esposa y la tutela, si es sui iuris. La tutela de la mujer sui iuris, cualquiera sea su edad, tiene el carácter de perpetua, hasta que desaparece totalmente en el Derecho postclásico y justiniano.¹⁷ (Iglesias, 2002, p. 93)

Dentro de las normas jurídicas existen varios tipos de sexismo que representan los símbolos de un sistema patriarcal, según Iglesias refleja lo que en el Derecho Romano la mujer representaba para el sistema sin embargo a la fecha esto ha ido tomando nuevos rostros más, las manifestaciones de estas en el Derecho particularmente generan una situación que se traduce en androcentrismo. Este se servirá de una superioridad de lo masculino basado en la subordinación de lo femenino (Facio, 1992, p.77).

Lo mismo ha sido definido por Alda Facio como una situación que no podría darse sino "haciendo creer al sexo subordinado que esa es una función neutral y única" (Facio, 1992, p.77). Pero además de estas, está claro que existen otro tipo de manifestaciones que resultan casi

¹⁷ (Pareja)



imperceptibles, la sobre generalización y/o sobre especificación, la insensibilidad al género, el doble parámetro, el deber ser de cada sexo que será lo que se refleje a nivel estructural, y la dicotomía sexual, todos ellos tienen como efecto violencia simbólica (Pareja, 2008, p.18).

En el caso del modelo que es propuesto esencialmente como parte del deber ser de cada sexo, plantea una perspectiva que definirá lo que socialmente debe ser trasladado a una interpretación de lo “normal” y aceptable, sin embargo, a nivel formal el androcentrismo no solo se manifiesta a través de esto, sino que existen dos ramificaciones que delimitan la realidad de la mujer en el mundo jurídico (Pareja, 2008, p. 18).

Estas ramificaciones son; la misoginia y la ginopia, la primera responde a una manifestación de odio, cualquier sea su tipo, pero hacia la mujer, mientras que la segunda y más típica en el Derecho, pues será la que la invisibilización de lo mujeril es decir de su autonomía es adoptado por el ordenamiento jurídico de manera sutil, incluso como lo hemos dicho en líneas anteriores adoptando un discurso de libertades o el derecho a la vida, como es el caso de la penalización del aborto, o como son abordados los delitos sexuales en nuestro código integral penal (Pareja, 2008, p. 18).

Por otra parte, la sobre generalización, como ha sido abordada por Alda Facio, puede verificarse en los estudios e investigaciones, de alguna ciencia, que son llevados a cabo sin tomar a las mujeres como parte de las muestras, esto se verifica en las formas de socialización de estudios antropológicos que explican determinados fenómenos, pues la conducta del sexo masculino será válida para su estudio reflejando resultados finales generales, como si estos pertenecieran a ambos sexos (Olsen, 2009, p.138).



Es importante abordar la sobre generalización ya que al expresarse estructuralmente en el Derecho presumiría que efectivamente ha incluido a la mujer en una norma determinada. Es el caso del derecho a la igualdad, o el tipo penal del femicidio, estos rasgos se verifican en los periodos significativamente largos en los que las mujeres fueron excluidas de las practicas jurídicas, pero esto debe ser asociado también a las formas en las que las realidades de las mujeres no son valoradas por el Derecho.

Los estudios críticos feministas al Derecho han revaluado la idea objetiva, universal y racional que caracteriza al Derecho, aunque lleguen a identificarse con estos conceptos, la afirmación descriptiva realizada a partir de una dominación masculina, lo convierte en una parte de la estructura patriarcal como una manifestación ideológica de lo opresivo. (Olsen, 2009, pp. 138-150) La discusión respecto a la sobre generalización o la ginopia se refleja en la clasificación de conductas, y procesos de interaccionismo simbólico que definirán condición a las mujeres de manera directa o indirecta.

Es más apropiado hablar de ginopia, dentro del análisis del discurso legal, ya que existen dualismos que el sistema ha planteado desde épocas platónicas, lo moral y lo inmoral, cuerpo y alma, racional y lo irracional, de esta forma también fue planteada la dualidad del hombre y la mujer, a partir de la sexualización y por supuesto la jerarquización, es así como “el derecho se identifica con el lado masculino de los dualismos” (Olsen, 2009, p.138).

La cuestión al respecto es que estos no solo se manifiestan nivel descriptivo, sino además normativo es decir los hombres no solo son racionales o activos y las mujeres irracionales o sumisas, sino que además “deberán ser” porque la identificación sexual de la norma definirá objetivamente estos aspectos que aparentemente alcanzarían el plano subjetivo.



Dicen que el sistema legal tiene una masculinidad penetrante. Toda la estructura del derecho –su organización jerárquica, su estructura procesal litigiosa y adversarial y su regular inclinación en favor de la racionalidad por encima de todos los otros valores– lo define como una institución fundamentalmente patriarcal. (Olsen, 2009, p. 150)

Hemos descrito el conjunto de símbolos que conforman el sistema patriarcal y son reflejados en el Derecho, sin embargo, no podemos dejar de analizar como el Derecho en sí mismo es uno de los principales símbolos de la dominación patriarcal, es preciso identificar la elección en la que se ha concentrado la jerarquización del dualismo, una relación que ha de asumirse como impersonal o anónima toma cuerpo a través del derecho, pues la relación de poder que se identifica es personalizada. (Bourdieu, 1980, p. 188)

El derecho se apropia de las actividades más corrientes, y transmite conceptos negativos entorno a ellas de manera simbólica. Pero además dotan de legitimidad, con la duda expuesta de quien presume un “capital simbólico” pero además “religioso” de forma que el orden de la cotidianidad es estereotipado mediante la ritualidad de penas, sanciones, o permisiones que produce el derecho simbólicamente (Bourdieu, 1980, p. 188). “El argumento básico de Foucault es la idea de que el ‘sexo’ no existe con anterioridad a su determinación dentro de un discurso en el cual sus constelaciones de significados se especifican, y que por lo tanto los cuerpos no tienen ‘sexo’ por fuera de los discursos en los cuales se les designa como sexuado”¹⁸ (Moore, 1994, p.12)

Las relaciones de poder que abarca el Derecho, son relaciones que surgen de la jerarquía planteada a través del sometimiento del hombre y la mujer a un dualismo, en el que la mujer es excluida o a su vez sometida material o formalmente, no surgen como categorías simétricas

¹⁸ Citado por Danilo Caicedo Tapia en Género y Diversidad, Heterosexualidad y heteronormatividad: Análisis discursivo general con énfasis en el entorno ecuatoriano, en revista umbral; revista de Derecho constitucional, p.123
(Tapia)



comunes en diferentes conceptos binarios planteados por teorías de la ética, si no en virtud de un reparto cualitativo y jerarquizado.

La mujer asume su rol, contemplando estereotipos de género que, en determinados casos, la obligará a ser madre dentro una estructura familiar tradicional. Entre otras cuestiones el sistema patriarcal de manera predominante influye en la producción doméstica, que delega a la mujer exclusivamente tareas relacionadas con el cuidado y limita su transición en el espacio público.

Es así que la autonomía como acción universal, contempla el interés masculino. A partir de las teorías del bio poder de Foucault identificamos como el capital acumulado por determinado tipo de hombre en una sociedad le permite ser insertado en un sistema que forja los cimientos de un Estado de derecho, se regulariza el funcionamiento de un efecto histórico en el que el poder centrado en la vida, y la normalización de la misma a través de los diferentes dispositivos del poder, alcanza su objetivo de alianza entre lo privado y la vida que rodea la civilización del cuerpo femenino. (Posso, 2009, pp. 53-54)

1.4.2 La acción del poder simbólico del Estado sobre el cuerpo de la mujer

Hemos revisado como el derecho sirve de instrumento dentro de un modelo patriarcal, que coloca a la mujer en procesos de subordinación y desigualdad. Mas esto no ha sido lo más alarmante, ya que serán aquellas relaciones asimétricas de poder que traspasan el cuerpo de la mujer instaurando estereotipos a través del Derecho, el caso ecuatoriano no será una excepción.

La penalización del aborto no ha sido la única forma en la que se ha materializado las correspondientes características que transforman a la norma en una incubadora de violencia hacia la mujer. Esto es parte nada más de un tormento más grande a lo que varias autoras han



denominado, una matriz colonial androcéntrica de poder que es ejecutada sobre el cuerpo de la mujer.

Se sostiene, por otra parte, que la división dicotómica entre sexo y género nos permitiría comprender aquella división jerarquizadora de roles sexuales, comprendiendo entonces, que el desarrollo de la legislación enfrenta un papel protagónico en la discriminación convirtiéndose en un ente de control que determina la calidad de vida de las mujeres. Las dos caras del sexismo como exponente del poder serán; la ginopia y el familismo, prerrogativas que confluyen en la creación del ideal de la mujer sostenida sobre bases de un presente régimen androcéntrico (Espinoza, 2012, p.93).

La estructura masculina que ha sido propuesta por el sistema patriarcal define la posición de desventaja de la mujer en tal virtud que la existencia misma es definida en base a una serie de formas que ha inventado el poder para reforzar la mística de la feminidad, y estructurar la superioridad masculina es así como las diferentes estructuras de poder han tomado el cuerpo a través del Derecho.

La dominación masculina será aquella matriz que se impone en la construcción del género, está a partir de conceptos socializados que parten de una legitimidad aparentemente natural, que impregna el discurso legal. La mujer es individualizada y reconocida por un poder en la medida que cumple con el rol impuesto premeditadamente. Se ha infiltrado en el contrato social un código de status moral, creando una modernidad vulnerable a la tradición patriarcal, pero sobre todo un aparataje legal sexualizado (R. Segato).

Según la categorización del régimen de género de Walby entenderíamos que el poder simbólico del Estado se inmiscuye tanto en el régimen privado como en el público, a través del



Derecho sin embargo su presencia será predominante en el espacio público de esta forma las mujeres entendidas a partir de su colectividad son subordinadas por un sistema estructural, que subordina a la mujer mediante la cultura, la sexualidad y por supuesto la violencia (McDowell, 2009, p.18).

A través del Derecho el Estado alcanzará la vida doméstica, aunque esta no sea la estrategia principal del patriarcado pues los principales beneficiarios de la opresión femenina será un sistema, que propone una versión funcional de la sociedad apropiándose de la vida de las mujeres y su pluralidad, utilizando la subordinación y segregación en forma pública (McDowell, 2009, p.18).

Pierre Bourdieu menciona a través de lo que él denomina la “dominación masculina” los puntos sobre los que determinadas estructuras objetivas y subjetivas se han apropiado del cuerpo de la mujer a nivel histórico, de tal forma que con el tiempo un orden masculino ha podido ser reproducido por instituciones que facilitan el control y opresión de la autonomía femenina (Sandoval). Ahora bien, para ello sería necesario hacer un análisis histórico de la influencia de estudios feministas, que permitiesen identificar la construcción simbólica de aquella hegemonía.

Las feministas socialistas explican que ha de existir un sistema dual pues dan cuenta de una necesidad que explica la opresión estructural a partir de una categoría de análisis que sim deja de lado la dicotomía sexo- género propone un que la división de la experiencia “social” en sintonía con aquel dualismo, “tiende a dar a hombres y a mujeres concepciones diferentes de sí mismos, de sus actividades y creencias y del mundo que los rodea”¹⁹ (Rial, 2018, p. 4).

Pero esto es algo que se arrastra, durante los siglos XVI y XVII la base de un modelo burgués que rodea a la familia, es impuesto, comenzando una era de domesticación de la mujer,

¹⁹ Consultar Harding, S. Ciencia y feminismo. Madrid: Ediciones Morata, 1996.



naturalizando su rol de madre y esposa, creando conceptos negativos, que simbólicamente eran transmitidos con la normativa de la época, que incluso a la fecha no han podido ser superado.

Se ha generado una jerarquía entre la mujer que es parte de aquel modelo burgués de familia y aquellas diversas funciones que la mujer puede desempeñar incluso en torno a trabajo reproductivo, sin ser parte de este.

Se demuestra a través de innumerables engranajes la dominación de las mujeres y como esta es adoptada por una política de división sexual del trabajo, en el que por supuesto el espacio público necesitaría una presencia masculina predominante mientras que el espacio privado debería estar cuidado por una buena mujer que formen potenciales productores, encadenando una vez más exclusivamente el cuerpo y autonomía de las mujeres a la funcionalidad de un sistema.

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Los cambios en la organización de las relaciones sociales corresponden siempre a cambios en las representaciones del poder, pero la dirección del cambio no es necesariamente en un solo sentido. Podría mejor decirse que el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder (...) El género facilita un modo de decodificar el significado y de comprender las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana.²⁰ (Scott, 1990, p. 59)

La libertad legítima de las mujeres alcanza un reconocimiento que no logra superar la cesura, control y refuerzo de un poder que identifica lo implícito del lenguaje y lo plasma en el Derecho, Zygmunt Bauman sostiene, que la sociología ha identificado el hábito de considerar las acciones humanas como elementos de elaboración más amplias, es decir que estos no responden a

²⁰ Citado también por Patricio Fernández Rial en *Feminismo y Prostitución* (Rial, 2018, p. 5)



disposiciones aleatorias de los actores sociales, más son producto de estructuras cognitivas que se encuentra aprisionadas en una red de dependencia mutua.

La pregunta entonces sería cuales son los efectos de tal dependencia en la realidad de la mujer pues precisamente lo que hemos mencionado, las limitaciones que rodean a la libertad a través de condicionamientos que pueden identificarse en palabras de Castells como “paradigmas informacionalistas” que pueden ser interpretados dentro de la socialización de género, pues se propone un modelo conceptual amplio que se apropia de la autonomía de la mujer e incluye un patrón general, que deberá ser aceptado socialmente, incluso es naturalizado (Femenías & Soza, 2009, pp. 45-46).

El problema no solo es la inconformidad de las mujeres al tener conciencia de su dominación o el malestar que puede causarles, el caso es que el poder simbólico que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer transforma las condiciones en las que esta se relaciona a nivel social, así será como el poder patriarcal traspasa la vida cotidiana de las mujeres. Estos elementos confluyen en el levantamiento de un nivel estructural que prohíbe, pero sobre todo sanciona.

Los cuerpos de las mujeres se fragmentan debido a su explotación, por una parte, son mercantilizados, por lo que el sistema circula grandes cifras de dinero, dando lugar a “cuerpos exóticos” esto entendido como cuerpos modelo, en el que se combina la funcionalidad con el erotismo, sintetizándose en un proceso de simulación que transforma al cuerpo en una forma de consumo, que serán parte de redes de tráfico o prostitución.

El cuerpo de la mujer se prepara para el consumo sexual, étnico, cultural etc., de quienes objetivan el cuerpo y manipulan el sistema, que parte de una realidad individual que define al hombre y sus necesidades sexuales, que no pueden ignorar la jerarquía que habíamos planteado



como origen. El concepto anímico y sociológico es persuadido por un ideal femenino, que se encuentre a disposición aparentemente de un deseo colectivo. (Baudrillard, 2009, pp. 183-187).

Como lo menciona Baudrillard, mientras más se perfecciona el artefacto a través de signos y atributos de lo real más se censura la verdad desviando la carga simbólica hacia la idealización del sexo femenino reestablecido, pero el caso de la muñeca es particular pues con el pretexto de la educación sexual se produce una “sobreexposición de los signos sexuales” ocasionando una verdadera “castración” a la niña (Baudrillard, 2009, pp. 183-187).

Foucault manifiesta; sin apartarse de su analogía propuesta respecto al cuerpo del monarca en *Vigilar y Castigar* la sociedad representará aquel *cuerpo* que deberá ser desinfectado en principio a través de un método de *asepsia* sugiere, en donde la exclusión, el eugenismo y la criminología juegan un papel fundamental. Es así como pasamos de un cuerpo objetivizado que se exhibe y se consume a uno que se censura y se excluye.²¹ (Foucault M. , 1980, p. 104)

El cuerpo de la mujer es concebido por el poder simbólico del Estado como una instancia pasiva en la que pueden destacar modelos de adoctrinamiento, que se han de aproximar a conceptos morales y un pensamiento generalizado, concretamente llega a teorizarse al sujeto mujer, y quien no contiene el aspecto fundamental de tal individualización surgirá en rechazo (Foucault M., 1980, p. 105-106).

El poder simbólico propuesto por Bourdieu y en sintonía con la teoría del poder de Foucault, otorga especial importancia a las practicas corporales que se definen a partir de dicho poder simbólico. La cuestión es que aquella indudable consigna que define la corporalidad de la

²¹ Foucault en su obra *la microfísica del poder* desarrolla una teoría, respecto a un ideal del cuerpo en la sociedad contribuido por la universalidad de voluntades que devienen del poner, reafirmando la materialidad del poder a través del cuerpo de los individuos. (Foucault M. , 1980, p. 104)



mujer recorre pensamientos, conformando una conciencia colectiva que sin duda ignora las necesidades de las mujeres (Marín, 2012, p. 95).

La eficacia de esta definición programática se proyectará a nivel estructural, y se logra a través de los mecanismos más sutiles uno de ellos el Derecho, pero además tenemos al conocimiento como una derivación de la cantidad de simbología que el Derecho trasmite como mensajes conceptuales, también está la publicidad como otra herramienta vigente, y la educación según la teoría del bio poder de Foucault (Marín, 2012, p. 95).

Uno de los problemas latentes es la continuidad de aquella simbología, pero a ella habrá que agregarle el modo en el que se ejerce el castigo sobre el cuerpo, esto se plasma en una violencia judicial y legislativa. Pero su único foco no es el Derecho como tal sino los diferentes lugares de la sociedad en los que se ven reflejadas aquellas intensiones del Derecho, dando paso a la criminalización de la mujer como una alternativa para el ejercicio del poder estatal, en el que incluso puede aparentar deslindarse de responsabilidad (Marín, 2012, p. 95).

Además de la teoría de los micro poderes de Foucault como la explicación de aquella persistencia en el tiempo de modelos tradicionales, debe entenderse que traspasan el cuerpo de los individuos tocando el habitado actualmente de tal forma que se aseguran el emplazamiento del mismo en función del sistema.

El sujeto, por lo tanto, no sólo es víctima de la violencia simbólica, también contribuye a ella, la ejerce, a través de sus actos, gestos, palabras, decisiones, pensamientos, ideas y concepciones; su ser se configura y se perfila a través de esa violencia generalizada y normalizada (Marín, 2012, p.97).



Foucault había estipulado, mediante sus estudios en torno a la aparición de la prisión, que el paso de formas de castigo directas sobre el cuerpo de los individuos a formas implícitas, donde ese castigo se transforma en control y disciplina, tiene por misión el vigilar, controlar y educar en la obediencia y sumisión a las normas, esto es, al orden social imperante. (Marín, 2012, p. 99)

Por tanto, el castigo busca, no tanto, tener a una persona encarcelada, es decir, en determinado momento el control y disciplina social son transformados en castigos que más bien tienen como objetivo el lograr que el sujeto acepte o se doblegue ante las normas sociales he ahí la razón de ser del funcionamiento simbólico del Derecho penal.

Esto para la mujer involucra una configuración de reglas cuya finalidad será la obediencia por supuesto a través de un trasfondo moralizante que normaliza el orden impuesto, priorizando una división de normas éticas según el género. A partir de esto se permite la proliferación de instituciones que puedan tener el control de la realidad de las mujeres.

1.4.3 El ejercicio del poder punitivo del Estado sobre el cuerpo de la mujer

El cuerpo de la mujer es vigilado a través de la generación de conciencia sobre su cuerpo a partir de prerrogativas que impiden la exaltación del cuerpo a partir de su autonomía sexual. La vigilancia misma de la sexualidad es objetiva en la medida que aquella persecución del cuerpo se refleja en la norma. El análisis se centrará en, en como el cuerpo de la mujer no solo se vuelve de dominio público, sino que, además el Estado activa su poder punitivo engendrando al mismo tiempo sus deseos sobre la cotidianidad de la vida de la mujer.

Las mujeres son socializadas desde su infancia bajo estigmas, pero como hemos visto esto se basa en cánones establecidos socialmente, el conflicto real comienza cuando el Estado empieza a formalizar comportamientos diferenciados por sexo, midiendo sus libertades y derechos. La



naturalización de conductas violencias sobre el cuerpo de la mujer son el reflejo de la imposición de significados en el mundo social.

La problemática real de simbolizar y construir lo que es propio de la mujer, será producto de funciones naturales que son socializadas a través del Derecho, el debate real gira en torno a cuál es el alcance de aquella simbología en el derecho penal pues su reconocimiento marca la diferencia en el ejercicio del poder punitivo. A esta afirmación, se agregaría que la normalidad que se asigna a una rutina en la que la mistificación de la mujer y de lo femenino controla el culto materno naturalizando cierto grado de violencia (Segato, 2003, p.3).

Toda vida social está enmarcada bajo un mecanismo de dominación, como es el margen que define las características de lo correcto, aunque esto no sea moralmente aceptable por todos y todas, las diferencias que organizan, como se constituyen como una estrategia organizadora del género según Francis Olsen. Es así como según las necesidades sociales el derecho penal ha de diferenciar categorías que crean mujeres criminales a partir de imaginarios sociales, mala madre, madre soltera, madre sumisa y abnegada, soltera irresponsable, promiscuidad exacerbada, etcétera (Zaikoski, 2008, p. 122).

El derecho interfiere en nuestras vidas cuando promete, otorga, reconoce o niega. Cuando crea expectativas y cuando provoca frustraciones. Las calidades de mujer y hombre, de padre de familia, de cónyuge, de hijo, de niño, de adulto, de capaz o incapaz, de delincuente y de víctima, de culpable y de inocente, están jurídicamente estatuidas. Y el discurso jurídico es complejo, opaco, paradójico, enunciado por actores diversos, cada uno de los cuales agrega, modifica, elimina sentidos. (Ruiz A., 2000, p. 14)

Por una parte, diríamos que el derecho, nos trae la idea de orden público, que también es el objeto del derecho penal, sin embargo, a esta idea nos remite al poder punitivo. Por qué entonces si el derecho penal busca la protección, constituyéndose como un mecanismo de control específico,



aborda a las mujeres creando una situación en la que los bienes jurídicos adquieren identidad, con esto me refiero a que determinada protección está habilitada para hombre y otra para mujeres (Zaikoski, 2008, pp. 122-123).

Cuando el problema decide ordenarse en función de un control social hacia las mujeres, se manifiesta tipificando conductas “desviadas”, que involucran precisamente el desafío de aquel control social, ya que la mujer y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos retan las dimensiones persuasivas y represivas de un poder que intenta interiorizar las normas en los niveles de convivencia instaurando valores dominantes (Zaikoski, 2008, pp. 122-123).

Las innumerables hipótesis que pueden surgir del análisis de la realidad procesal como legislativa, entorno al derecho penal no podrían ser del todo resueltas. Pero, en definitiva, todas estas deben partir de la comprobación de diferentes aspectos, uno de ellos es un sistema penal selectivo, pues los bienes jurídicos son clasificados por género, así como también constituyen otras formas de etiquetamiento para las mujeres (Zaikoski, 2008, pp. 124-125).

Esto sin duda tendría como consecuencia la perpetuación de estereotipos de género, con ellos la asignación de roles. El espacio privado, ha de constituirse como uno de los primeros centros de reclusión para la mujer, precisamente su rol reproductivo se ve desarrollado potencialmente desde su nacimiento, convirtiéndose en el primer espacio en el que la mujer está obligada a naturalizar la violencia simbólica (Zaikoski, 2008, p. 125).

La funcionalidad del derecho penal, orientada a la conservación de instituciones como la familia, se apropia de aquella vida de la mujer cuando el espacio privado y el espacio público comienzan a combinarse, de esta forma se justifica la ausencia del derecho penal en el ámbito



exclusivamente privado, es decir solapando la violencia ejendrada y ocupándose de la vida pública (Zaikoski, 2008, p. 126).

La sexualidad de la mujer debe girar en torno a la maternidad, esto está naturalizado. Es evidente entonces como el nivel delincuencial de las mujeres tiene una carga sexual siempre, es así como Zaffaroni describe que la sociedad, asume al *pater familiae*, como resultado de una jerarquización biológica que legitima la concentración masculinizada del poder, así como como el poder punitivo del Estado. (Zaikoski, 2008, p.126)

Esto representa las razones del Estado para abstenerse de poder confiscar el problema que se desarrolla en el espacio privado pues este tiene su representante para quien en ejercicio de su poder se apropia del problema y lo resuelve, el Estado lo reproduce en una sentencia a través del ejercicio punitivo de la fuerza. (Zaikoski, 2008, p.126) Según Zaffaroni:

(...) el fortalecimiento de la estructura patriarcal y la consiguiente subordinación de la mujer, como capítulo indispensable de su adoctrinamiento social, corporativo y verticalizante. Era necesario disciplinar a la sociedad: ...disciplinar sexualmente a la sociedad y sobre todo a las mujeres (...) (Birgin, 2000, p. 23)

Será Zaffaroni quien de la misma forma explica como el sistema patriarcal y verticalizante, organiza operativamente un funcionamiento social que, era necesario para una época como la Edad Media en la que podríamos comprobar como la inquisición, un sistema punitiva se desarrolla, y se fortalece la tarea de robustecer al patriarcado a través de la subordinación de la mujer, de manera especial esto ataca la vida sexual de las mujeres y su identidad pues como menciona Zaffaroni esto era necesario para la transmisión de la cultura religiosa.

Kramer y Sprenger en su obra *El Martillo de las brujas* explica la tendencia al pecado de las mujeres “brujas” quienes son una de las herramientas que una el diablo para materializar el



placer, como mencionan los autores “el diablo trabajo por medio de la bruja” desde esta perspectiva la bruja no merece castigo, pero al parecer el diablo no trabaja solo, y con tan sencillez por lo que sus servidoras las brujas son aquellas que deben considerarse aquellas que tienen el poder de “herir por medio del contacto físico” (Sprenger, 1486, p.20).

“En primer lugar debe considerarse el acto de engendrar” como un poder que sucede de fuerzas naturales menciona:

Las mujeres, para provocar cambios en el cuerpo de otros, usan a veces ciertas cosas que van más allá de nuestro conocimiento, pero eso lo hacen sin ayuda del diablo. Y porque esos remedios sean misteriosos no hay motivos para asignarles el poder del demonio, como lo asignaríamos a los encantamientos maléficos producidos por las brujas. (Sprenger, 1486, p.20)

Es así como se intenta explicar la inferioridad de la mujer debido a su falta de fe con origen natural. Este libro fue aprobado por el papado en su época (Pareja, 2008, p. 35):

(...) individualismo intelectual y espiritual favorecido por la concentración de individuos arrancados de las tradiciones envolventes de las antiguas estructuras sociales, no pueden sino favorecer la “racionalización” y la “moralización” de las necesidades “religiosas. (Bourdieu, 2006, p.38)

Precisamente la razón por la que abordamos la influencia religiosa dentro de esta temática es porque la categoría cuerpo no puede ser abordada sino es comprendida históricamente como aquella manifestación que logra la conexión entre lo social y lo individual, así como también entre lo psicológico y lo simbólico. De tal forma que el Derecho, en especial el Derecho penal, es el reflejo de un sistema inquisitorio que asume la libertad sexual de la mujer, a partir de conceptos que han sido transmitidos por una clara influencia cultural (Pareja, 2008, p. 36).



El que el cuerpo de la mujer y su sexualidad son tomados como una manifestación material de lo terrenal y lo humano. Como expresión del pecado, o lo “desviado”. De tal forma que su inclinación por el delito deviene de su debilidad. Por lo que una mujer que ha delinquido es el resultado de una desviación de su cometido como “hembra sumisa y doméstica” según Lombroso (Pareja, 2008, p. 36).

Por otra parte, debería identificarse que una de los experimentos sociales que se ejecutan por parte del Estado es el ejercicio del poder punitivo a partir de la estructuración violenta de un sistema de control social sobre la mujer, es por esto que Zaffaroni aborda la influencia medieval del libro “el martillo de las brujas” ya que debe ser concebido como notas estructurales dentro de la ciencias penales o criminales. Menciona que el carácter selectivo del derecho penal se refleja en la forma en la que el poder punitivo opera, pues este es ejercido sobre los más vulnerables de una sociedad, evidentemente la raíz de la que emana el poder del opresor serán los orígenes de toda discriminación. (2005, p. 326).

Particularmente el discurso feminista ha identificado como el poder punitivo se concibe como una trampa neutralizante ya que aquella vulnerabilidad responde a estereotipos, que son contruidos en relación a imágenes negativas, cargadas de prejuicios por lo que se busca contribuir en ello a través de un sin número de significados que legitimen una conciencia social jerarquizada, y cultural discriminadora.

(...) el poder punitivo, después de su originaria y brutal intervención directa, hace siglos que delega la subalternización controladora de la mujer en el no tan informal control patriarcal, que es su aliado indispensable: no necesita criminalizar a las mujeres sino servir de puntal a la sociedad jerarquizada para que ella se encargue de esa tarea (...) (Zaffaroni, 2005, p. 334)



Es por esto que hemos mencionado que, se ejerce un control indirecto que ha de definir la subalternización femenina. Es así como la criminología etiológica según Zaffaroni, intenta explicar el delito a partir de una causalidad que, consideraba latentes afirmaciones biológicas como causas de la criminalidad, más lo social entra como un conjunto de causas insípidas, que se imbricaban sobre las causas biológicas, pero no se consideraba como una causa esencia de la criminalización.

Las consecuencias de los discursos desarrollados socialmente fueron omitidas como un aspecto que participa en la criminalización, al que por supuesto obedecería el poder punitivo. Dentro de esto el papel de la mujer es minimizado, y se limita su criminalidad a “delitos de género” como el aborto, por ejemplo, que representa la subordinación de la mujer y su natural inferioridad, sin dejar un lado el control sobre el cuerpo, que respondía a un carácter selectivo del discurso de criminalización.

Con esto se oculta, el peso de la reacción social en la criminalización, a la vez que se cumple con una satisfacción simbólica de lo que la mujer representa socialmente, según estereotipos de género. Lo que consecuentemente justifica la ausencia de un papel de víctima para la mujer en los casos de delitos de género, pues se conciben sus conflictos como parte de la normalidad (Zaffaroni, 1992, pp. 1-2).

Se intenta disimular que la intensidad con la que poder punitivo es ejercido representa, el poder de vigilar. La “opinión pública” como es descrita por Zaffaroni, a la que nosotros identificamos como *habitus*, será el producto de un poder simbólico que reclama mayor vigilancia punitiva. Este como un mecanismo común que combina métodos sutiles, para proyectar un fenómeno como peligroso. En este caso el mensaje es muy claro, la mujer en ejercicio de su autonomía sobre el cuerpo, significa una amenaza para dicho *habitus* y representa la



UNIVERSIDAD DE CUENCA

deconstrucción de múltiples instituciones tradicionalmente defendidas sobre bases de valores religiosos, y una cultura patriarcal. (Zaffaroni, 1992, pp. 3-6)



CAPITULO 2

La criminalización de las mujeres por aborto

“Es indudable que el cambio principal consiste en que la dominación masculina no se imponga más con la evidencia de la obviedad. Esto se debe sobre todo al inmenso trabajo crítico del movimiento feminista que, por lo menos en algunas regiones del espacio social, ha conseguido romper el círculo del reforzamiento generalizado; tal dominio aparece a partir de ahora, en muchas ocasiones, como algo que hay que defender o justificar, algo de lo que hay que defenderse o justificarse. El cuestionamiento de las evidencias va acompañado de las profundas transformaciones que ha conocido la condición femenina, sobre todo en las categorías sociales más favorecidas...”

Pierre Bourdieu

(La domination masculine, 2002, p. 122)

2.1 Análisis histórico de la criminalización de la mujer por aborto en el Ecuador

“Quienes quisiera codificar los significados de las palabras librarían una batalla perdida, porque las palabras, como las ideas y las cosas que están destinadas a significar, tienen historia...”

Joan W. Scott

(Scott J. W., 2017, p. 48)

A través del tiempo las personas construyen estructuras figurativas, que son asociadas al empleo gramatical de los términos, estos se cimientan a partir de estructuras legales, y costumbres. La aceptación de esto como significados, debe ser analizada con la categoría de género, y explicada



en la historia, ya que el resultado será distinto en el caso de las mujeres. El propósito será descubrir el alcance de estos significados en la historia de la legislación ecuatoriana y la criminalización de la mujer por aborto (Scott J. W., 2017, pp. 48-49).

El orden social, propiamente dicho promueve un cambio dialectico que además incluye mutaciones legales que cuentan con la fundamental tarea de defender paradigmas en torno al género. De esta forma la inclusión de una perspectiva feminista en el análisis histórico de la criminalización permitía la inserción de las mujeres junto con el conocimiento critico de nociones tradicionales del significado histórico en el contexto ecuatoriano, así como la reconsideración de algunas condiciones propuestas en la norma dentro de este cambio dialectico. (Scott J. W., 2017, pp. 48-49).

Aquellos usos descriptivos y normativos del género han sido empleados por la historia, dentro de un contexto de criminalización, estos se trazan ordenamente en el campo en el que ha de desarrollarse la mujer. Mientras que el derecho los acoge y se refiere a ellos continuamente respaldando un enfoque funcionalista enraizado a la biología, “se perpetua la idea de las esferas separadas (sexo o política, familia o nación, mujeres u hombres en la escritura de la historia) ...” (Scott J. W., 2017, p.53)

Comprender la objetivización de la mujer, en la norma permite apreciar la acción política que existe detrás, la sexualidad entendida fuera de fundamentalismos ideológicos experimenta un proceso de normativización, en el que la relación de desigualdad y violencia simbólica opera abiertamente sobre el cuerpo de la mujer. El sistema patriarcal intenta ocultar las formas en las que se estructura la dominación sobre el cuerpo de la mujer, es por eso que la criminalización de las mujeres por aborto se conecta al derecho a la vida como una realidad figurada.



Si bien la criminalización del aborto procede de la apropiación del cuerpo de la mujer y su objetivización sexual lo plantea como un aspecto universal, aterrizando en la defensa a la vida reduciendo el debate al derecho. Aun cuando el aborto este directamente relacionado con la diferencia física, y la capacidad reproductiva, su criminalización es inherente a la sistematización de estereotipos de género, tal es así que se comprende como un delito contra la vida, del que aún no ha nacido, obviando la realidad de la mujer (Scott J. W., 2017, p.55).

2.1.2 Derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador y su relación con la criminalización de la mujer por aborto

Entendiendo la fuerte influencia del derecho romano en la legislación ecuatoriana, hemos de abordar las condiciones propuestas por este, entorno al aborto. Como ya se ha mencionado este debate ha girado alrededor del derecho a la vida del no nacido o del que está por nacer, sin duda la influencia cristiana desde periodos muy antiguos y preclásicos, sanciona los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. (Hernández & Chávez, 2016, p. 14)

Los derechos sexuales y reproductivos claramente no eran concebidos en la época románica, por lo que las circunstancias penales se relacionan con determinados estereotipos que han atado a la mujer tradicionalmente. Esto se manifiesta violentamente contra la misma. No ha dejado de considerarse que el bien jurídico protegido en la criminalización del aborto será la vida, bajo la influencia de la filosofía cristiana. (Hernández & Chávez, 2016, p. 15)

Entendemos que el derecho romano, reconoce el derecho a la vida, para definir el campo jurídico de los sujetos de derecho. De esta forma reconoce la calidad de personas a partir del nacimiento. Es decir que la significación del comienzo de la existencia humana para el Derecho



Romano se remite a la existencia física siempre que cumpliera con requisitos como; que el *naciturus* deberá desprenderse del vientre de la madre, caso contrario es considerado una parte más de la madre. (Hernández & Chávez, 2016, pp. 15-16)

Por esto se resuelve que, en el derecho penal romano, en primera instancia la realización del aborto espontáneo o inducido no debía ser sancionado. Comienza a ser sancionado fundamentando circunstancias ajenas al derecho a la vida del *naciturus*, es decir, no es hasta que se verifica en el comienzo de un segundo periodo que la influencia de teorías clásicas del cristianismo trasciende en la historia bajo el imperio de la fuerza que había tomado la religión para definir normas sociales, dando giro al debate. (Hernández & Chávez, 2016, pp. 15-16)

Este giro argumentativo abarcará el condicionamiento social y sexual y serán instrumentalizados a través del Derecho. La persecución aborda espacios culturales, en los que el dominio traspasa a las mujeres en su identidad como sujetos de derechos. Determinadas a lo largo de la historia en la que el cristianismo opera definiendo el rango de acción de sus libertades (Hernández & Chávez, 2016, pp. 15-16).

La iglesia buscaba culpables de una época de pérdida de poder, debido al surgimiento de los Estados modernos. Aunque la iglesia se veía debilitaba, utilizaron como estrategia la redefinición y control de los límites morales, imponiendo sus propias versiones de lo correcto y lo incorrecto, estrategia que a la fecha no ha sido abandonada. Por supuesto, la sociedad política que es pensada como un contrato deberá obedecer a este orden natural, caso contrario alteraría la armonía entre el saber y el poder que legitiman la intervención estatal como el ordenamiento social (Posso, 2009, p.53).



Las mujeres, o “Las brujas” como fueron denominadas en la Edad Media, representaban el desafío a aquella estrategia, en la que el conocimiento amplio y dominio de temas como la anatomía, sexualidad, y la reproducción son planteadas como un poder predominante del pecado, que encarna el cuerpo de la mujer. Esto marca la primera parte de la historia, en el que la humanidad refleja la estructura ética del poder religioso. (Hernández & Chávez, 2016, pp.15-17)

De forma que, en países abiertamente católicos, el aborto fue sancionado con pena de muerte. La filosofía cristiana no solo se había fundamentado en la construcción del Derecho Canónico, además se habría impregnado en la organización social y política de innumerables países de Europa. Es importante esta representación en la historia, ya que las raíces de la ética teleológica de San Agustín establecieron un orden moral en Europa que, con el tiempo, América heredaría debido al proceso de colonización.

La influencia alcanza hasta siglo XIX cuando apenas es reformado para eliminar la pena de muerte reemplazándola por una pena privativa de libertad. Mientras que, en Inglaterra, a pesar del contexto liberal y la propuesta de un estado laico, se mantiene la penalización del aborto. Las mujeres resultaban excluidas nuevamente de este periodo de democratización de los derechos fundamentales y surge el movimiento sufragista como la primera respuesta a algunos discursos políticos (Moncayo, 2008, pp. 9-11).

El desarrollo de la segunda ola feminista representa un amplio contenido político que permite en 1920 a la Unión Soviética, despenalizar finalmente el aborto. Sin embargo, en España, por ejemplo, en aquel año, apenas comenzaba la marea sufragista, mientras que en EEUU el reclamo había comenzado un siglo atrás. Es pertinente dimensionar el tardío progreso y desarrollo



en materia de derechos para las mujeres, ya que un análisis histórico será el reflejo del contexto político de cada época.

El lenguaje, los discursos liberales y democráticos, protegen las raíces más profundas de la exclusión de las mujeres. La historia de este país se cuenta desde un poder casi inexistente, al igual que temáticas referidas a derechos sexuales y reproductivos o a los derechos civiles y políticos en América latina. Veremos, precisamente, la historia ecuatoriana será un reflejo del colonialismo europeo (Luna, 2018, pp. 6-11).

En 1837 el primer Código penal ecuatoriano, inspirado en el Código Napoleónico, sería el que originalmente tipificaría el aborto, ubicándolo como un delito contra particulares, en el que el bien jurídico protegido sería: la vida y la existencia natural y civil de los niños, sin reservar una diferencia evidente con el actual Código Orgánico Integral Penal en relación aquello. (Moscoso, 2006, p. 22).

Art. 456.- Los que causaren el aborto de alguna mujer por cualquiera de los medios o arbitrios análogos para lograrlo, serán castigados del modo siguiente: Si emplearen los medios o arbitrios expresados sin consentimiento, o conocimiento de la mujer, sufrirán una prisión de dos a seis años, y si lo hicieren con consentimiento o conocimiento de ella, el tiempo de la prisión será de uno a cuatro años.

Art. 457.- Los médicos, cirujanos, boticarios o comadronas, que indicaren, aconsejaren o suministraren, cualquiera de los medios o arbitrios expresados, serán condenados a obras públicas por dos a seis años; pero si se hubiere verificado el aborto, el término de la condena a obras públicas, será de seis a diez años.

Sin embargo, se puede verificar que, en la primera regulación respecto al aborto, la sanción va dirigida para quienes lo ejecutan. Esto no aplica para la mujer que consiente en ello. El consentimiento tiene una connotación claramente diferenciada de la actual, pues, si bien se puede



considerar un atenuante para quien practique el aborto, no prescribe la criminalización de la mujer al consentir.

Se tipifica el aborto, por primera vez, respondiendo a concepciones sociales y morales que han sido socializadas durante décadas, no obstante, pasará todavía más tiempo para que se vea también a la decisión de la mujer como parte de esta moral (Moscoso, 2006, pp.21-22).

Por otro lado, el código de 1872 sería producto de imitaciones y herencias eurocéntricas. Fue inspirado en el código belga, respondía a la ideología del Estado liberal, reservando una política criminal conservadora. Esta referencia beneficia la comprensión de la historia legislativa de la tipificación del aborto, que ha sido la base para defender la criminalización de la mujer hasta la fecha.

Es importante mencionar que el tema de la familia y la valoración moral de la decisión de la mujer es introducido específicamente (Moscoso, 2006, p. 24):

Art. 374.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o causare por si misma el aborto, será castigada con una prisión de uno a cinco años y con una multa de veinte a cien pesos. Si lo hiciere para ocultar su deshonor, será castigada con seis meses a dos años de prisión.

El poder punitivo es ejercido como un reflejo del contexto político de la época hasta 1906, cuando se produce una reforma debido al triunfo liberal. Sin embargo, en lo relacionado al aborto, se mantiene la concepción clerical del código anterior. En 1938 la estructura ideológica que define al Código Penal es afectada por influencias italianas y argentinas que, a través de principios positivistas, introducen una fuerte variación que ubica al aborto en los delitos contra la vida (Moscoso, 2006, pp. 26-27).



A esto, debemos agregar una evidencia de la legitimación que encierra la dominación masculina, así como las posiciones respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, considerando ésto como referencia de la construcción sistemática de la violencia simbólica y una notable desigualdad estructural. El texto original del Código Penal de 1938, anterior al actual Código Integral Penal, establecía lo siguiente:

Art. 420.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o causare por sí misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco años. Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, para ocultar su deshonor, será reprimida con seis meses a dos años de prisión.

El mismo Código Penal plantea una vaga descripción del aborto sin definirlo con exactitud, estableciendo tres causales de inimputabilidad.

El reconocimiento como causales de inimputabilidad, al aborto terapéutico para preservar la vida de la madre y al aborto eugenésico, en los casos de violación o estupro cometido a una mujer idiota o demente, requiriendo, para la configuración de estos dos casos, el consentimiento de la mujer, esposo o representante legal (Moscoso, 2006, p.26).

En los años 60, con la aparición de la píldora anticonceptiva como resultado de la movilización de luchas feminista que reclamaban la reivindicación de los derechos de las mujeres, exigiendo la democratización de los derechos sexuales y reproductivos, comenzará un proceso de lucha y reconocimiento en el Ecuador, que hasta la fecha no ha terminado (Zaragocin et al, 2018, p.112).

En 1970 el aborto es considerado ilegal y es planteado como un problema social, con esta finalidad no se altera la funcionalidad propuesta inicialmente por el Derecho y es encaminada a



mantener el status quo dentro de la sociedad. Tal es así que durante 10 años aproximadamente el sistema legislativo atraviesa por un sin número de procesos de cambio, sin incluir en ninguno de ellos la reforma del tipo penal correspondiente al aborto.

Las cuestiones tradicionales se ven reforzadas cuando la reacción fundamentalista cristiana promueve el término “ideología de género”, desvirtuando las teorías feministas. El momento histórico llegaría en 1995 cuando en las declaraciones de Beijing el término sexo es reemplazado por el término género, para reconocer el origen social de aquel conjunto de valores presentados como orden para hombres y mujeres desmontando la referencia a las condiciones biológicas (Zaragocin et al, 2018, p.112).

Tal es así que, hasta 1998, la Asamblea Constituyente Ecuatoriana no había retomado el debate que se hacía presente a nivel internacional en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. La posición pública del Estado era claramente fundamentada en elementos sensacionalistas, que utilizan conceptos morales que limitan a la mujer aceptar su maternidad como ley natural, fundando temor a través del ejercicio del poder punitivo.

En contraste con la realidad de 1998, en el año 2005 se presentan sucesos particulares que comienzan por poner en la agenda pública temas como la violencia de la mujer, de forma que el aborto se presenta en distintas voces del debate, feministas, médicos, catedráticos, salubristas y abogados, que en un proceso transformativo la sociedad ecuatoriana reclamaba la vindicación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer (Carmenati & González, 2017, p.140).

En el marco de un proceso de cambio, el desafío de proponer la discusión de la despenalización del aborto es superado en el año 2005 cuando la propuesta de la ampliación del entonces vigente Código Penal es planteada, posicionando las condiciones respecto al *aborto*



criminalizado en caso de violación. Discusión que durante años compartió el silencio, junto con la violencia de género (Starkoff, 2008, pp. 20-21).

De acuerdo con la Constitución ecuatoriana vigente, y los límites aquí expuestos, el Código Orgánico integral penal establecería la inimputabilidad del aborto únicamente en el caso de que la vida o la salud de la madre se encontraran en peligro, así como en el caso de *violación o estupro cometido a una mujer idiota o demente*. La reforma propuesta a las causales de inimputabilidad, es rechazada en el 2006 por parte de la Comisión Especializada Permanente de lo Civil y Penal, que basaron sus argumentos, en el impedimento de que la mayor parte de la población ecuatoriana se ha reconocido católica, en un Estado que se definía como laico.

Es preciso comprender el contexto político en el que se desarrollará la inclusión del tema del aborto a nivel nacional, de forma que en el 2006 el Tribunal Constitucional no solo rechaza el aborto por violación, sino además toma la decisión de prohibir la comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia “la pastilla del día después” debido al recurso de amparo propuesta por el ex diputado Fernando Rosero, abogado de los grupos denominados Pro-Vida.²² (Zaragocin et al, 2018, pp. 110-114)

A pesar de que las plataformas de mujeres empiezan a ser accionadas demostrando alarmantes cifras en torno al aborto y la maternidad infantil, lo que se había logrado en el año 2004 con el Plan Nacional de Lucha contra la trata, en el 2007 con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia, esto como algunas de las

²² La resolución del Tribunal Constitucional número 14- 2005-RA de 23 de mayo de 2006 suspendió “definitivamente la inscripción del medicamento y certificado de registro sanitario N° 25.848-08-04 del producto denominado POSTINOR-2/ LEVONORGESTREL 0.75 COM PRTMIDOS



políticas de inclusión que se había viabilizados como legislación secundaria para la erradicación de la violencia contra la mujer, no fueron suficientes.

El tiempo ha transcurrido desde que algunas propuestas fueron planteadas, plantones, presión social y política de mujeres, y una Ley Orgánica de Salud como resultado que aparentaría el avance en derechos sexuales y reproductivos, el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal (Art. 447) sería rechazado, por considerarlo inconstitucional. Pocos días después se aprobaría el proyecto de la Nueva Constitución en el año 2008.

Las organizaciones feministas plantearían la despenalización del aborto para complementar el debate que se desarrollaba en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, en concordancia a las condiciones económicas de las mujeres y las serias implicaciones de su criminalización. Se intenta ponerle rostro a las cifras que se venían siendo mencionadas desde el 2005, y las incontables recomendaciones de la CEDAW (Zaragocin, y otros, 2018, pp. 110-114).

La postura extremadamente conservadora del ejecutivo se revela planteando la vigilancia del cuerpo de la mujer con la incorporación de algunos preceptos constitucionales que definirían a la familia, proclamando el extensivo rechazo a los derechos de la comunidad LGBTI, y la reconstrucción del género a partir del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer bajo la bandera de una izquierda aparentemente progresista.

El contexto que se desarrolló desde el 2007 respecto a la creación de la nueva “Constitución del Buen Vivir” en el plano del desarrollo, la igualdad de género, la desigualdad y violencia hacia la mujer traerá nuevos actores políticos y sociales que para el 2013 representarían el debate entorno al aborto, planteado en Asamblea Nacional en el marco del Código Orgánico Integral Penal.



Un capítulo iniciaría en el nuevo tenor político del Ecuador, y la situación que rodea al aborto es definitiva. Durante el proceso constituyente se pueden identificar únicamente dos posturas: una sería aquella representada por actores políticos que defiendan la despenalización del aborto, algunos aplicados a todos los casos o únicamente a casos de violación y otros inconvenientes legales; y una segunda postura de varios actores que se denominaría ProVida, que exigían la penalización incluso en los casos de aborto terapéutico (Ambrosi, 2018, pp. 33-34).

A esto debemos sumarle la presencia de algunos actores sociales, movimientos de mujeres, organizaciones internacionales, y movimientos ProVida que participaron en el espacio de discusión. El presidente de la época, Rafael Correa, rechazó abiertamente involucrarse en temas como estos, descartando la posibilidad de posicionarse como una plataforma pro aborto. Razón por lo que el tema sería excluido de la agenda política de Montecristi.

En definitiva, el debate respecto a la despenalización del aborto no trascendió en Montecristi, la popularidad y la aceptación política jugaron papeles fundamentales, pero esto será diferente en el 2013 (en el debate del Código Orgánico Integral Penal). El problema social que lleva efectivamente a construir el contexto perfecto que movilizaría los recursos, es planteado por ciertos actores sociales, entre estos el movimiento de mujeres.

El aborto es asimilado como un fenómeno que exige ser tratado en la agenda pública. Esta idea de “las mujeres están poniendo en riesgo su vida y su salud al abortar clandestinamente” (Ambrosi, 2018, p. 41), es traído como una marca en el episodio de la despenalización del aborto como un problema gubernamental.



La despenalización del aborto no genera necesariamente una agenda de marketing²³, es decir, una agenda que pueda ser asumida de inmediato por un candidato o un político en general. Como se explicó anteriormente, el tema del aborto y su despenalización es punto controversial que políticamente da o quita votantes. En este caso, antes de lanzar su posición a favor o en contra del aborto, un actor político puede evaluar la apertura de este tema en la sociedad. Si este tema genera demasiadas controversias en la sociedad, es posible que sea mejor eludirlo y así mantener el status quo. En Ecuador el aborto es, en efecto, un tema que genera mucha controversia (...) (Ambrosi, 2018, p. 42)

El lobby que había sido conformado por los movimientos feministas, durante la época desempeñaban desde el punto de vista de la sociología, este es un paso importante en la transformación de un problema social en un problema político. En tal caso la Constitución del 2008 no fue el resultado esperado, respecto al tema del aborto, pero la realidad conducía a que el discurso sea manejado como una emergencia nacional, por lo que esta perspectiva impulsaría el debate nuevamente en el 2013 previo a la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal.

El 27 de septiembre del 2013 un poco antes del segundo debate del Código Orgánico Integral Penal, en el parque el “Arbolito” se habían convocado los movimientos feministas a causa del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Este evento denominado acción del Alfombra Roja Ecuador, debido a que varias mujeres vestidas de rojo que formaban una fila a las afueras de la Asamblea Nacional, la despenalización del aborto, y la soberanía de sus cuerpos, en el plano de los derechos sexuales y reproductivo (Ambrosi, 2018, pp.51-52).

Esto se manifestaría también en otros países de América Latina buscando eliminar los estigmas que rodeaban al tema. El 28 de setiembre de 2013 en el Día por la Despenalización del

²³ (Parsons)



Aborto en América Latina y el Caribe se lleva a cabo un nuevo performance, denominado *El debate tendido en las calles* buscan visibilizar la realidad a partir de la interacción con la ciudadanía.

Con estas acciones, los movimientos feministas buscaban consolidar el tema en la agenda del debate público. El 9 de octubre de 2013 finalmente se obtuvo el afianzamiento de la propuesta de despenalización del aborto, aún con los asambleístas de Alianza País, Pro Aborto, oponiéndose al tema. Sería hasta el segundo debate del COIP que se concreta la aspiración de los movimientos feministas (Ambrosi, 2018, pp. 110-118).

Se consigue posicionar la necesidad de que el Estado atienda el tema del aborto, como una cuestión de Salud Pública. Finalmente, pese haber logrado colocar el tema en el segundo debate, se mantiene la penalización del aborto en casos de violación.

Durante la transmisión en vivo de una entrevista, el Presidente Rafael Correa acusó de traidoras a las asambleístas que impulsaban la despenalización del aborto, y amenazó con su renuncia instando a la Comisión de Ética de AP a manifestarse en contra de la forma de proceder de las asambleístas. Únicamente 3 personas de todo el bloque fueron suspendidas un mes sin ejercicio de funciones (Paola Pavón, Gina Godoy y Soledad Buendía). Y aunque no eran las únicas, finalmente cedieron ante la presión y dieron un paso atrás.

La actuación del mandatario resalta su posición conservadora y veta la posibilidad de la despenalización del aborto en caso de violación, por lo que en la última etapa nada se habría logrado. Esta mirada a la historia y debate del Código Orgánico Integral Penal, supone la contrariedad de lo logrado incluso en el 2008, en lo relativo a las libertades humana y la



consolidación esperanzadora de una era constitucional de derechos y de justicia (Flores, 2014, pp. 14-15).

El artículo 66, de la Constitución de la Republica del Ecuador correspondiente a los derechos y libertas de las personas contempla lo relativo a la libertad y responsabilidad sobre la salud y vida reproductiva. Sin embargo, el artículo 45 del mismo cuerpo normativo, determina que se garantizará la vida de niños, niñas y adolescentes, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Esto ha servido como argumento del Ejecutivo, así como de colectivos contrarios al aborto, pese a que la interpretación que se realiza, no es la correcta (Flores, 2014, pp. 14-15).

El poder simbólico del Estado se refleja en el punto más crítico del debate coaccionando las decisiones de mujeres, que pese a ocupar cargos representativos renuncian a la despenalización del aborto. El resultado de esto se refleja en la actividad legislativa y el Código Integral Penal (COIP) mantiene la tipificación del aborto.

El artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal en el caso del aborto consentido, con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años para la mujer que cause su aborto o consintiere en que un tercero se lo practique y el artículo 150 en el caso de aborto no punible manteniendo las causales del aborto terapéutico “para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada” y el aborto en caso de violación a una mujer con una discapacidad mental. (Zaragocin et al, 2018, pp. 112-113)

De acuerdo a la posición del Ejecutivo entorno a los derechos sexuales y reproductivos, la tipificación del aborto, no sería suficiente por lo que el conservadurismo se ve reforzado con la política pública de educación sexual, a través del Decreto Ejecutivo 491 en el que se plantea el



reemplazo de la Estrategia Intersecciones De Planificación Familiar Y Prevención Del Embarazo En Adolescentes (ENIPLA) por el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia.

El Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia entrará en vigencia a partir del 2015, este mantendría la coordinación exclusiva por parte del Presidente de la República quien renuncia a la política de prevención y planificación del plan ENIPLA que proponía el fortalecimiento de la educación sexual en el marco internacional de los derechos sexuales y reproductivos.

El Plan Familia aspira al uso de métodos anticonceptivos eclesiásticos, enfocados en la reestructuración de la familia nuclear heterosexual. Funcionó hasta el 2017 en manos de Mónica Hernández, principal exponente de la ética conservado y fiel asociada de grupos ProVida. Lenin Moreno, en su posesión el 24 de mayo del 2017, suprime mediante Decreto Ejecutivo el Plan Familia. Posteriormente, la intención por movilizar un proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres se destaca y desata la irritación de grupos conservadores vigentes desde 1830, tomando nuevas versiones y nuevos rostros.

Esta vez, bajo el lema de “Con mis hijos no te metas”, fomentan la sexualidad heterosexuada, ligada a la procreación como una noción exclusiva de la familia tradicional. Esto se refleja en una presión institucionalizada a través de fuertes procesos de movilización social y difusión mediática de noticias falsas y la construcción simbólica de una barrera moral en la sociedad. Acompañará un tipo penal que se ha mantenido desde 1837, sin embargo, no se puede presenciar mayor enjuiciamiento de mujeres sino a partir del segundo debate del Código Orgánico Integral Penal y su potencial entrada en vigencia en el 2014. (Zaragocin, y otros, 2018, pp. 114-116)

La tipificación del aborto se ha mantenido, junto al contexto político y social del país.



El Código Integral Penal (2015) contempla sanciones con penas privativas de libertad para quienes aborten y hagan abortar. Sin embargo, el Art. 150 del mismo estipula que el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: “1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”. Se evidencia una clara discriminación, únicamente las mujeres que han sido violadas y que posean una deficiencia mental pueden abortar porque su enfermedad puede ser transmitida al niño. En ningún inciso de este artículo se busca el bienestar de la madre. En forma general, las leyes han sido creadas para asegurar el bienestar del niño, pero debemos considerar que no se debe imponer la maternidad, en cualquier caso, que se produzca. (Hernández, Barriga, & Chávez, 2016, p.21)

Actualmente, treinta y tres meses después de que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) acusara al Estado por no proteger a las mujeres ecuatorianas, criminalizándolas por aborto, pese a ser víctimas de violación. Casi dos años después del informe del Comité contra la Tortura de la ONU, en enero del 2017 se señala la violencia estructural de la que son parte las mujeres en el Estado ecuatoriano, perpetuando una re victimización posterior a su trauma por violación y su enjuiciamiento penal por aborto. El 19 de diciembre la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional resuelve dar paso al debate para la despenalización del aborto.



El debate se desarrolla alrededor de la propuesta de cinco causales de inimputabilidad del aborto, entre ellas la violación, el estupro, el incesto, y las mal formaciones del feto.²⁴ El primer debate se realizó el día 3 de enero de 2019 en el pleno de la Asamblea, varios grupos empezarían a movilizarse desde diciembre, incluyendo organizaciones de mujeres locales e internacionales, sin mencionar las inminentes convocatorias de grupos ProVida.

ONU Mujeres, a través de su delega en Ecuador se ha mantenido presente en esta tarea de movilización ProAborto, junto a La Coalización de Mujeres y Surkuna quienes han liderado la campaña a través de sus investigaciones desde el 2015, recordando al pleno que más de 45 de cada cien mil mujeres mueren en el Ecuador a causa de abortos.²⁵ El tema, se ha mantenido en debates a la postre el Código Orgánico Integral Penal.

Fiscalía General del Estado ha notificado de la existencia de alrededor de 196 casos judicializados por aborto en el país, sin embargo, en contraste con la cifra reflejada por Zaragocín en un mapeo de la criminalización por aborto en el Ecuador, serán 243 las mujeres criminalizadas por esta causa (Zaragocin, & otros, 2018, 122).

De esta forma, la realidad no solo ha superado las afirmaciones desplegadas en el debate desarrollado 5 años atrás, sino que además ha confirmado que la legalización del aborto en el Ecuador está compuesta por la construcción cognitiva que envuelve al discurso legal, la moral, y los aspectos fácticos que reflejan las estadísticas.²⁶ (Jara, 2018, pp. 5-6)

²⁴ Noticia de Diario EL COMERCIO, publicada el jueves 20 de diciembre 2018, obtenida el 17 de enero 2019 en el siguiente enlace: <https://www.elcomercio.com/blogs/derechos-y-humanos/analisis-dimitri-barreto-aborto-violacion.html>

²⁵ Noticia del Diario EL COMERCIO, publicada el 2 de enero de 2019, obtenida el 17 de enero de 2019 en el siguiente enlace: <https://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-debate-despenalizacion-aborto-ecuador.html>

²⁶ Tomado de Gusfield, 2014, p. 75 en La Cultura de los Problemas Públicos. El mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente.



2.1.1 Contexto internacional del debate de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

La primera ola del feminismo en América Latina está caracterizada por el posicionamiento de la marea sufragista, mientras que la segunda ola se registra como un renacer en el contexto de transformación social y política de la revolución cubana y la era del socialismo en América Latina. Si bien existe generalmente recuentos eurocéntricos en torno a la segunda ola del feminismo, sin duda los contextos históricos están marcados diferencialmente por la realidad de América Latina (Pizón, 2018, p.13).

Es así que la segunda ola del feminismo ve su crecimiento exponencial en América Latina durante toda la mitad del siglo XX. Después de los años noventa, debido a una preponderante influencia neoliberal y capitalista, esto llega a globalizarse a través de diferentes tratados internacionales, “los derechos reproductivos y sexuales fueron incluidos por primera vez, en el Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas por las Décadas de las Mujeres en 1985 con lugar en Nairobi” (Pizón, 2018, p.14). Pese a lo expuesto esto no modifica la realidad de luchas y resistencias contra hegemónicas a nivel nacional por ejemplo que rodeaban el tema del aborto (Salgado, 2008, p.5).

La exaltación del movimiento feminista, fue descubierta y gradualmente adoptada a nivel internacional como un discurso oficial de los principales países centrales, aquellos que erradamente se conocen como desarrollados. Mientras en los países de periferia aún se enfrentaba la represión alimentada por lo estatal y el militarismo de la época. Sin embargo, el feminismo



comienza por pronunciar a nivel internacional bajo el precepto de autoconciencia y “concientización hacia afuera” (Canavate, 2009, pp.4-5).

Las fuerzas sociales y políticas comienzan a ser articuladas en México en 1976 con la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, orientada a la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Esta fue utilizada como cimiento para la proclamación de la Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (CEDAW) en 1979 bajo la misma lógica. Esta será por 64 países entrando finalmente en vigencia en 1981 (Facio, 2009, pp. 541.543).

La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (CEDAW) reúne las disposiciones legales a nivel internacional de derechos humanos de la mujer e incluye explícita e implícitamente las condiciones que la rodean. Si bien existen otros instrumentos que prohíben la discriminación por sexo o en su defecto han abordado las razones respecto a la igualdad de la mujer, lo han hecho a partir de una perspectiva androcéntrica (Facio, 2009, pp. 541.543).

Aunque hemos descrito la realidad internacional en líneas anteriores, es importante caracterizar cual es la situación que se venía reconociendo en el mundo, entorno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de manera específica. Las conferencias de Viena, El Cairo, y Beijing juegan un papel fundamental, ya que abren la puerta a la promoción de los derechos humanos de las mujeres a partir de un reconocimiento básico de las teorías feministas y de género como parte de los derechos humanos (Salgado, 2008, p. 4).

Es a partir de la conferencia internacional de Derechos Humanos de Viena 1993, cuando la posición de legitimar la sexualidad como un derecho humano incluía a las mujeres y abría el



debate respecto a la violencia sexual y de género como una consecuencia inevitable de su insatisfacción. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 propone la interrelación de los derechos sexuales y reproductivos, con la satisfacción y ejercicio potencial de otros derechos.

Sin duda la Conferencia Internacional sobre la Mujer de Pekín 1995 marca un momento histórico, los derechos reproductivos no solo son definidos, sino que además incluyen las relaciones teóricas de la dicotomía sexo-género a partir de la adopción del término género. (Salgado, 2008, p. 4) La estrategia manejada a nivel global bajo una gran presión y resistencia del Vaticano, se ve fortalecida gracias al apoyo de EEUU, durante el periodo presidencial de George Bush quien, impulsará a nivel internacional la promulgación de la penalización del aborto valiéndose de su influencia predominante en Naciones Unidas (Santander, 2013, p. 55).

Esto no quiere decir que las redes transnacionales que organizaban a movimientos feministas no haya estado trabajando por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en respuesta a una moralidad legalizada. Es así que por ejemplo el *proyecto Género y Justicia de Women's Link Worldwide* que “busca el desarrollo de una visión estratégica de incidencia en los sistemas judiciales, promoviendo el cambio social a través de las cortes” (Salgado, 2008, p. 4) fue el resultado de la primera sentencia que despenaliza el aborto, emitida por la Corte Constitucional Colombiana.

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional Colombiana, declara por primera vez la liberación del aborto y constituye una decisión progresista que encarna cambios sociales significativos según el análisis la jurista Mónica Roa. (Santander, 2013, p. 55) Se incluye como necesidad el estudio del procedimiento legal desde una perspectiva material, así como la



coherencia de las normas jurídicas desde una perspectiva emancipadora y principialista. Esta sentencia no fue una coincidencia; como hemos analizado, es el efecto de un proceso que se desarrollaba desde inicios del siglo XX (Román, 2015, p.169).

Con el surgimiento de los derechos fundamentales, la función judicial está determinada por la protección y garantía a partir de una interpretación sustancial, “...surgen como límites a las actuaciones de los poderes públicos, fungen como control mayoritario a los abusos del poder” (Durango, 2007, p.92). Este cambio paradigmático se explica en “(...) la existencia de ciertos contenidos (los derechos fundamentales) que limitan o condicionan la producción, interpretación y la aplicación del Derecho”²⁷ (Atienza, 2005, p.25).

Nancy Fraser propone un análisis comparativo que pretende introducir el debate en relación al desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, desde el surgimiento de los derechos humanos en su generalidad. Este estudio lo plantea entre la sentencia C-355 de la Corte y el caso de 1991 por abuso sexual del senador afrodescendiente Clarence Thomas, magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos. (Santander, 2013, pp. 55-56).

En el caso de Clarence Thomas, este fue acusado públicamente de haber violado a Anita F. Hill quien trabajaba para él. Esto generó un sin número de denuncias públicas a través de programas radiales. Las mujeres comenzaron a romper el silencio, declarando en contra de sus agresores.

²⁷ También citado por Javier Román, 2015, en Análisis de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional sobre la liberalización del aborto en Colombia: argumentos iusfilosóficos que sustentan el debate en el marco de la perspectiva de Habermas sobre el rol de la religión en la esfera pública.



Mientras que Colombia, en el 2006, mientras despenalizaba el aborto comenzaba a recibir denuncias de incesto y violaciones a niñas y adolescentes por parte de sus parientes más cercanos, mismas que en la mayor parte de los casos había resultado en embarazos. (Santander, 2013, pp. 55-56).

En el caso Thomas, el debate probatorio, conforme el análisis de Fraser, giraba en torno a establecer los límites entre la esfera pública y privada. Las declaraciones de Ana F. Hill fueron desestimadas, y desvalorizadas, en contraste con el caso colombiano. Un conjunto de opositores se preparaba con un sin número de estrategias jurídicas y antijurídicas para obstaculizar el proceso de despenalización (Fraser, 1997, p.74).

A Thomas se le ofreció la oportunidad de declarar en ámbitos privados, que desempeñaban un papel fundamental en el debate probatorio mientras que Hill fue sometida a un fuerte escrutinio público que cuestionaría su credibilidad sobre bases de un “*vacío conceptual*” (Santander, 2013, pp. 55-56).

En el caso de Thomas se ratificó un poder hegemónico transmitiendo un mensaje a la ciudadanía, estimulando a los grupos conservadores y antifeministas a desarrollar sus argumentos, fortaleciéndolos incluso ahora con bases legales pues la expresión de un poder que se categoriza como legítimo les había dado los elementos suficientes (Santander, 2013, p. 57).

Mientras que en el caso colombiano el aborto se declaraba la inconstitucionalidad, liberando a la mujer y despenalizando el aborto, comprometiendo al legislativo y al ejecutivo respecto a sus facultades, competencias y deberes. Se generó conciencia colectivamente, y animó a mujeres y niñas “...en el sentido de reconocer la violación como un delito susceptible de ser denunciado...” (Santander, 2013, p. 57).



Como es de suponer, los razonamientos contenidos en la sentencia de la Corte colombiana se expusieron a un sin número de prejuicios morales y exigencias desmedidas, lo que obliga a la Corte a nombrar, corregir, e identificar cada uno de aquellos prejuicios. En el 2007 por ejemplo se pronunció respecto a la exigencia de determinados requisitos adicionales que probaren la violación; como la denuncia, para la práctica del aborto.

En el 2009 resolvieron lo relacionado a la objeción de conciencia alegada por algunos funcionarios de la salud que se había reusado atender a una mujer. Esto en cuanto a lo que podemos describir respecto a derecho comparado (Santander, 2013, p.58).

Un importante caso en el 2005 marca un precedente también que explica la relación entre estereotipo de género y violencia de género, el caso Sra. A.T vs Hungría presentada ante el Comité Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer, quienes en su examen de fondo había declarado la vulneración del principio de debida diligencia del Estado pues la víctima ha sufrido violencia física y sexual desde 1998. (Santander, 2013, p. 91)

En el 2003 el tribunal regional de Budapest autoriza el regreso del agresor L.F a su domicilio fundamentando su resolución; en falta la de prueba, y en que no se puede restringir el derecho de propiedad de L.F. por lo que el Comité declara la vulneración del derecho y ordena la reparación integral de la víctima por haberse vulnerado el artículo 5 y 16 de la Convención de la CEDAW. (Cook & Cusack, 2010, p.203).

Sin embargo, como menciona Rebeca Cook el razonamiento del Comité también es insuficiente, ya que si bien concluye respecto a:



las actitudes tradicionales según las cuales las mujeres son consideradas como subordinadas a los hombres, el Comité hubiera podido ser más contundente sobre sus implicaciones y por ejemplo hubiera podido aludir al interés patrimonial que tienen los hombres sobre las mujeres, el cual sugiere que A.T. es propiedad de L.F., y que, por lo tanto, él puede tratarla como tal (Cook & Cusack, 2010, p.204).

Pero este no fue el único. Es fundamental hacer referencia al caso “Campo Algodonero” contra México, en el 2009. La investigación estuvo a cargo del Comité de la CEDAW, pero su resolución definitiva fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La importancia de este caso se debe a la descripción de la violencia sistemática que sufre la mujer marcando un precedente que define el Feminicidio, esto como efecto de los prejuicios presentes en servidores públicos. Quienes reflejan la influencia de los estereotipos de género, los hechos ocurridos en ciudad Juárez se deben precisamente a estos y juzgan moralmente a las mujeres víctimas.

“Uno de ellos, el criminólogo Parra Molina, afirmó que dejar que las mujeres salgan en la noche es como dejar un caramelo en la puerta de una escuela primaria”. “Según el ex fiscal general del Estado de Chihuahua, es muy difícil salir a la calle cuando está lloviendo y no mojarse”. Estas fueron las declaraciones de servidores públicos respecto a las denuncias de entre 260 a 370 mujeres asesinadas entre 1993 y 2003 en ciudad Juárez (Santander, 2013, pp.94-102).

En el marco de la violencia de género este caso es declarado como un ejemplo de *feminicidio*. El desentendimiento por parte de un Estado respecto a conflictos relacionados con el género, pueden degenerar en la pérdida definitiva de las víctimas. (Zaragocin, y otros, 2018, p.112) Marcela Lagarde asocia dicha diferenciación al caso del aborto, pues el feminicidio es:



(...) todas las violencias puestas en actos en contra de las mujeres y su autodeterminación, incluida la violencia estatal resultado de la omisión y negligencia. En esta aceptación, por ejemplo, la criminalización del aborto es feminicidio.”²⁸ (Zaragocin, y otros, 2018, p.112)

El impacto del análisis de los derechos humanos de las mujeres no puede girar en torno al sistema internacional de manera exclusiva y especulativa por lo que se ha hecho referencia a sentencias hito que han moldeado el razonamiento jurídico a nivel internacional. Por otra parte, observaremos en lo referente al sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos como valores masculinos, ha sido declarados universales impregnándose en la administración de justicia. Apenas en el 2012 se pronunció, insistiendo en que los Estados deberían asumir y asegurar el acceso a servicios de salud para la mujer. (Santander, 2013, p.70).

La CEDAW se manifestó también en su recomendación general N°24 estableciendo que una medida de protección para las mujeres y el derecho a la salud, y una vida libre de violencia configuran los argumentos suficientes para que los estados modifiquen su normativa legalizando el aborto, con el objetivo de eliminar la criminalización de la mujer por aborto (Santander, 2013, p.70). De la misma forma Anand Grover, relator especial del Consejo de Derechos Humanos en el 2011 ya se pronunció respecto al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de Salud física y mental.

“Las leyes penales que sancionan y restringen el aborto inducido son ejemplos paradigmáticos de barreras inaceptables para la realización del derecho de las mujeres a la salud, y deben ser eliminadas. El uso flagrante de la coacción física por el Estado u otros actores, como en el caso de esterilización, aborto,

²⁸ Tomado de LAGARDE, M. “Del femicidio al feminicidio”, Desde el jardín de Freud. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2006; RUSSELL, D.; ROBERTA H., Femicide in Global Perspective, New York, Athena Series, 2001 Citado por Zaragocin en Mapeando la criminalización del aborto en el Ecuador



anticoncepción o embarazo forzados, se ha condenado desde hace tiempo como una forma injustificable [...] y una violación del derecho a la salud”²⁹ Grover(2011)

Considerando el texto de la Convención de la CEDAW así como la Convención Belém do Pará ha estimado necesario remover la violencia y discriminación a partir de estrategias necesarias que incluyen estrategias legislativas y otras que puedan corregir los perjuicios cometidos.

Como hemos podido verificar los instrumentos internacionales y algunas instancias se han consolidado como un fuerte bloque de protección e institución de los derechos humanos de las mujeres, aunque el reconocimiento de sus derechos suene a dadiva para el Estado. Este importante desarrollo jurisprudencial, ha constituido un conjunto de interpretaciones en pro del restablecimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Aunque también han permitido identificar serias vulneraciones y silencios como una de las múltiples formas en las que se construye la violencia estructural.

A partir de una noción general de la relación existente entre derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, hemos de identificar algunos casos en los que la especificidad de los derechos sexuales y reproductivos y la subordinación estatal constituye una consecuente vulneración de derechos humanos de la mujer, por ende, violencia de género.

Como se ha mencionado ya, la vulneración de derechos puede consolidarse a partir de acciones y omisiones del Estado, por lo que la nula acción legislativa respecto a la interrupción voluntaria del embarazo representa la negativa gestión pública frente a los derechos humanos de las mujeres.

²⁹ Informe de 3 de agosto de 2011



UNIVERSIDAD DE CUENCA

En el 2002 el movimiento feminista comienza a desafiar aquel sistema de protección a través del litigio estratégico en el caso de P.R. vs México, una chica de 13 años víctima de violación en 1999, quien resultado de la agresión queda embarazada. Denunció la violación ante la entidad competente, institución que no se percató en informarle sobre la anticoncepción de emergencia, así mismo un médico particular se negó a practicar el aborto y no solo esto; ella y su madre fueron intimidadas y sancionadas socialmente. La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde el caso fue resuelto mediante solución amistosa.

El Estado de México aceptó su responsabilidad respecto a la falta de garantías judiciales y protección. Como consecuencia de ello, reconoció públicamente la deficiencia legislativa respecto a un cuadro normativo eficaz en materia de aborto (Santander, 2013, pp.104-105).

Esto se replica en Perú, en el 2005 el caso K.L. vs Perú quien se encontraba en estado de gestación a los 17 años, pero con 14 semanas de embarazo, es diagnosticado como incompatible con la vida es decir se trataba de un caso de aborto terapéutico, en respuesta fue obligada a continuar con el embarazo. El 2002 dio a luz, y en noviembre del mismo año presenta la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debido al riesgo inminente para su salud física y psicológica que involucro el embarazo. La omisión del Estado peruano fue declarada como una vulneración clara de los derechos humanos, debido a los tratos crueles e inhumanos de los que fue víctima (Santander, 2013, pp.104-105).

PG vs Ecuador en el 2008, en el 2006 la denuncia es presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmando la responsabilidad del Estado por actos de acoso y abuso sexual, falta de atención médica y retardos en el proceso penal, en perjuicio de P.G. una



UNIVERSIDAD DE CUENCA

niña de 14 años que había sido víctima de acoso sexual por parte del vicerrector de la institución en la que se desempeñaba como estudiante, sufriría acoso durante todo el año lectivo, hasta ser víctima de violación.

Sus familiares denuncian el hecho pues lo sucedido llevaría a P.G. al suicidio. Lo ocurrido fue producto de la inoperancia del sistema judicial y administrativo pues mantuvieron los hechos en la impunidad, remarcando además la violencia de género como consecuencia de un sistema legal totalmente patriarcal. Ella resultó embarazada, producto de tal atrocidad.

Sus compañeras mencionan que P.G. interrumpiría el embarazo con una inyección que sería colocada por el médico del plantel, quien había solicitado a cambio que ella accediera a tener relaciones sexuales con él. Para el 2002 P.G. habría ingerido 11 diablillos terminando con su vida, como resultado de la posición en la que el sistema la habría colocado (Sandoval, 2002, pp.106-107).

El Estado ecuatoriano no actuó con la debida diligencia frente a la grave situación de acoso y abuso sexual en el sistema educativo, pues este no fue el único caso denunciado. Tampoco a tomado acciones objetivas al respecto, ajustando su marco legal a la realidad, conforme las recomendaciones realizadas por la comisión de la CEDAW y la petición contenida en el informe presentado por la Comisión Interamericana en el año 2008 no ha sido adoptada con responsabilidad, pues se ha mantenido vigente la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo.

El pensamiento feminista desde la denominada segunda ola ha insistido por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como hemos verificado. Pero esta no ha sido abordada solo como un ejercicio pleno de autonomía, a nivel personal más bien ha sido definido como el eje



fundamental del poder y dominación de la mujer como “ el corazón mismo explicativo de la subordinación de la mujer y de las estrategias para mantenerla en esa posición” (Araujo & Prieto, 2008, p.26).

2.2 Discusiones actuales sobre la criminalización del aborto

“Aunque luchemos por los derechos sobre nuestros propios cuerpos, los cuerpos por los que luchamos nunca son lo suficientemente nuestros. El cuerpo tiene una dimensión invariablemente pública.”

Judith Butler

(Vida precaria: El poder del duelo y la violencia, 2006, p. 52)

La despenalización del aborto se ha concebido como un debate prohibido expresamente desde el 2013, desde el debate del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y una manifestación expresa del ejecutivo así mismo esto se ha reflejado en el cumplimiento eficaz a nivel simbólico de políticas públicas en las diferentes instancias de salud, educación, y justicia a nivel nacional. Las complejidades que rodean al tema del aborto ni siquiera han pretendido ser atendidas de modo que esto se neutraliza a través de agendas insípidas que pretenden operativizar la igualdad de género.

Esta acción ha intentado invisibilizar las complejidades que se desarrollan en el límite de los derechos de las mujeres y las problemáticas de género. El aborto, como es lógico, ha sido obligatoriamente considerado desde el método criminal, es así que su despenalización a rodeado el amplio campo de las discusiones sociales, legales, y morales. La metodología empleada para



establecer las latitudes del comportamiento criminal, ha sido marcada por una idea no tan moderna, en la que los factores éticos influenciados discursos políticos, definen el comportamiento criminal.

Cristina Burneo afirma que, comprender la situación real respecto al aborto implica pensar en la tecnología administrada por el Estado, en el cuerpo de la mujer. Esto estará relacionado con los diferentes modos de producción que históricamente han sometido al cuerpo de la mujer para la reproducción de fuerza de trabajo.

Esta afirmación ha cobrado vida en diferentes presentaciones, para desarrollarse en relación al discurso legal (Burneo, 2016, p.4).

Beauvoir³⁰, así como Federicci³¹ consideran que la mujer ha sido un sujeto al que se le atribuye conciencia como un objeto de esta forma siguiendo a Hegel en la reseña del Amo y el esclavo diríamos que la autoconciencia de la mujer para afirmarse como tal dentro del sistema penal debe superar el estado de objetivación y oponerse al otro.

Elvira Narvaja por ejemplo propone un análisis de la obra en la que traduce y personifica al amo como la conciencia que niega la vida de la mujer. (Chanèton, 2004, pp. 199-206)

La frase que impulsó al movimiento feminista de la denominada segunda ola “*lo personal es político*”³² se extiende al tema del aborto entendido como la consigna que define que el cuerpo de la mujer es el territorio en el que se ha precisado las conceptualizaciones y dimensiones políticas que concretan las relaciones estructurales en individuales entre sexos. De esto se derivan productos

³⁰ (Beauvoir, 1949, pp.32-34)

³¹ **Fuente especificada no válida.**

³² (Beauvoir)



culturales, que son socialmente posicionados mediante códigos y leyes creando una conciencia de la mujer en dependencia.

Esta referida conciencia de la mujer en dependencia se refleja a nivel político y estructural. La reafirmación de la apropiación del cuerpo, y de sus condiciones como mujer por parte del Estado a través de la penalización del aborto, destinándolo a una sujeción social, buscando su muerte civil. El poder punitivo en este caso, partiendo de las reflexiones realizadas por Butler, “...Se constituye como una condición misma de la reflexividad del sujeto [...] se entiende como la formación y funcionamiento de la conciencia [...] retomada alrededor de la sexualidad”³³ (Pizón, 2018, pp.16-19)

Como hemos analizado los derechos de las mujeres en especial, sus derechos sexuales y derechos reproductivos se deben a una larga historia de lucha. Se ha logrado consolidar algunos avances, aunque desde un enfoque de género podría consistir también en estancamientos. Uno de ellos es que las mujeres y sus demandas son consideradas por la agenda legislativa en determinados momentos y contextos históricos por lo que un entramado de dispositivos permite la operatividad del poder de acuerdo a paradigmas que responden a estos contextos o momentos históricos.

Al interior de esta disputa, los movimientos feministas han ganado terreno en torno al tema del aborto, sin embargo, la esfera política es confrontada por la estructura de una criminalización que como hemos desarrollado, son el resultado de posturas que conceden derechos a partir de intereses específicos, en una línea aparente de progresividad. Aunque no involucra la deconstrucción de pilares androcéntricos que caracterizan al Derecho.

³³ (Butler, El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad)



Partiendo de la conceptualización de los derechos de las mujeres, descifraríamos que la entrega “heroica” en la que el Estado participa, abarca su protección y garantía, que se consolidaría como el ejercicio de su ciudadanía, entendiendo esto como un límite. Cuando el objetivo es que el Estado cubra la solicitud de las mujeres como titulares de derechos y su reconocimiento como sujetas sociales. Esto ha sido evidenciado en el caso específico del aborto está limitado por concepciones políticas y morales.

Como mencionamos el Estado opera a través de diferentes dispositivos de poder como la maternidad, y aquella virtud de la que gozan las mujeres, que en el caso de ser anulada fragmenta su feminidad por lo que a falta de dicha cualidad su objetivación se profundiza con la criminalización, los inconvenientes no alcanzan la razón cognitiva, por que superan una lógica social. Ninguna instancia cuestionaría las responsabilidades que devienen del *debitum*, que imperativamente la mujer debe cumplir con la fecundidad.

La sexualidad, está justificada a nivel normativo por presupuestos éticos, y consecuencias concretas de sanción social. Por lo que al final el desarrollo discursivo que rodea al aborto actualmente, politiza e institucionaliza el cuerpo de las mujeres, en el plano de la religión, las estructuras sociales, culturales y legales. En el caso legal ecuatoriano veremos como la Constitución de la República, adopta varios pronunciamientos al respecto, partiendo inicialmente de una convocatoria abierta al laicismo en el artículo 1 de la Carta Magna.

Se confirma la trampa de este apartamiento en el artículo 45 de la Constitución en el que protege la vida desde la concepción, aunque también debe ser cuidadosamente interpretado como revisaremos más adelante. Además, reafirmará esa relación cordial con la religión en su artículo 67 definiendo y reconociendo exclusivamente el matrimonio heterosexual, esto como



consecuencia clara de su concepción respecto a derechos sexuales y reproductivos y un modelo funcional de familia tradicional.

Esto representa lo que actualmente el poder aun ha esquematizado, resignificando la maternidad o ciertas variantes como la esencia de la buena mujer, recordando estereotipos de “madresposa”, dando fiel cumplimiento a la moralidad cristiana. En el mencionado artículo 45 de la misma Carta Magna el esencialismo cristiano se impregna como un mecanismo de poder, apelando a la relación madre-hijo desde sus juicios y perspectivas morales que permiten salvaguardar la vida, apegándose a la defensa de la vida.

Por supuesto, este discurso bastante estratégico y profundamente interiorizado por la sociedad a través de una institucionalización heterosexual por “naturaleza” traduce sanciones. No por nada el poder punitivo se ejerce en este sentido y el aborto es considerado como un delito contra la vida, aparentemente y casi de manera “inocente” el Estado refleja en sanción la necesidad social (Posso, 2009, pp.32-34).

Este criterio normativo, que señala la maternidad reduciéndola a una obligación moral, definiendo la responsabilidad del hijo o hija sobre la madre es la receta para el comportamiento femenino según la Constitución ecuatoriana. La identidad social de las mujeres como madres además de limitarlas a dos opciones extremistas; una maternidad forzada o un aborto letal, permean la vida reproductiva de la mujer con funciones simbólicas.

Como lo define Marta Lamas son el resultado de una cultura y una historia que ha sido el reflejo, no de una realidad natural sino de una producción artificial del sujeto mujer (Lamas, Política y Reproducción, Aborto: La frontera del derecho a decidir). Es así que la Constitución ecuatoriana en su artículo 66 deja otra puerta abierta pues define que será un derecho de las



personas el decidir respecto a su vida reproductiva más nos queda la duda, de que las mujeres deben asumir las responsabilidades de la maternidad individualmente.

Se mantiene la interesante reflexión religiosa entorno a la maternidad, mientras que los derechos reproductivos se conciben como una generalidad política masculinizada. En tal caso la decisión de abortar debería concebirse como una de las responsabilidades que las mujeres asumen como sujetos individuales sin embargo “Debatir sobre los ‘límites’ políticos a los derechos de las mujeres apunta a una cuestión fundamental: ¿quién va a decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo? ¿El gobierno, las Iglesias, ¿o nosotras mismas, como ciudadanas?” (Lamas, 2001, p.40).

El fraude del Estado laico según Posso emana precisamente de la defensa de los derechos de las mujeres con cierta exclusividad, eso se encuentra enmascarado por el derecho o en su defecto la legalidad. Pues, los valores y las creencias religiosas son reafirmados por el Estado. Estos discursos de poder que rememoran la fuerza con la que el Estado articula la vida de las mujeres a condiciones religiosas como el mito de la “virginidad” y la “castidad” (Posso, 2009, p.66).

Esto se verifica con fuerza en el gobierno de Rafael Correa con el denominado Plan Familia como ya hemos abordado en un recuento histórico, esta relación desarrolla diferentes versiones respecto a la defensa de la vida, que es adoptada constitucionalmente en dos palabras “la protección y cuidado” desde la concepción. Aunque esta redacción siga desatando debates, debido a que son varias las interpretaciones que la envuelven, es precisamente aquel contexto ambiguo el que deja la puerta abierta a la penalización del aborto hasta la fecha (Posso, 2009, p.66).

En este sentido la necesidad objetiva de la despenalización nos ha llevado a realizar un sin número de estudios que bosquejan la realidad que afecta la integridad personal y la vida de las mujeres que deciden abortar. Intentado esbozar una idea de lo que alimenta a la criminalización



del aborto voluntario, y en efecto la realidad de su penalización. “La práctica del aborto clandestino e inseguro es aún más grave. Según CLACAI, Ecuador es el país donde se practican con mayor frecuencia abortos en Latinoamérica. Alrededor de 95.000 mujeres interrumpen sus embarazos anualmente” (Rodríguez, 2018, p.3) .

Sería acertado indicar que las mujeres, motivadas por innumerables circunstancias, requieren la práctica de un aborto. Por tanto, el grado de eficacia instrumental, aunque no es el objeto de estudio de esta investigación, ha insípido dentro de la lógica funcional que se presumen del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Al contrario de lo que ha sido desarrollado como parte de la función del derecho en realización de su eficacia simbólica, conforme la misma lógica normativa. Esto evidencian la intención latente del Estado en mantener el tema del cuerpo de la mujer en un estado de cosificación.

El estudio, en este caso, se debe abordar desde una explicación en torno a la criminalización de la mujer por aborto consentido en contraste con las alarmantes cifras registradas como parte de las imperfecciones en los instrumentos del tipo penal.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el 13% de las muertes maternas a nivel mundial tienen como causa el aborto clandestino, de la misma forma se ha señalado que en Latinoamérica y el Caribe, alrededor de 5.000 mujeres fallecen debido a la misma causa, siendo en Ecuador la segunda causa de muertes maternas (Rodríguez, 2018, p.4-5).

Así mismo un estudio realizado por el Colectivo Geografía Crítica, mapea la criminalización del aborto, desde un enfoque territorial y evidencia que hasta el 2015, de los datos sintetizados se reflejan cifras impresionantes: 8 de cada 100 embarazos en niñas menores de 15 años terminaron en abortos.



Teniendo en cuenta que 8 de cada 10 de dichos embarazos son reconocidos como producto de violaciones sexuales, esto se desprende de datos presentado por Fiscalía General del Estado. (Zaragocin et al, 2018, pp.118-122)

Por otra parte 8 de cada 100 niñas se embarazan de hombres de 30 o más años. Esto es predominante en zonas como la Amazonía, Esmeraldas y el Oro en ese orden. Estas cifras demuestran el agudo problema respecto a la violencia que sufre la mujer en el Ecuador, la interrogante sigue siendo cual es la realidad de la mujer que ha sido calada por la criminalidad. El problema es presentado evidentemente como de emergencia nacional. Estos datos empeoran desde el 2013, se desglosan antecedentes presentados por el ECU 911 relativos a los años 2015-2016. (Zaragocin et al, 2018, pp.118-122)

Según lo proyectado 54% de las mujeres víctimas de violencia sexual, fueron agredidas por su pareja o ex pareja por supuesto esto no considera los casos en los que las agresiones sexuales son provocadas por parientes (padres, tíos, hermanos, etc.). Se aprecia el panorama previo a la judicialización mas es este mismo orden patriarcal el que define la criminalidad femenina, y sirve de fuente al escenario que se describe estadísticamente. Esto como resultado de la violación al rol sexualmente adjudicado. (Zaragocin et al, 2018, pp.118-122)

El problema de la desviación femenina es circunscrito a la psiquis social de tal forma que la preocupación se enfoca en definir la anormalidad del aborto, y no las condiciones aberrantes en las que estos se están produciendo. Fiscalía General del Estado ha exhibido evidencias de que en el año 2018 y 2019 se presentan alrededor de 11 denuncias diarias por violación sexual a mujeres adultas, complejizando aún más la realidad entorno a la criminalización. (Zaragocin et al, 2018, pp.118-122)



Según los datos presentados por el INEC desde el 2004 hasta el 2014 los casos de abortos voluntarios suman 366.748 casos “...Desde la aplicación del Código Integral Penal en el 2014. De las 243 mujeres enjuiciadas en los últimos cinco años, 62 fueron criminalizadas en el 2017” (Zaragocin et al, 2018, p.122) Lo que demuestra la incorporación dramática de la realidad de la criminalización y la razón de su incremento con intensidad. La realidad es que los hechos configuran un sistema penal que atrapa a la mujer en la legalidad, como resultado de una proyección de roles sociales que son asociados a la penalización del aborto.

En este caso el Derecho penal se ofrece como una de las infraestructuras sociales para la elaboración de una conducta social femenina que posibilita la vida. Quien delinque se desvía de esa posibilidad por lo que tal conducta “desviada” del sentir común se sujeta al acuerdo social que las castiga. Pero, este fenómeno ha convertido la criminalidad en una maniobra de pretensión que se refleja en el actuar común. El sentido de la criminalidad en el sistema de salud ha sido evidenciado en la investigación realizada por la Universidad Regional Autónoma de los Andes con sede Ecuador en el año 2016.

De un total de 37 gineco-obstetras encuestados, de un grupo etario de entre 37 a 59 años, con un predominante del sexo masculino en un 69,7%, de estado civil casado en un 94% declarados profesantes de la religión católica o cristiana un 88% de ellos. Esto respecto a una distribución practica pública y privada entorno al aborto. El 48,5% manifestó no atender un aborto en el caso de que la mujer lo solicitara, aunque un 70% manifestara que el método medicamentoso para tratar un aborto incompleto es de fácil uso y acceso. (León et al, 2016, p.171)

Un 90,9% considera que si las indicaciones en la Ley ecuatoriana se extendieran la mortalidad materna por aborto disminuiría. Esto considerando los componentes que influyen la



decisión de gineco-obstetras respecto al ofrecimiento de *misoprostol*, y su sentimiento en relación a las matrices discursivas que se transmiten con la penalización del aborto (León, et al, 2016, p. 173). En este caso una respuesta progresista, la encontraríamos en el imaginario de la emancipación, que debe caracterizar al Derecho.

En este caso he sintetizado a través de cifras la situación calamitosa que conocen las mujeres debido a la criminalización del aborto, pues si en el 2013 se habría despenalizado el aborto “....Cerca de 10 mil niñas entre 7 y 11 años que fueron violadas en los últimos cinco años, habrían tenido la oportunidad de elegir si querían o no parir” (Ponce, 2018). El castigo como un método de aislamiento ha sometido a la mujer a tratos crueles e inhumanos, imponen disciplina en la población a través de costumbres violentas.

La asistencia legal incluso puede tornarse deficiente y formal para las mujeres. La realidad cuantiosamente documentada por varias investigaciones, reflejan la inconstitucionalidad del régimen penal en casos de aborto. “...En el Ecuador al menos siete niñas menores de 14 años quedan embarazadas cada día. De ellas, seis han sido víctimas de violación sexual...” (Ponce)

Un patrón democrático, que refiere al falso modelo de ciudadanía autónoma ha discriminado a partir de prohibiciones medidas al calce de determinadas categorías sociales, con especial referencia a los derechos sexuales y reproductivos. Por ello sostener que la teoría de democracia comunitaria desarrollada por Dworkin puede integrarse, esta condicionada a un análisis feminista del Derecho Penal³⁴ (Dworkin, 2010, p.111-144).

³⁴ También citado por Ramiro Ávila Santamaría en “La in-justicia del sistema penal” (Santamaría, Los hechos: funcionamiento de la justicia penal, 2013, p.145)



Esta podría nutrir un sistema penal garantista siempre que en el reconocimiento de una acción comunitaria integrada al hablar de la participación, y la igualdad de derechos sostenga las diferencias empíricas entorno al ejercicio basado en el género que ha condicionado a la mujer a una situación que vulnera su independencia.

Cada uno tendrían el rol de marcar la diferencia, siempre que el principio de interés sea reafirmado por las convicciones individuales de la mujer apartado superando la violencia estructural (Santamaría, 2013, p.145-146).

Dado que las mujeres están obligadas a desarrollarse en un contexto que a nivel estructural y cultural limita sus posibilidades de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en condiciones libres de violencia, es importante incluir el régimen de una justicia reproductiva, misma que pretende la integración diversa de las condiciones en las que las mujeres ejercen sus derechos pues, los contextos sociales no son los mismos³⁵:

(...) Por lo tanto, en el momento de tomar decisiones de políticas públicas no se pueden excluir los contextos de violencia a los cuales estamos expuestas las mujeres ecuatorianas, ni se debe banalizar la realidad cotidiana que viven muchas mujeres al ser violentadas sexualmente y/o criminalizadas por decidir sobre su cuerpo. (Burneo et al, 2019, p.47)

Este análisis incluiría un efecto holístico del enfoque de género, profundamente desarrollado en la inclusión de los derechos sexuales y derechos reproductivos entorno a al tema del aborto. Está claro que nuestros cuerpos y además nuestras vidas, dependen de circunstancias políticas y sociales que intenta constantemente ganar criterio y control, a partir de discursos

³⁵ La justicia reproductiva se encuentra mejor desarrollada en (Cook and Dickens, From Reproductive choice to reproductive justice)



egocéntricos, en los que la mujer aparentemente el cuerpo de la mujer responde a un supuesto bien común. (Lamas, 2001, p.33)

2.3 Los discursos sociales y su correlación con la función simbólica del Derecho en la criminalización de las mujeres por aborto

Las vivencias de mujeres respecto al aborto, constituyen las consideraciones del sistema patriarcal. Sus principales representaciones, y dispositivos de poder han sido históricamente simbolizados por el derecho. De esta forma, la tipificación del aborto, como un delito contra la vida coincide con el paradigma de lo humano, entorno a los estereotipos de género.

Los diferentes significados que el sistema patriarcal invoca a partir del Derecho niegan la aceptación de la violencia y la discriminación de la vida de la mujer como un elemento fundamental de la eficacia del tipo penal. (Vargas, 2001, p.423)

En este punto podríamos mencionar que reflexionar sobre los alcances del derecho, como resultado de la apropiación del cuerpo de la mujer, es el resultado del adoctrinamiento. Este se materializa en el ejercicio de la maternidad como aplicación de una consecuencia natural. La sanción social en razón de esta consecuencia, permite la interiorización de un momento dado para las mujeres, como aporte a una realidad social que mantiene eficazmente el *status quo*.

“...El legislador es quien crea y establece las normas, y protege bienes jurídicos por que la sociedad así lo requiere. Pero es el legislador quien va a identificar cuáles serán los bienes que deben ser considerados en la norma penales...” (J. d. Azuay).

En principio, se afirma que el bien jurídico protegido en el caso del aborto, ha sido considerado por el legislativo como una respuesta a importantes pretensiones que reclaman



socialmente las diferencias naturales entre sexos, como un contenido histórico que reconoce tradiciones hegemónicas.

Sin embargo, dicho reclamo entra en juego con el poder que ha planteado inicialmente los modelos de un espacio que será necesario para la formulación de diferentes explicaciones que únicamente reflejan el sexismo, mismo que es socializado en las mujeres a partir de roles de género (Vargas, 2001, p.426).

La sociedad civil, por supuesto, a partir de ello elabora y condiciona conceptos de igualdad, configurándose entonces la función simbólica del derecho, en diferentes escenarios de la vida pública y privada de la mujer, como podemos observar en este relato:

He asistido a instituciones públicas y privadas, pidiendo que me ligue, pero se niegan. Me dicen que lo piense, que soy joven que debería considerarlo [...] Pero, y si solo no quieres, no es justo. Mi mama siempre me decía, el hombre cae parado la mujer cae sentada[...] Aunque la maternidad nunca ha estado en mis planes, cuando me enteré que estaba embarazada, si se me cruzaron esos pensamientos, me sentía mala persona; por decidir no ser madre y que además sentía que estaba matando una vida.[...] Es injusto, no podemos decidir sobre nuestro cuerpo sin también sentirnos culpables (Nº1))

De esto resulta una nueva lectura necesaria para la reformulación del clásico contrato social, propuesto por Hobbes³⁶, Locke, Rousseau³⁷ y los modernos como Rawls que intenta plantear diferentes razonamientos en los que la subordinación de la mujer a través del derecho es legítima a través de acciones y omisiones en los que se consagra la familia patriarcal.

³⁶ Hobbes, T. (1993), *Del ciudadano y Leviatán*, Madrid, Editorial Tecnos.

³⁷ Rousseau, Jean J. (1979), *El contrato social*, Madrid, Escritos de combate.



Es así como el concepto de justicia en razón de una igualdad aparente, será sesgado por las consecuencias que se derivan de una funcionalidad que ha relacionado la realidad en un concepto universal y sexualmente neutro (Vargas, 2001, p.427).

La administración de justicia se ha convertido en una de las plataformas que refleja este orden de igualdad aparente, representando los relatos sociales más tradicionales, a partir de una engañosa neutralidad. “...Es importante el papel de los jueces penales, en el control de aquellas estructuras sociales y aquellos valores de la sociedad” (J. d. Azuay), así lo insinúa el administrador de justicia de la Unidad de Garantías Penales del Azuay.

Y será precisamente esta actividad jurídica la que permita la estructuración de una relación simbólica entre lo prohibido y permitido para la mujer, a nivel formal. Efectivamente, así se construyen significados a partir de mensajes: “yo le envié un mensaje, aquí existen normas que protegen valores y si usted las infringe el estado le va a sancionar y le va a caer con todo su peso.” (J. d. Azuay)

Así, se introduce en la interpretación de la norma seres corpóreos masculinos y femeninos, cuyo mensaje será el curso de desarrollo social concentrado en la reproducción y descendencia. Según lo declarado por el administrador de justicia: “...el tipo penal, el único mensaje que nos da es que el aborto es punible no hay otra reflexión[...] el bien jurídico protegido es la vida del que está por nacer” (J. d. Azuay).

Aunque esto contradiga las necesidades de las mujeres, se manifiesta desde la actividad de justicia que: “Se podrá aportar para las estructuras sociales, para los comportamientos, pero no siempre la norma puede ir en el mismo camino que el desarrollo social” (Azuay J. d., 2019), de modo que las necesidades identificadas por el Derecho, alcanzan a perpetuar los estereotipos de



género, justificándose en la aparente necesidad colectiva. No obstante, esta estará representada por un sistema hegemónico.

La posesión del cuerpo de la mujer es parte de la articulación de un sistema simbólico que establece clasificaciones y categorías que no logran solo una función cognitiva sino además una política de dominación que se traduciría en exclusión y sanción social de manera que el poder aparece como normal y aceptable. Esto lo relata Paola, una de las mujeres entrevistadas.

“Yo crecí creyendo que mi meta en la vida era tener hijos, ser esposa, sobre todo tener hijos[...]El momento que aborté, sentía que estaba haciendo lo correcto para mí pero me sentía mala de todas formas por matar, por no tener el valor de ser mama..” (N°1))

“Cada vez que tenía sexo con un chico me sentía súper mal, sentía que fallaba y me repetía las palabras de mi mamá y mi tía, me decía a mí misma soy una mujerzuela...” (N°1))

Paola nos describe como el poder se interioriza como una realidad suficiente, que permite la aceptación de la maternidad como proyecto de vida. La temporalidad que define los derechos sexuales y reproductivos, es deslegitimada por las mujeres debido a una concurrencia de modalidades que, articuladas desde diferentes localidades culturales, llega aceptar la socialización del deber ser femenino trasmitiéndolo generacionalmente.

La funcionalidad del derecho parte de la aceptación mencionada principalmente. Y contribuye en la prolongación de estereotipos de género a partir de condicionamientos, como se puede observar en una de las declaraciones, “...cuando tenía 15 años me decían no te estarás dejando manosear, si pierdes la virginidad con alguien con ese te casas...” (N°1))



Es así que las mujeres que exteriorizan sus decisiones, rechazando la maternidad, están obligadas a hacerlo en el núcleo de sus preocupaciones del deber ser femenino, dando muestras de superar cuestiones que demuestren la posición de las mujeres en la sociedad (R. L. Segato).

Estos conceptos se desplazan entre la institución del matrimonio y la maternidad como una obligación femenina. Esto se verifica que es interiorizado de manera especial por las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, de acuerdo a lo descrito por las mujeres entrevistadas en esta investigación.

“...Cuando supieron de mi primera beba no hubo problema por que como te cuento yo estaba casada. Pero si mi familia se enteraría de lo que pasó, ahora, en el segundo embarazo, me mataban solo me mataba...” (N°2))

“...aunque fue mi decisión no pude abandonar mis pensamientos de que está mal, y que por ese lado sea fácil, porque te han enseñado toda tu vida que está mal, que no solo eres una asesina por que sea un delito, sino que además es un pecado simplemente siempre te han enseñado eso...” (N°4))

Efectivamente el poder simbólico se mantiene a través de actividades que aparentan su separación objetiva. Como se identifica en uno de los relatos de los/las administradores/as de justicias, estos intereses materiales son asumidos como neutros. “...El derecho penal tiene una serie de categorías dogmáticas el acto, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad solamente cuando supere todas aquellas etapas se puede decir que existe un delito y que aquella persona es imputable...” (J. d. Azuay).



Se puede evidenciar el como disfrazan su finalidad como formas desinteresadas, intentando no llamar la atención y aparentando determinado nivel de eficacia.

La eficacia del tipo penal se percibe entonces en la medida que exista cierta correspondencia con la estructura social que reproduce y refuerza las relaciones de poder a nivel simbólico (Villegas M. G., 2012, pp.39-41), y un sistema que socializa los límites a estos esquemas de percepción entorno a la autonomía del cuerpo de la mujer. Estos mecanismos están latentes en el discurso legal ecuatoriano, de acuerdo a la declaración de la persona entrevistada.

(...) En la posición de que el derecho esta simbólicamente para punir un delito, obviamente encontraremos la criminalización de las mujeres por aborto, la ley prohíbe la muerte del que está por nacer, pero si tomamos al derecho penal como un medio para resolver conflictos podemos encontrar que se respeta el derecho de las mujeres bajo ciertas circunstancias que “justifiquen” detener el desarrollo del embarazo o terminar con la vida del que está por nacer (J. d. Azuay)

Este proceso de base que reproduce un sistema de dominación masculina, es reafirmado por la administración de justicia cuando de manera trascendental conciben el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a partir de determinados “*justificantes*”, que permitan que sujetos sociales, en este caso las mujeres alteren el *habitus*.

(...) si no queremos ser demasiado liberales, y decir que no existan límites para cuando se realiza un aborto, deberíamos regular las semanas de gestación circunstancias que tenga que ver con la vida de la madre como con la viabilidad de vida del producto de la concepción (J. d. Azuay)

“...Entonces ahí viene un conflicto entre la vida y la muerte, hasta qué punto las mujeres tenemos derecho de decidir sobre ese producto de la concepción, que pudo haber sido no deseado” (J. d. Azuay). Esta enunciación de uno de los jueces/as entrevistados/as, resulta trascendental al



momento de verificar como la naturalización de determinados valores, alteran el proyecto de vida de la mujer sin que esto sea realmente identificado como la violencia simbólica que representa (Safi, 2015, p.4) ,

“...El derecho por supuesto, tiene una construcción patriarcal, y su respuesta para una mujer será en este sentido, porque es víctima de una agresión sexual y resulta embarazada, pero le va a castigar si decide abortar” (J. d. Azuay). Declara el juez de Garantías Penales del Azuay, al describir el perfil de una mujer ha decidido interrumpir su embarazo. Esto es considerado como una realización objetiva de cuestiones de género. Como hemos mencionado en capítulos anteriores, esto refleja las formas y representaciones del deber ser femenino en la Justicia, conservando los considerados mitos que rodean al aborto.

(...) cuando yo me hice la ecografía del segundo embarazo antes de practicar el legrado me insistieron diciendo que él bebe estaba ahí que su corazón latía y que él se aferraba a vivir entonces yo sentía que debía continuar y me dieron dos semanas para que decida, si quería o no practicar el legrado, pero yo ya había decidido, no quería tener a ese bebe (N°5))

Esta declaración, corresponde a una mujer que decidió interrumpir su embarazo y expresa uno de los aspectos fundamentales del culto a la maternidad. Este no solo se implanta en las mujeres como un sentimiento que clasifica y ordena su proyecto de vida, cuando deciden ejercerla. También es parte de la tipología que catalogará socialmente entre hombres y mujeres, y definirá el comportamiento de las redes que las rodean, incluso entre pares.

Esto lo verificamos en la expresión de una de las entrevistadas, cuando vislumbraba el escenario hipotético de que su grupo de amigas supieran lo que había decidido.



Seguro habría recibido rechazo, por el hecho de que por ejemplo esta amiga que cree mucho en la religión, la que habló conmigo en el primer embarazo y me dijo que lo tuviera, seguro no habrían estado de acuerdo con que yo haya decidido terminar con esa vida y probablemente me lo habrían reprochado por algún tiempo. (N°5))

Esto puede designar un grado de sanción social, mismo que completa el cuadro de adoctrinamiento repetido.

Vivimos en una sociedad tan conservadora y con personas tan creyentes que el hecho de aceptar que abortaste, es decir; oye mataste a alguien es un pecado, y ya. Obviamente por que no entienden el riesgo sobre el que te pones al decidir. Te pones en riesgo tú y la otra persona. Porque, en mi caso continuar con el segundo embarazo acarrearía la vida de alguien más, mi primer hijo(N°5))

No son solo los seres femeninos los que remiten a su propia psicología, el deseo de la maternidad, como un empeño que intenta darle cuerpo a los estereotipos que desde pequeñas han asimilado. Por supuesto que cuando la maternidad se reviste de autonomía, aunque esta no esté libre de un estímulo patriarcal, representa una experiencia distinta. Aunque también sancionada socialmente en el caso de no estar planificada y no haber cumplido con los cánones exigidos.

Alejandra, es madre soltera de un niño de dos años. Ella decidió someterse a un aborto en el segundo embarazo. Hoy comparte su experiencia y relata la concurrencia de elementos que combinaron los rasgos típicos de una familia patriarcal. La autoridad y la posición de la mujer se convirtió en un método de crianza a la que ella con devoción se había aferrado.

Menciona, “Cuando estuve embarazada fue el momento en el que mas mujer me sentí” aunque reconoce la apatía que sentía en un inicio. “Nunca fue fácil” expone, pero mayor sería el reproche si decidía no tener a su primer hijo, como revela en su declaración. “(...) por todas las



cosas que se daban a mi alrededor, yo me cuestioné ¿por qué me había pasado eso? justo a mí, y rechazaba el estar embarazada. Si habría podido en ese momento deshacerme del bebé, lo hacía.”

(N°5))

Las conversaciones desarrolladas entorno a la maternidad y el proceso de aborto, con las entrevistadas, recogen testimonios en los que las mujeres observan al mito de la maternidad como un privilegio que no han deseado tener.

“Yo tome mi decisión por el miedo que tenía a todo y sobre todo a él, mi novio, él me dijo que iba a resolver todo y me dio unas pastillas. Él me dijo como que ten tomate, yo ni siquiera pude pensar en tener un hijo porque solo tenía miedo y más que miedo.” (N°4))

Las versiones de la ideología dominante entorno a la deidad femenina y su capacidad reproductiva sistemáticamente transgreden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El Derecho desplaza unidades de violencia simbólica que son encabezadas por los diferentes entes de poder. Por lo que el mito de la culpa, es reemplazado por el miedo a la sanción social. Esto es claramente verificable en los siguientes testimonios:

“...Sentía que mi amiga me iba a juzgar, a decirme que no aborte que se iban a enterar todos en Cuenca, y ya sabes cómo es esta ciudad, así pensaba en todas esas cosas...” (N°1))

“Lo que si sentí mucho es que más que yo sentirme mal y culpable, era que no quería que otras personas se enteren porque sabía que me iban a juzgar, y que aunque yo no me sienta mal, si me hubiesen dicho que soy una idiota, que soy una mala, etc.” (N°3))

No solo se trata de que las mujeres sean inconscientes de los presupuestos en los que socialmente participan, ya que esto se encuentra estrechamente relacionado con cierta restricción



involuntaria que ellas desarrollan en el mapa de la cotidianidad. Como observaremos es básico, que muchas de ellas exterioricen crisis, en las que dicho sea de paso se encuentra el ejercicio de la maternidad obligatoria.

“es como que las mujeres nacemos para ser madres, pero eso nunca estuvo en mis planes”. (N°1))

“Nunca tuve miedo de ir presa, pero creo que esto sobre todo era porque me había informado de que el aborto con medicamentos no deja rastro entonces en caso de que el proceso salía mal, yo podía acceder a un centro de salud y decir que fue un aborto espontáneo.” (N°3))

“...creo que mis papas piensan que me han dado información suficiente, educación suficiente como para poder evitar llegar a esto. Entonces creería, que sería una decepción, y lo siento así de grande porque no lo evite.” (N°3))

A través del tiempo la libertad y el desarrollo progresivo del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos incluso en la modernidad se sostienen en una base racional que determina sus decisiones en un contexto de violencia. Las mujeres entrevistadas, han sido víctimas de violencia en más de una ocasión por parte de su pareja, conforme lo podemos identificar en sus relatos:

“...una vez el me obligó a tener relaciones, porque estaba ebria y me violó ” (N°1))

“...Yo no quería ser madre, quise abortar a mi primer hijo pero él no me dejó, me amenazó con denuncia, si se enterara ahora el mismo me denuncia” (N°2))

“No fue mi decisión, aunque tenía miedo, un rato si le dije espera mejor pensemos bien y él me dijo de nuevo; no que tu familia, y me metió miedos. Entonces ya me tomé las pastillas” (N°4))



La violencia es un fenómeno que se ha convertido en una referencia, al preguntarnos sobre la correcta conceptualización del aborto. Juzgamos al mundo a través de un juicio de moralidad sin conocer el medio perfectamente.

Lo normativo de antemano impide comprender la realidad de las mujeres que deciden abortar, pues, no se trata de insistir en una descripción neutral o en su defecto “no se puede hablar de un derecho penal casuístico.” (J. d. Azuay)

Más bien, se debe considerar abiertamente que la violencia es más importante todavía, que presuponerlo como un principio. Va a ser comprendida, por el Estado de manera general, y por supuesto justificada. Lo que generalmente legitima estas justificaciones son otros principios de la democracia liberal “Como fuente de los bienes jurídicos primero tenemos los intereses de la sociedad, el desarrollo histórico de la sociedad...” (J. d. Azuay), por lo que el Estado ya se ha adelantado a definir concretamente que tipos de población, cuyas vidas merecen ser protegidas.

Pero esta concepción en otras palabras justifica la violencia, y tendremos que preguntarnos además de las distinciones demográficas que pueden generarse en el análisis, en donde se halla incorporada objetivamente. El sujeto reconocible es el Estado, mas existen ciertas manifestaciones que han tomado cuerpo; la pareja de las víctimas, los servidores de la salud, su entorno familiar, su entorno social e incluso su entorno educativo.

“Él era violento cuando me embarace[...] pensaba que el embarazo me ataba a él...” (N°2)) sin duda algunas cuestiones interesantes que se pueden identificar, serán qué; en definitiva las conclusiones normativas, como respuestas morales se basan en un campo de acción diverso. No tuviera carácter de dominación si este no alcanzara los espacios más pequeños de referencia patriarcal.



Las relaciones de poder se materializan en la dominación de la pareja de las víctimas, pero además en aquellas oposiciones sociales que las mujeres muestran como una realidad moral prefabricada, ninguna de ellas rechaza su decisión “no me he arrepentido de la decisión que tome, un solo segundo” (N°4), 2019) aunque si sienten la perturbación de esta actividad social crítica y sancionadora como una contradicción que deriva en miedo y coacción simbólica como podemos identificarlo en el siguiente extracto:

“...a mi hermana tampoco le he contado porque siento que me va a juzgar, porque ella tiene todavía esa mentalidad con la que nos crio mi mama. Como que, si estas de puta por ahí enfrentes las consecuencias” (N°1))

Las complejas representaciones que articulan la forma de entender el mundo desde la experiencia femenina están inmersas en lo cultural y lo psíquico como hemos podido verificar.

Pero el resultado de esta elaboración psíquica es obra de una adquisición inconsciente de la identidad femenina, manipulada por el Estado a partir de la criminalización de las mujeres por aborto, esto asociado a la maternidad conforme el sistema heteropatriarcal. La sexualidad de la mujer resultan ser una amenaza pues llega a convertirse en autonomía. “Cuando vivía con él, yo me dedicaba al estudio y a mi hija porque él trabajaba” (N°2)).

De esta forma se observa que la sombra que opaca a las mujeres que deciden abortar, además de ser el resultado de un proceso largo de dominación: “mi hermana que por ejemplo tenía full sueños cuando era adolescente, y de repente se casó (se le quiebra la voz), no sé, creo que el mundo es injusto con las mujeres” (N°1)) estructura el orden persistente y fundamental del proyecto de vida que el Estado ha condicionado para la mujer.



Esto se lleva acabo conforme representaciones constantes entorno a la biología universal y el deber ser femenino tal como se identifica en el reconocimiento exteriorizado por una de las participantes. “Pienso que si habría decidido continuar con mi embarazo seguro no habría acabado la universidad siquiera, no estaría aquí” (N°3))

Como hemos mencionado, comprender a la mujer como sujeto individual, presupone tener conciencia de los deseos de las mismas delineando con rigurosidad los resultados de su experiencia personal, pero esto reconoce comprender que las mujeres han sido incididas por una castración simbólica que normaliza el sexismo como producto de una elaboración cultural y social por lo que la adquisición imaginaria entorno a la identidad no debe ser abordada al margen de esta influencia (Lamas, 2019, p.4).

Una perspectiva ampliamente cualitativa nos ha permitido verificar la variedad de formas de simbolización e interpretación del género sin embargo la riqueza que comprende este proceso registra como veremos una reproducción de usos conceptuales y percepciones tradicionales que no podemos ignorar.

Por esto, hemos tomado la investigación cualitativa realizada por la Fundación SEDAS en el año 2016 con el fin de analizar comparativamente lo incierto entorno a la feminidad, y su peso en la reproducción de conceptos, así como en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En líneas anteriores, por ejemplo, manifestamos que el control del cuerpo de la mujer y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos se desarrollan en el espectro de invasiones violentas por parte del Estado, pero sobre todo esto se proyecta críticamente a partir de ciertos compromisos éticos que la mujer ha firmado involuntariamente entorno a su sexualidad que



UNIVERSIDAD DE CUENCA

efectivamente son controlados por los hombres a través de diferentes invasiones violentas y machistas, como observaremos en las siguientes afirmaciones:

“Tenemos una categoría para llamarlas a las chicas que no acceden a tener relaciones sexuales y otra categoría para las que si acceden” Hombre joven de la ciudad de Cuenca (SENDAS, Ortíz and Hidalgo)

“El hombre puede decidir que es ético y que no sobre todo al cuerpo de las mujeres “Hombre adulto de la ciudad de Cuenca (SENDAS, Ortíz and Hidalgo)

"siendo hombre, sería para sentirse más hombre, decir –yo soy el más macho-" Hombre joven de la ciudad de Cuenca (SENDAS, Ortíz and Hidalgo)

Por una parte, los hombres, apartados del prototipo de alteridad, reduciendo la realidad del cuerpo de la mujer a una falsa paternidad responsable; han reclamado también por la participación en la decisión, aunque presentan signos de sensibilidad con el tema la reacción posible dentro de este presupuesto evidencia el control del cuerpo de la mujer a partir de la tradición (Juan and Rodriguez).

“El aborto como un derecho ha sido político, hay un problema de salud pública, yo no concibo al aborto como un derecho exclusivo de las mujeres y adicional al tema de la autodeterminación del cuerpo femenino” Hombre joven de la ciudad de Cuenca (SENDAS, Ortíz and Hidalgo)

“La paternidad ha sido uno de los componentes abandonados en el debate” Hombre joven de la ciudad de Cuenca, (SENDAS, Ortíz and Hidalgo)

“Los hombres también tenemos algo que decir en la paternidad” Hombre joven de la ciudad de Cuenca, (SENDAS, Ortíz and Hidalgo)



“Es importante la corresponsabilidad del hombre, partiendo de ello hay evidencia de que las 12 semanas no representan una vida, es una decisión que debe ser consultada con el compañero”.

Hombre joven de la ciudad de Cuenca, (SENDAS, Ortíz and Hidalgo)

Se puede observar el fundamento de la sanción social, muy a menudo invocada por las mujeres que han decidido abortar, puede ser valorada en el papel predeterminado para el hombre como sujeto que personifica la oposición simbólica entorno a la construcción genérica del cuerpo.

“Es la única forma que tienen las mujeres de invertir el orden social, es un acto subversivo”

Hombre joven de la ciudad de Cuenca (SENDAS, Ortíz and Hidalgo)

Terminan por afirmar la decisión de la mujer como una manifestación que rebasa los límites y códigos de comportamientos que los hombres han tolerado como justos para la mujer.

(Baudrillard, 1993 p.138) Uno de los hombres que conforman el grupo focal realizado menciona;

“No puede llegar a ser un derecho es un tema de subversión” (SENDAS, Ortíz and Hidalgo).

En general para las mujeres valores y creencias religiosas se contraponen a la posibilidad de optar por el aborto, se crea entonces una tensión entre esos valores y la toma de decisión por el aborto, una mujer que está segura de la validez moral de interrumpir un embarazo enfrenta el peso del tratamiento social de su decisión, estigma social, vergüenza y miedo que sin duda están asociadas a las prácticas abortivas.

(SENDAS, Ortíz and Hidalgo)

Por otra parte, esto determina la clara crítica que hemos desarrollado al funcionalismo del Derecho y las afirmaciones que el sistema clásico ha presentado como válidas. Una concepción instrumentalizada del control del cuerpo de la mujer misma, que ha estado presente en nuestro análisis, sin encontrar más resultados que un único caso judicializado por aborto consentido, en el



periodo comprendido entre el año de entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) hasta la fecha, en la Provincia del Azuay, según resultados del Consejo de la Judicatura.

Se debe afirmar que la eficacia del tipo penal alcanza un lugar central en nivel simbólico de su función, este en relación al cuerpo de la mujer, y sus derechos sexuales y reproductivos. La multiplicidad de resultados que han sido incorporados a esta investigación explican la clara diferencia entre la función simbólica y la función instrumental del Derecho.

La introducción definitiva del resultado de un único caso judicializado por aborto consentido en el Azuay, demuestran la intención que se desprenden de la criminalización de las mujeres por aborto.



Conclusiones

El poder simbólico del Estado es legitimado y constituido a partir de numerosas medidas que se encuentran explícitas e implícitas en el ordenamiento jurídico. Discriminan a la mujer a partir de notables indirectas que inciden en los valores y actitudes que tienen como fin normalizar conductas sexualizadas. El Derecho es uno de los diferentes dispositivos, que más potencia la creación de hábitos en una sociedad.

El sistema legal ha articulado un mundo violento para las mujeres, pese a determinados mandatos que se esfuerzan por establecer correspondencia con la igualdad de género. El poder del Estado se refleja simbólicamente en el derecho, a partir de determinadas disposiciones moralizadoras que se constituyen en la célula de la violencia, aunque de fondo no afecte exclusivamente las mujeres (R. Segato).

Por esta razón se debe asignar la particularidad de que es el sistema patriarcal el que tiene como efecto una psicología violenta en todos, desprendiendo violencia sexual y estructural hacia las mujeres. En el fondo, toda relación de poder resulta clasificarse en diferentes status de violencia, sin embargo, las relaciones de tipo estructural que operan a través del Derecho, criminalizando el aborto, se basan en una resistencia de tipo moral y patriarcal.

La función simbólica del Derecho es la interpretación de esta resistencia, basándose en la costumbre y la historia como una reproducción constante de status entre hombres y mujeres, esto se infiltra en el contrato social, ya que como se ha afirmado “El derecho penal es el reflejo de una necesidad social”, por lo tanto, lo que aparentemente se nos ha mostrado como un modelo



garantista, que se reproduce automáticamente en función de la protección de derechos, no es más que un modelo pre determinado, que repite un ciclo de violencia hacia la mujer, a partir del control de su cuerpo (R. L. Segato).

La calidad y contenido de los valores que se encuentra implícitos en el ordenamiento jurídico limitan la experiencia de la mujer a modelos binarios, en los que participan a partir de comportamientos aprobados y adecuados al Derecho, aunque estos constituyan una vulneración sistemática de sus derechos sexuales y reproductivos. El adoctrinamiento, es uno de los elementos formales del Derechos y nuestros propios juicios participan en la adecuación del mismo a nivel psíquico de las mujeres, ya que ellas lo traducen en sanción.

El aborto es una realidad que a partir de la lectura de resultados analizados en esta investigación propone diferentes alternativas de estudio. Sin embargo, hemos verificado que la descriminalización del aborto consentido sirve para reflexionar a nivel instrumental y epistémico. Las emociones compartidas fortalecen la capacidad de conocer y conectar las experiencias de mujeres que han decidido abortar, evidenciando la problemática a nivel estructural e individual.

Como fin estructural la función unívoca del Derecho a nivel instrumental sería, disminuir el índice de abortos en el Ecuador, más las diversas formas que han sido verificadas demuestran que el aborto es una realidad, y está muy cerca de todos y todas. La obra del Derecho afirmado como un instrumento de dominación ha sido efectivamente verificada. Manteniendo incluso sus propias contradicciones, de modo que las diferenciaciones estructurales únicamente han perpetuado la violencia hacia la mujer, y su consecuente criminalización.

Una de las afirmaciones que resultaron dentro de la investigación, rodean el camino de la mínima intervención penal y la inclusión del enfoque de género en el Derecho como clave



epistémica de desarrollo y ética de administración de justicia, así como en la actividad legislativa. El deterioro de la humanidad se debe a cada acto sexista. Este es un problema reconocido por el Derecho, pero sus esfuerzos no han alcanzado a reconocer la fuerza de su dominación cuestionando el modelo hegemónico o los privilegios entorno a la masculinidad.

Por otra parte, el cuestionamiento debe apuntar a la naturalización de la violencia en los espacios públicos y privados, partiendo de una crítica al carácter masculino de las sociedades contemporáneas que eligen como atender las problemáticas sociales que rodean a las mujeres y su sexualidad. La opresión de las mujeres esta implícita en los prejuicios y estereotipos de género, mismo que funcionalmente aportan al condicionamiento de las decisiones de las mujeres y el ejercicio de sus derechos (Fernandez).

Estos estereotipos y prejuicios se transmiten generacionalmente y se legitiman a nivel estructural con el encubrimiento de determinadas formas de opresión como la criminalización del aborto. La justicia manifiesta su aspiración por la introducción de una lógica de género, aunque esta necesidad sea planteada únicamente por las mujeres tanto a nivel formal como informal, pues es implacable la marca de la socialización en los hombres y sus discursos.

El proceso de desentrañamiento de significados que alteran la estructura psíquica de las mujeres estableciendo formas de comportamiento que marcan al sexo con el género y la percepción de su entorno al respecto, determinan las diferentes formas en las que las mujeres asimilan el orden político y social. Se presencia notablemente una conciencia de que estos pensamientos han sido prefabricados por el sistema.

Aunque estas representaciones que tradicionalmente establecen un contrato social que determina al sexo por el género, son conscientemente identificadas por las mujeres que han



decidido abortar no han abandonado la percepción del poder, puesto este se ha impregnado en la cotidianidad de las mismas que han normalizado la sanción social, pues la asocian con la situación legal del aborto en el país, aunque esta no sea representada como justa por las mismas.

La culpa en las mujeres es uno de los mitos que rodea al aborto como uno de los esfuerzos por responder los significados naturales y sociales que se formulan entorno a la maternidad. Este sentimiento es falso, las mujeres no sienten culpa por su decisión, resulta que sus miedos y su lucha se vive internamente debido a la tiranía del Estado a partir de su normativa jurídica en relación a lo sexual y reproductivo del cuerpo de la mujer.

Además, se fomenta la lógica culta que exigen practicas sexistas y procesos de significación femenina, a través de diversas formas de sanción. Estas formas interiorizan a la mujer, pues han sido pates de largos procesos que se han enfocado en naturalizarla y argumentar positivamente entorno a la legitimidad de dicho control. La eficacia de este pensamiento alcanza desigualmente a las mujeres tanto a nivel estructural como social (Lamas).

El posicionamiento del discurso social se imbrica en el lenguaje, en las costumbres, en los significados y por supuesto en las leyes que prohíben el aborto. Alimentan la desigualdad, sin reconocer una convivencia equitativa, pero, sobre todo, ignorando la autonomía de las mujeres como seres sociales capaces de tomar decisiones sobre sí mismas, sus vidas y sus cuerpos. En definitiva, no depende unívocamente de los hechos biológicos que han rodeado a la mujer, y la maternidad.



Bibliografía

- (CEDES), Agustina Ramón Michel y Mariana Romero. «Seguimiento de la CIPD en América Latina y El Caribe después de 2014.» 2014.
- (CNME), Coalición Nacional De Mujeres Del Ecuador. Informe sombra al comité de la CEDAW Ecuador 2014. Quito: ANDINA editorial, 2014.
- (CNME), Coalición Nacional de Mujeres en el Ecuador. Informe Sombra De Seguimiento A La Implementación De Las Recomendaciones Del Comité De La Cedaw Al Estado Ecuatoriano En Los Párrafos 21 a), b) y d); y, 33 c) SUPRA. Quito: CARE, con apoyo de la Unión Europea, Mayo, 2017.
- Alcover, Pila Giménez. El Derecho en la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann. Barcelona: J.M Bosch Editor, S.A, 1993.
- Aleman, Marco. «Breve nota sobre la idea de «paternalismo» en la obra de Ernesto Garzón.» Doxa (2007): 35-38.
- Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
- Ambrosi, Claudia Astudillo. La despenalización del aborto como problema público y político: contienda y debate legislativo del COIP en Ecuador 2013. Quito: Flacso Ecuador, 2018.
- Amorós, Cecilia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Barcelona: Anthoropos editorial del hombre, 1991.



ANDES, Agencia Publica de Noticias del Ecuador y Suramérica. Obtenido de Ecuador emprende acciones para erradicar la violencia sexual en el sistema educativo. 20 de Marzo de 2014. < <http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-emprende-accioneserradicar-violencia-sexual-sistema-educativo.html>>.

Araujo, Kathya and y Mercedes Prieto. «Sexualidades en debate.» Araujo, Kathya and y Mercedes Prieto. Estudios sobre sexualidades en América Latina. Quito: FLACSO, 2008. 25-42.

Atienza, Manuel and y Juan Ruiz. Marxismo y Filosofía del Derecho. México: Editorial Fontamara S.A, 1998.

Atienza, Manuel. «Argumentación Jurídica y Estado Constitucional.» Atienza, Manuel. Derechos, justicia y Estado constitucional. Un tributo a Miguel Carbonell. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005. 22-34.

Azuay, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales del. La función simbólica del Derecho reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto Brenda Espinoza Gárate. 06 de 02 de 2019.

Azuay, Jueza de la Sala de lo penal de la Provincia del. La función simbólica del derecho reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto Brenda Espinoza Gárate. 13 de 02 de 2019.

Baratta, Alessandro. Criminología y crítica del Derecho Penal. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores S.A, 2004.

Barreto, Dimitri. #AbortoPorViolación. 20 de diciembre de 2018. <<https://www.elcomercio.com/blogs/derechos-y-humanos/analisis-dimitri-barreto-aborto-violacion.html>>.



Baudrillard, J. «El cuerpo, la muñeca sexualizada.» Baudrillard, J. El objeto mas bello de consumo.

España: Siglo XXI, 2009. 183-187.

Baudrillard, Jean. La transparencia del mal. Barcelona: Anagrama, 1993.

Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Paris: Gallimard Siglo XX, 1949.

Birgin, Haydeé. El derecho en el género y el género en el derecho. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000.

Bourdieu, Pierre and Gunther Teubner. La fuerza del Derecho. Bogotá: traducción Carlos Morales de Setién Ravina: Siglo del Hombre editores, Editorial Uniandes, 2000.

—. La domination masculine. Paris: Editorial du Seuil , 2002.

Bourdieu, Pierre and y Jean-Claude Passeron. «Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica.» Bourdieu, Pierre and y Jean-Claude Passeron. La Reproducción, Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. España: Editorial Popular, 2001. 15-85.

Bourdieu, Pierre. «Génesis y estructura del campo religioso.» Relaciones, estudios de historia y sociedad (2006): 29-83.

Bourdieu, Pierre. Cosas dichas . Paris : Minuit, 1987.

Bourdieu, Pierre. El sentido práctico. Buenos Aires- Argentina: Siglo XXI editores, 2007.

Bourdieu, Pierre. Elementos para una sociedad del campo jurídico. Bogotá: en Bourdieu, Pierre y Teubner, Ghunter, La fuerza del derecho, Uniandes-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2000.

Bourdieu, Pierre. Le sens pratique. Paris: Minuit, 1980.



Bourdieu, Pierre. Razones prácticas sobre la teoría de la acción. Barcelona: Editorial Anagrama, 1997.

Burneo, Cristina, et al. «Embarazo Adolescente En El Marco De La Estrategia Nacional Intersectorial De Planificación Familiar(Enipla) 2014 Y El Plan Nacional De Fortalecimiento De La Familia 2015.» 23 de 01 de 2019. Docplayer. <<https://docplayer.es/14717457-Cristina-burneo-salazar-anais-cordova-paez-maria-jose-gutierrez-angelica-ordonez.html>>.

Burneo, Cristina. «El aborto como imperativo: pensar en el inicio y el final de la vida.» Agenda de trabajo ICOPA. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar , 2016. 1-2.

Butler, Judith. «El no-pensamiento en nombre de lo normativo.» Butler, Judith. Marcos de Guerra: Las vidas lloradas. México: Editorial Paidós Mexicana, 2010. 191-226.

Butler, Judith. «Sometimiento, resistencia, resignificación.» Butler, Judith. Mecanismos Psíquicos del ejercicio del Poder. Valencia: Ediciones Catedra; Universidad de valencia: Instituto de la Mujer, 2001. 43,50.

Butler, Judith. El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. New York: Routeledge, 1990.

Butler, Judith. Mecanismos Psíquicos del poder: Teorías sobre la sujeción. Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya S.A), 2001.

Camps, Victoria. Ética retórica y política. Madrid: Alianza, 1988.

Canavate, Doris Lamus. «Localización geohistórica de los feminismos latinoamericanos.» 1 de 17 de 2009. Polis . < <http://polis.revues.org/1529> >.



Carmenati, Meysis and y Andrea González. «Desencanto y Desafío de las agendas de igualdad en caso del aborto en Ecuador.» *Dossiers Feministes* (2017): 139-155.

CEDAW. Recomendación General 35 Violencia derechos de las mujeres Ecuador. Ecuador: ONU, 2017.

Cook, Rebecca and Simone Cusack. *Estereotipos de género: Perspectivas legales transnacionales*. Profamilia, 2010.

Cook, Rebecca and y Bernard M. Dickens. «From Reproductive choice to reproductive justice.» *International Journal of Gynecology and Obstetrics* (2009): 106-109.

Coordinadora Política Juvenil, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, CEPAM, Taller de Comunicación Mujer y Fundación de Causana, Surkuna, Fundación Desafío, Plataforma Justicia para Vanessa. Informe alternativo al Comité Contra la Tortura de la ONU; Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Ecuador. Ecuador, 2016.

Copello, Patricia Laurenzo. «La violencia de género en la Ley Integral Valoración político-criminal.» *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (2005): 1-23.

Cordero, María Isabel- Hidalgo Paola. Informe de Diagnóstico de Embarazo Zona 3 y 5. Cuenca, 2013.

Corvalán, Cristopher. *La función simbólica, la eficacia simbólica y el uso simbólico del Derecho. Delimitación conceptual y metodológica*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las casas", 2014.



Cusack, Rebeca J. Cook y Simone. «Asignación de los Estereotipos de género.» Cusack, Rebeca

J. Cook y Simone. Estereotipos de Género, perspectivas legales transnacionales.

Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2009. 37-38.

Dukuen, Juan. «Acción social - sentido práctico. Lecturas fenomenológicas en la teoría social.»

CONICET-UBA-FLACSO (n.d.): 1-19.

Durango, G. Álvarez. «Estado democrático de derecho-Estado constitucional de derecho: ¿Tensión

entre el desarrollo y la garantía de derechos fundamentales?» Revista de derecho. Ediciones

Uninorte (2007): 88-111.

Dworkin, Ronald. «Igualdad, democracia y Constitución: nosotros el pueblo.» García, Miguel

Carbonell y Leonardo. El canon neoconstitucional. Bogotá: UEC, 2010. 111-144.

Espinoza, Gabriela. «Dicotomía y jerarquización: una causa para la penalización del aborto.»

Umbral: Revista de derecho constitucional (2012): 89-108.

Facio, Alda. «Hacia otra teoría crítica del Derecho.» Lorena, Alda Facio y Fries. Género y

Derecho. Santiago: LOM Ediciones, La, 1999. 15-44.

Facio, Alda. «La carta Magna de todas las mujeres.» Ramiro Ávila Santamaría, Judith Salgado y

Lola Valladares. Género y Derecho. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,

2009. 541-558.

Facio, Alda. «Una Metodología para el análisis de género del fenómeno legal.» Facio, Alda.

Cuando el género suena cambios trae. San José: ILANUD, 1991. 181, 253.

Facio, Alda. Cuando el género suena cambios trae . San José: ILLANUD, 1992.



Fariñas, María José. La sociología del derecho de Marx Weber. México D.f : Universidad Autónoma de México, 1989.

Fernández, José Manuel. «Capital simbólico, dominación, y legitimidad: Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu.» Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Sociología V (Teoría Sociológica) (2013): 36-60.

Fernández, Patricio. «Feminismo y Prostitución debate sobre el poder simbólico.» 07 de 03 de 2019. Revista Pensamiento Penal. <<http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46621-feminismo-y-prostitucion-debate-sobre-poder-simbolico>>.

Ferrari, Vincenzo. Funciones del Derecho. Madrid: Editorial Debate, 1989.

Flores, Carlos E. El aborto en Ecuador, no gira a la izquierda. Mexico : UNAM, 2014.

Foucault, Michael. «El sujeto y el poder.» 28 de 12 de 1988. Revista Mexicana de Sociología (UNAM), Vol. 50, No. 3. <<http://links.jstor.org/sici?sici=0188-2503%28198807%2F09%2950%3A3%3C3%3AESYEP%3E2.0.CO%3B2-A>>.

Foucault, Michael. «La voluntad del saber.» Foucault, Michael. Historia de la Sexualidad. Tomo 1. México: Siglo XXI Editores, s.a de C.V, 1991. 7-61.

Foucault, Michel. Microfísica del Poder. Madrid: Genealogía del Poder: ediciones de la Piqueta, 1980.

Fraser, Nancy. «Sexo, mentiras y esfera pública., Reflexiones entorno a la confirmación de Clarence Thomas por el Senado de los Estados Unidos.» Iustitia Interrupta: reflexiones críticas desde la posición postsocialista (1997): 74.



García, Victoria Díaz. Recomendaciones Generales y Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre mujeres indígenas y/o afrodescendientes realizadas a Estados de América Latina. Ginebra, Suiza: ONU Mujeres, 2017.

Guatemala, Anand Grover: Adición -Misión a. «Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.» 2011.

Gusfield, J. La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2014.

Gutiérrez, Alicia B. «Poder, hábitos y representaciones: recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu.» Revista Complutense de Educación (2004): 289-300.

Hammurabi, Código de. «Historia Clásica.» 3 de 1 de 2019.
<http://www.historiaclasica.com/2007/06/el-codigo-de-hammurabi-leyes-51-100_14.html>.

Harding, S. Ciencia y feminismo. Madrid: Ediciones Morata, 1996.

Hassemer, Winfried. «Derecho Penal Simbólico y protección de Bienes Jurídicos.» autores, Varios. Pena y Estado. Santiago: Editorial Jurídica Conosur, 1995. 23-36.

Hernández, Luis, María Barriga and Doménica Chávez. «La libertad de decidir: un análisis histórico y político del aborto en el Ecuador.» Juan Guillermo Espinal Barrientos, copilador y coordinador de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Voces de las Víctimas: En el marco de los Derechos Humanos y Tratados Internacionales. Medellín: Fondo Editorial Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, 2016. 10-25.



Hierro, José Luis del. «Legitimidad y legalidad .» Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad (2013): 179-186.

Hikal, Wael. «Howard Becker: ¿ El contemporáneo de la escuela de Chicago?, La teoría del etiquetamiento en el proceso de criminalización.» Vox Juris, Lima Vol 33, Sociedad Mexicana de Criminología (2017): 101-112.

Hobbes, Thomas. Del ciudadano y Leviatán. Madrid: Editorial Tecnos, 1993.

Humanos, Programa Andino de Derechos. Informe sobre derechos humanos 2011. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2012.

Iglesias, J. Derecho Romano. Ariel Derecho, 14° edición, 2002.

Irigaray, Luce. «Ser dos.» 08 de 01 de 2019. Biblioteca Feminista. <<https://bibliotecafeminista.com/ser-doss/>>.

Jara, Alexandra Monserrate. Las políticas públicas judiciales del aborto frente a las mujeres indígenas en el Ecuador: Caso provincia de Chimborazo. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales, 2018.

Jiménez, Willian. «La teoría del campo jurídico en Pierre Bourdieu.» 2002. Aplicación a un caso practico del Derecho Colombiano. <<http://www.docentes.unal.edu.co/wjimenezg/docs/LA%20TEORIA%20DEL%20CAMPO%20JURIDICO%20DE%20PIERRE%20BOURDIEU.pdf>>.

Juan, Monserrat and y Josep Rodríguez. «el cuerpo humano y las nuevas tecnologías médicas. Hacia una redefinición del principio y el fin .» Reis (1994): 173-196.



Lagarde, Marcela. «Nuevo Paradigma.» Marcela, Lagarde. Antropología, Género y Feminismo. n.d. 228.

Lagarde, Marcela. Del femicidio al feminicidio, desde el jardín de Freud. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006.

Lamas, Marta. «Problemas sociales causados por el Género.» 05 de 03 de 2019. SlideShared. <<https://es.slideshare.net/melacoliamura/problemas-sociales-causados-por-el-gnero-marta-lamas>>.

Lamas, Marta. Política y Reproducción, Aborto: La frontera del derecho a decidir. Barcelona: Plaza Janés, 2001.

León, Wilfrido, et al. «Conocimientos, actitudes y prácticas sobre aborto en una muestra de médicos gineco-obstetras de Ecuador.» Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia (2016): 169-175.

Lévano*, Ana Cecilia Salgado. 2007. 15 de Mayo de 2014.

Luhmann, Niklas. Soziologische Aufklärung . Opladen : Westdeutscher Verlag GmbH, 1995.

Luna, Lola G. (2014). «Los movimientos de mujeres en América Latina y la renovación de la historia política.» 16 de 1 de 2018. Fem-e-libros, México. <<http://www.bdigital.unal.edu.co/53372/>>.

Marín, Lucía Acosta. «Cuerpos, instituciones y poder: Bourdieu y Foucault.» Marín, Lucía Acosta. Violencia Simbólica: una estimación crítico-feminista del pensamiento de Pierre Bourdieu. Santa Cruz: Universidad de la Laguna, 2012. 95-110.



- McDowell, Linda. «La definición del género.» Ramiro Ávila Santamaría, Judith Salgado y Lola Valladares. El género en el derecho, ensayos críticos. Quito: Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, 2005. 1,33.
- McDowell, Linda. «La definición del género.» Ramiro Ávila, Judith Salgado y Lola Valladares. El género en el derecho; Ensayos críticos. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009. 5-36.
- Méndez, Juan. «Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Mendez.» 1 de Febrero de 2013. Naciones Unidas Derechos Humanos .
<https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53_sp.pdf>.
- Merton, Robert. Teoría y estructuras sociales . México: Fondo de Cultura Económica , 1995.
- Mill, Harriet Taylor. Enfranchisement of Women, en J.S. Mill y H.T. Mill, Essays on Sex Equality,. Chicago: ed. A. Rossi (University of Chicago Press), 1970.
- Moncayo, Alejandra Rivera. El Aborto y la situación de la píldora del día después en el Ecuador. Cuenca: Universidad del Azuay, 2008.
- Moore, Henrietta. A Passion for Difference. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
- Moscoso, Ma. Verónica. Reformas al Código Penal Ecuatoriano en relación al Aborto: Despenalización del aborto para casos de violaciones a mujeres sanas. Cuenca: Universidad del Azuay , 2006.



Nº1), Paola (Entrevistada. La función simbólica del derecho reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto Brenda Espinoza Gárate. 12 de 02 de 2019.

Nº2), Claudia (Entrevista. La función simbólica del derecho reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto Brenda Espinoza Gárate. 13 de 02 de 2019.

Nº3), Daniela (Entrevista. La función simbólica del Derecho reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto Brenda Espinoza Gárate. 19 de 02 de 2019.

Nº4), Erika (Entrevista. La función simbólica del derecho reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto Brenda Espinoza Gárate. 18 de 02 de 2019.

Nº5), Alejandra (Entrevistada. La función simbólica del derecho reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto Brenda Espinoza Gárate. 22 de 02 de 2019.

Olsen, Frances. «El sexo del Derecho.» Ramiro Ávila, Judith Salgado y Lola Valladares. El género en el Derecho . Quito : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009. 137-156.

Pareja, Walleska Ángela. Discriminación hacia las mujeres en el ordenamiento jurídico ecuatoriano: Una aproximación a través del delito de estupro. Quito: Universidad San Francisco, 2008.

Parsons, Wayne. «AnIntroductiontoPolicyAnalysis.» Elgar, E. Plan Nacional para el Buen Vivir. 2013. Quito : Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 1995.

Pizón, Ligia Yumi. «Derechos sexuales y derechos reproductivos y plan nacional de fortalecimiento de la familia Ecuador.» Análisis discursivo de los enlaces ciudadanos, discusiones y declaraciones suscitadas por varios actores en el gobierno de Rafael Correa,



UNIVERSIDAD DE CUENCA

- período 2011-2016, sobre la instauración de la política pública Plan Familia frente al plan ENIPLA. Tesis de Posgrado. Quito: Universidad Central del Ecuador, Enero de 2018.
- Ponce, Isabela. De qué lado estará la Asamblea. 24 de 01 de 2019.
<<https://gk.city/2019/01/13/despenalizar-aborto-violacion-ecuador/>>.
- Posso, Viviana Maldonado. Aborto, política y religión en el Ecuador. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2009.
- PROFAMILIA, AVISE -. Programa de atención a la violencia. 2013. 13 de mayo de 2014.
- Quijano, Aníbal. «Colonialidad del poder y clasificación social.» Quijano, Aníbal. Cuestiones y Horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO, 2014. 285-331.
- Quijano, Aníbal. «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.» 29 de 12 de 2014. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder: CLACSO.
<<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>>.
- Rial, Patricio Fernández. Feminismo y prostitución: Debate sobre el poder simbólico. 08 de 01 de 2018. <<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/06/doctrina46621.pdf>>.
- Roa, María Luz. «La perspectiva de género en el análisis del aborto: Aborto, ¿un acto de emancipación).» V Jornadas de Sociología de la UNPL. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades (2008): 1-21.
- Rodríguez, Elsa Guerra. «Implicaciones de la criminalización del aborto en Ecuador.» FORO (2018): 1-18.



Rodríguez, Michael Cruz. Múltiples derechos, la misma desprotección: la eficacia simbólica de

los derechos de las mujeres indígenas desplazadas en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012.

Rodríguez, Silvio Moreno. «APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LA EFICACIA SIMBÓLICA.» 23 de 11 de 2018. Scribd. <<https://es.scribd.com/document/81705265/ion-a-La-Eficacia-Simbolica>>.

Román, Javier Aguirre. «Análisis de la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional sobre la liberalización del aborto en Colombia: argumentos iusfilosóficos que sustentan el debate en el marco de la perspectiva de Habermas sobre el rol de la religión en la esfera pública.»

Aguirre Román, J., Silva Rojas, A., & Pabón Mantilla, A. Análisis de la propuesta de Jürgen Habermas acerca del rol de la religión en la esfera pública. Tres casos de la jurisprudencia de la corte constitucional de Colombia. Bogotá: Estudios Socio-Jurídicos, 2015. 167-197.

Rousseau, Jean Jacques. El contrato social. Madrid: Escritos de combate, trad. Salustino Masó, 1729.

Ruiz, Alicia. Identidad femenina y discurso jurídico. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000.

Ruiz, José M. Fernández. Derecho penal simbólico, fundamentos y proyecciones. Santiago: Universidad de Chile, 2006.

Safi, Silvia López. «La violencia simbólica en la construcción social del Género.» ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Vol. 2 Nro. 2 (2015): 1-20

.



- Salgado, Judith. «Límites y posibilidades emancipatorias en la jurisprudencia constitucional.» 17 de 1 de 2008. Aportes Andinos No. 23. Quito. Universidad Andina Simón Bolívar. <<http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/1028>>.
- Sandoval, Mary Luz. «Pierre Bourdieu y la teoría sobre la dominación masculina.» Revista Colombiana de Sociología (2002): 55-73.
- Santamaría, Ramiro Ávila. «Los problemas: inseguridad ciudadana, poder punitivo y el neopunitivismo.» Santamaría, Ramiro Ávila. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos: Una mirada desde el garantismo penal. Quito: Ediciones Legales EDLE S.A, 2013. 8-28.
- Santamaría, Ramiro Ávila. «Los hechos: funcionamiento de la justicia penal.» Santamaría, Ramiro Ávila. La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos, una mirada desde el garantismo penal. Quito: Ediciones Legales EDLE S.A, 2013. 131-184.
- Santander, Isabel Agatón. «Estudios Críticos del Derecho: Una crítica a la neutralidad de las decisiones judiciales.» Santander, Isabel Agatón. Justicia de género: Un asunto necesario. Bogotá: Editorial Temis S.A, 2013. 43-73.
- Schütz, Alfred. La construcción significativa del mundo de la vida. Barcelona: Paidós, 1993.
- Scott, Joan W. «El género: una categoría útil para el análisis histórico.» Pozo, José Hurtado. Género y Derecho Penal. Lima: Editorial Instituto Pacífico S.A, 2017. 47-78.
- Scott, Johan W. El género: una categoría útil para el análisis histórico. Valencia: Editorial Alfons el Magnanim , 1990.



- Segato, Rita Laura. «La intervención de la naturaleza: Familia, sexo y género en la tradición religiosa afrobrasileñas.» Segato, Rita Laura. Estructuras elementales de la violencia. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2003. 181-224.
- Segato, Rita. «Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia.» Curso de Verano sobre Violencia de Género. Madrid: Universidad Complutense, 2003. 1-19.
- SENDAS, Fundación, investigadoras Carmen Ortiz and y Paola Hidalgo. Informe Investigación Cualitativa De Percepciones Sobre “Derechos, Salud Sexual Y Reproductiva, Violencia Y Aborto De Las Mujeres Ecuatorianas”. Cuenca-Ecuador: SENDAS, 2014.
- Soza, Maria Feminías y Paula. «Poder y violencia sobre el cuerpo de las mujeres.» Dossiê (2009): 42-65.
- Spaventa, Verónica. «Género y control social.» 08 de 01 de 2018. Biblioteca jurídica Virtual del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. <<https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/lecciones-ensayos/article/view/34711>>.
- Sprenger, Heinrich Kramer y Jacobus. El Martillo de las brujas (Malleus Maleficarum). Editorial Orion, 1486.
- Starkoff, Paula Castello. «Despenalización del aborto y nuevo proyecto constitucional: un tema polémico.» Iconos, revista de Ciencias Sociales (2008): 19-23.
- Tamayo, Juan José. «Boaventura de Sousa Santos: Hacia una sociología de las ausencias y emergencias.» Utopía y Praxis Latinoamericana (2011): 41-49.



- Tapia, Danilo Caicedo. «Heterosexualidad y heteronormatividad: Análisis discursivo general con énfasis en el entorno ecuatoriano.» *Umbral*; revista de derecho constitucional (2012): 117-130.
- Valcárcel, Amelia. *Sexo y Filosofía: Sobre mujer y poder*. Barcelona: Anthropos; Siglo del Hombre, 1994.
- Valdés, Ernesto Garzón. «Consenso, racionalidad y legitimidad.» *Isegoría de Filosofía Moral y Política*, número 2 (1990): 13-28.
- Valdés, Garzón. «¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?» *Doxa* (1988): 155-173.
- Vargas, Roxana Arroyo. «La igualdad un largo camino para las mujeres.» *Reflexiones para una tesis Doctoral*, Madrid (2001): 421-430.
- Vieira, Oscar Vilhena. «Desigualdad estructural y Estado de Derecho.» Garavito, Cesar Rodriguez. *El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores S.A, 2011. 25-46.
- Villegas, Manuel García. «Departamento de Derecho Internacional OEA .» 20 de Agosto de 2018. *Notas Preliminares para la caracterización del Derecho en América Latina*. <http://www.oas.org/juridico/spanish/mauricio_garc%EDa_villegas.htm>.
- Villegas, Manuel García. *La eficacia simbólica del Derecho*. Bogotá: UNIANDES, 1993.
- Villegas, Mauricio García. *Eficacia Simbólica del Derecho: Sociología política del campo jurídico en América Latina*. Bogotá: DEBATE, 2012.
- Wacquant, Pierre Bourdieu y Loic. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: Polity Press, 1992.



Watch., Human Right. *Criminalización de las víctimas de violación sexual: el aborto ilegal luego de la violación en el Ecuador*. Quito, 2013.

Weber, Marx. 2002.

Young, Iris Marion. «Capítulo II, Las cinco caras de la opresión.» Young, Iris Marion. *La justicia y la política de la diferencia*. Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A), 2000. 71-113.

Zaffaroni, Eugenio. «El discurso feminista y el poder punitivo.» Ramiro Ávila Santa María, Judith Salgado, Lola Valladares. *El género en el derecho*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2005. 321-334.

Zaffaroni, Eugenio. *La mujer y el poder punitivo*. Lima: CLADEM, 1992.

Zaikoski, Daniela. «Género y Derecho penal, tensiones al interior de sus discursos.» *La Aljaba* (2008): 117- 134.

Zaragocin, Sofía, et al. «Mapeando la criminalización del aborto en el Ecuador.» *Revista de Bioética y Derecho* (2018): 109-125.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

ANEXOS



Objetivo de la entrevista a:

(Mujeres que han decidido interrumpir su embarazo)

Identificar como la realidad socio-jurídica alcanza eficazmente a los cuerpos de las mujeres, aunque estos no sean sometidos a procesos legales. Como las mujeres caracterizan sus decisiones dentro de la esfera funcional del derecho entre prohibido y permitido. Las múltiples posibilidades que pueden desarrollarse al identificar y valorar sus propias decisiones, siendo parte de esto, una estructura cognitiva de las mujeres que construye límites, mitos y permisiones entorno a la maternidad y la feminidad. Comprobar como los fines del derecho se manifiestan en la cotidianidad de las mujeres consiguiendo determinar las estructuras sociales en las que puede desarrollarse, manteniendo la construcción del género y el adoctrinamiento de los cuerpos al haberse impregnado en una conciencia generalizada que sanciona de diferentes formas, que puede llegar a empatar con la concepción de lo justo o injusto siendo una producción social del discurso jurídico.

Guía de entrevista.

Buenos días/ tardes, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Cuenca; estoy llevando a cabo una investigación que tiene como fin **analizar y visibilizar la criminalización de las mujeres por aborto**. Toda la información que Usted me facilite será tratada de forma anónima y será utilizada únicamente con fines investigativos. La entrevista tiene una duración aproximada de 60 minutos o más en caso de ser necesario, podemos dejar de grabar o parar la entrevista en cualquier momento si así lo desea, o lo cree necesario.

La información generada será completamente confidencial y estrictamente de uso académico. Para el levantamiento de información se contará con una grabadora de voz.

A.- Información personal o sociodemográfica.

Nombre:	Sexo: Hombre____ Mujer____
Edad (años cumplidos): 16-22 ____ 22-28 ____ 28-34 ____ 34-40 ____	Nivel de educación: n/a____ Media____ Cuarto nivel____ Básica____ Superior____
Auto identificación étnica: Afrodescendiente____ Indígena____ Mestizo____ Montuvio(a)____	Estado civil: Soltero(a)____ Unión de hecho____ Separado(a)____ Casado(a)____



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Blanco(a)____ Otra____	Divorciado(a)____ Viudo(a)____
Nombre del entrevistadora:	
Hora de inicio:	Hora de finalización:

Anexo 1.

Instrumento de Investigación para Mujeres que han decidido interrumpir su embarazo (cualitativa)

Preguntas

1. ¿Conoce la realidad respecto al aborto en el Ecuador?
2. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la situación legal del aborto en el Ecuador?
3. ¿Tenía conocimiento sobre la situación legal respecto al aborto, antes de tomar su decisión?
Explicación
4. ¿Podría contarme un poco sobre usted, su familia, la ciudad en la que creció, etc.?
5. ¿Qué significa para usted ser mujer?
6. ¿Quién considera que influyó en esta idea, y de qué forma lo hizo?
Explicación
7. ¿Cuáles fueron sus principales temores cuando supo que estaba embarazada?
8. ¿Le contó a alguien sobre esto?
9. ¿Acudió a alguna institución pública/privada, buscando orientación o asistencia?
10. ¿Cómo se sintió luego de este proceso?
11. ¿Siente que ha cambiado algo luego de esto?
12. ¿Cuáles cree que son las condiciones en las que se debería tener un/a hija/o

Gracias...



Anexo 2.

Instrumento de Investigación para Administradores/as de Justicia (cualitativa)

<p>Objetivo de la entrevista a:</p> <p>Administradores/as de justicia</p> <p>Verificar la realización del ejercicio de poder, explícito e implícito en la práctica de la administración de justicia, identificar la variedad de posibilidades que resultan del discurso jurídico haciendo posible el ejercicio del poder punitivo a través de los y las juezas. En sus interpretaciones y construcciones resultantes de una acción a priori al proceso como resultado de las clasificaciones positivas y negativas que han sido interiorizadas por los y las juezas reflejándolo eficazmente en la legitimación de sus decisiones, a partir de consensos creados por el Derecho entorno a la maternidad, generando así un mensaje de acciones a los sujetos, que alteraran sus proyectos de manera indirecta o directa en el proceso, remitiendo estas acciones a la sociedad, exhibiendo su adhesión a un modelo normativo que normaliza la violencia simbólica y el control del cuerpo de la mujer. Se pretende identificar como definen el aborto y como construye a la mujer que ha sido víctima, con la intención de verificar como esto constituye una fuente de retención y perpetuación de un orden hegemónico que condiciona la acción humana.</p>	
<p>Guía de entrevista.</p>	
<p>Buenos días/ tardes, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Cuenca; estoy llevando a cabo una investigación que tiene como fin analizar y visibilizar la criminalización de las mujeres por aborto. Toda la información que Usted me facilite será tratada de forma anónima y será utilizada únicamente con fines investigativos. La entrevista tiene una duración aproximada de 60 minutos o más en caso de ser necesario, podemos dejar de grabar o parar la entrevista en cualquier momento si así lo desea, o lo cree necesario.</p> <p>La información generada será completamente confidencial y estrictamente de uso académico. Para el levantamiento de información se contará con una grabadora de voz.</p>	
<p>A.- Información personal o sociodemográfica.</p>	
<p>Nombre:</p>	<p>Sexo:</p> <p>Hombre____</p> <p>Mujer____</p>
<p>Edad (años cumplidos):</p> <p>16-22 ____</p> <p>22-28 ____</p> <p>28-34 ____</p> <p>34-40 ____</p>	<p>Nivel de educación:</p> <p>n/a____</p> <p>Media____</p> <p>Cuarto nivel____</p> <p>Básica____</p> <p>Superior____</p>
<p>Auto identificación étnica:</p> <p>Afrodescendiente____</p> <p>Indígena____</p>	<p>Estado civil:</p> <p>Soltero(a)____</p> <p>Unión de hecho____</p>



Mestizo____ Montuvio(a)____ Blanco(a)____ Otra____	Separado(a)____ Casado(a)____ Divorciado(a)____ Viudo(a)____
Nombre del entrevistadora:	
Hora de inicio:	Hora de finalización:

Preguntas

1. ¿Cómo cree usted que el trabajo en tareas jurídicas, como el poder judicial participan en la estructura social?
2. ¿Qué tipo de fuente tendrían los valores jurídicos desde su punto de vista?
3. ¿Cuál sería entonces la categoría que se asigna como valor, dentro del bien jurídico protegido en el tipo penal Aborto consentido?
4. Mapeando la situación entorno al aborto consentido, ¿cuál cree usted que debería ser la Función del Derecho penal?
5. ¿Qué nivel de eficacia considera usted que tiene el sistema penal para moldear conductas, en el sentido de lograr disminuir los índices de aborto?
6. entonces, ¿cuáles cree usted que deben ser las estrategias que deben emplearse para alcanzar la efectividad del sistema penal?
7. ¿Cómo conceptualizaría el aborto?
8. ¿Cuál cree usted que es el perfil de la mujer que decide abortar?
9. ¿Cuál cree que es la función simbólica del derecho, y como se refleja en la criminalización de las mujeres por aborto?



Anexo 3.

Consentimiento informado de los y las entrevistadas

Formulario de consentimiento informado (informantes anónimos)

Yo Brenda Karina Espinoza Gárate quiero asegurarme de que las personas entrevistadas como parte del "Proyecto de investigación La Función Simbólica del Derecho reflejada en la criminalización de las mujeres por aborto: Análisis de contexto en la ciudad de Cuenca periodo 2018", estén completamente informadas sobre las implicaciones de participar en el mismo. Por favor, marque las casillas a continuación si cree que tiene la información indicada. Si no, hágamelo saber (consulte los detalles de contacto en la parte inferior de la página).

- ☐ He leído y comprendido la hoja de información del proyecto.
- ☐ Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre el proyecto.
- ☐ Acepto ser parte del proyecto participando en una entrevista.
- ☐ Entiendo que la entrevista tomará aproximadamente 30 minutos, pero podría extenderse hasta 45 minutos.
- ☐ Estoy participando voluntariamente.
- ☐ Entiendo que puedo negarme a responder cualquier pregunta, por cualquier motivo.
- ☐ Entiendo que puedo retirarme de la entrevista en cualquier momento, por cualquier motivo.
- ☐ Entiendo que si alguna pregunta no me es clara, puedo pedir al entrevistador/a que la replantee para mi mejor comprensión.
- ☐ Entiendo que mi nombre y el nombre de las personas e instituciones con las que estoy relacionado/a no se publicarán de ninguna forma y que su referencia será eliminada de las transcripciones o notas hechas.
- ☐ Acepto que mi entrevista sea grabada.
- ☐ Acepto que el/la investigador/a tome notas durante la entrevista.
- ☐ Entiendo que mis palabras pueden ser citadas en documentos académicos, informes de investigación, borradores de capítulos, tesis doctorales y otros productos académicos, pero no se utilizará mi nombre, el nombre de las personas que mencioné y el de la(s) organización(es) con la que estoy relacionado/a.
- ☐ Entiendo que el equipo de investigación está obligado a guardar reserva y confidencialidad respecto de mis datos y opiniones.
- ☐ Entiendo que la información proporcionada será utilizada exclusivamente para

Nombre de el/la participante fines académicos.	Firma	Fecha
Nombre Entrevistador/a	Firma	Fecha

Datos de contacto del participante:
Datos de contacto del investigador:



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Anexo 4.

Licencia y Autorización del Derecho de la Autora del uso del documento Informe Investigación Cualitativa De Percepciones Sobre “Derechos, Salud Sexual Y Reproductiva, Violencia Y Aborto De Las Mujeres Ecuatorianas” Emitido por SENDAS



Cuenca, 18 de marzo de 2019

AUTORIZACION

Yo Mary Elizabeth Cabrera Paredes con C.I. 1102272133 en calidad de Directora Ejecutiva de la fundación SENDAS, Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur, autorizó a la Srta. Brenda Espinoza con C.I. 0105186670, alumna de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca a hacer uso de la INVESTIGACION CUALITATIVA DE PERCEPCIONES SOBRE “DERECHOS, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, VIOLENCIA Y ABORTO DE LAS MUJERES ECUATORIANAS” realizada por Carmen Ortiz y Paola Hidalgo equipo técnico de SENDAS, como insumo para la elaboración de su tesis de grado “La Función Simbólica del Derecho reflejada en la criminalización de las Mujeres por aborto: Análisis del contexto en la ciudad de Cuenca en el período 2018”.

Se solicita a la vez se cite dicha investigación de acuerdo con las normas académicas internacionales de Citas y Referencias Bibliográficas.

Cordialmente,


Dra. Mary Cabrera Paredes
DIRECTORA EJECUTIVA


CUENCA - ECUADOR

Dirección: Calle Guayas 6 -130 y Azuay Teléfax: (593 - 7) 288 2456 / 281 6059 E-mail: sendas@sendas.org.ec
web: www.sendas.org.ec Cuenca - Ecuador



Anexo 5.

INFORME INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE PERCEPCIONES SOBRE “DERECHOS, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, VIOLENCIA Y ABORTO DE LAS MUJERES ECUATORIANAS”

*Para defender la autonomía de las mujeres
hay que dejar de considerar la maternidad
como un destino y comenzar a verla como un trabajo
que para ejercerse a plenitud debe
ser producto del deseo y de la elección*

Martha Lamas

1. PRESENTACION

Qué demandan las mujeres de Ecuador y el mundo, respecto a sus Derechos Sexuales y Reproductivos? Tanto al Estado como a la sociedad? La respuesta es muy simple: **respeto** a sus decisiones, a sus derechos, a su cuerpo, a vivir libre de violencia de género y sexual, a su autonomía personal a vivir plenamente su sexualidad y en general a vivir como elija hacerlo.

Sin duda, un punto fundamental de la plataforma feminista que busca reivindicar el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres sobre su cuerpo y su sexualidad; son los derechos sexuales y reproductivos, en oposición a una tendencia androcéntrica que estableció normas, leyes, símbolos y significados que designan patrones de comportamientos masculinos y femeninos; y el ejercicio de poder sobre el cuerpo y sexualidad de las mujeres.

La lucha de las mujeres en estas últimas décadas, sin duda, ha logrado importantes avances, sin embargo pese a esto, persiste desde algunos sectores de la sociedad la defensa de posiciones que promueven el rol de la mujer cargado de responsabilidades en la pareja, sin poder de decisión sobre su cuerpo, cuándo y cómo ser madres, expuesta a relaciones inseguras, de ahí que, es fundamental trabajar en los elementos esenciales para el goce de una salud sexual y reproductiva integral.

Esta investigación promovida por una decisión institucional de adentrarse en las visiones de la población sobre estos temas que permanecen en la esfera de lo privado, pretende acercarse a la vivencia de las mujeres y sus sentires sobre los DSDR, violencia y aborto, para motivar la puesta en marcha de propuestas y políticas públicas que garanticen un mayor ejercicio y protección de los Derechos Humanos de las Mujeres.



UNIVERSIDAD DE CUENCA



2. INTRODUCCION

Muchas son las incertidumbres al hacer esta investigación, pues tratar un tema tan vivo, amplio y polémico como son los DSDR, violencia y aborto, que no solo serán analizados desde la investigación sino que esperamos aporte en el cambio de opiniones, visiones y paradigmas sobre estos temas que tienen una implicación política del cuerpo de las mujeres, sobre las decisiones que se toman, sobre la construcción de política pública, es una fuerte responsabilidad.

Esta investigación presenta las experiencias y sentires de mujeres jóvenes y adultas respecto a sus DSDR, violencia y aborto observadas en el trabajo de campo y las opiniones de hombres jóvenes y adultos sobre estas temáticas, las presenta enmarcadas en sus contextos a fin de que sea un documento de consulta y respaldo para argumentar y fortalecer las vocerías de organizaciones e instituciones que trabajan por la exigibilidad de los derechos de las mujeres.

Antes de presentar el análisis del trabajo en campo se ofrece información sobre el marco conceptual de los DSDR, salud sexual, violencia y aborto, así mismo un marco legal y político en la que se basa la investigación y de la cual se extrae sus principios básicos y rectores así como sus enfoques.

Este documento pone a consideración los resultados de la investigación cualitativa realizada a través de grupos focales con mujeres de Loja, Zamora, Cañar, Guayas, Santa Elena, El Oro, Azuay, Morona Santiago y con hombres de Azuay y Loja; que abordan las temáticas anotadas y que aportan a tener una mirada regional de las percepciones sobre las mismas.

Al final se delinea algunas conclusiones obtenidas de la investigación y que son claves para el ejercicio de los DSDR y el derecho a decidir de las mujeres.



3. ANTECEDENTES

Desde hace varias décadas, las sucesivas conferencias internacionales sobre población y desarrollo, sobre derechos humanos y de la mujer hasta llegar a El Cairo y Beijing, fueron ampliando las visiones y los marcos conceptuales referidos a la sexualidad y la reproducción humana. A través de ello, se construyeron nuevos discursos que explicitaron los requisitos, las bases para la acción y la orientación de las voluntades políticas que son necesarias para que se concrete los derechos sexuales y reproductivos de las personas, en particular de las mujeres. Las nociones de salud sexual y reproductiva, abrieron cauce a la actualización de los derechos humanos en estos ámbitos.

La IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) realizada en El Cairo en 1994 constituyó un cambio de paradigma en la relación entre población y desarrollo, al pasar del control demográfico al enfoque de derechos. Se proyectaron nuevas relaciones entre las dinámicas demográficas, la sustentabilidad ambiental y los derechos, en especial, los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSR) de las mujeres, adolescentes y jóvenes. Los Estados expresaron su compromiso, y desde la sociedad civil se trabaja de forma persistente y comprometida para implementar y enriquecer la agenda de CIPD. ((CEDES))

En el Ecuador el movimiento feminista y juvenil lidera las propuestas de cambio y avances políticos que posicionan en la esfera y agenda pública los DSDR desde un enfoque de exigibilidad, respeto y rebeldía.

En el proceso de reforma política del Estado desde el 2007 el movimiento de mujeres a nivel nacional participa activamente con propuestas encaminadas a reivindicar su reconocimiento como sujetas políticas y de derechos, la urgencia del respeto a la autodeterminación y soberanía del cuerpo.

Un movimiento juvenil fuerte y sólido alza su voz por la despenalización social y legal del aborto, como la forma de vivenciar la libertad y la autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo y sexualidad, de esto pronto se hace eco las organizaciones de mujeres de otros lugares del país y se desconcentra la lucha, el análisis y la vocería pública en la temática.

Se inicia en el país, en el año 2013 el análisis para la reforma del Código Penal Integral en el que las mujeres apuestan fuertemente por tener una ley o norma que recoja sus aspiraciones, propuestas y posicionen la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres.

La premisa de lucha feminista es defender las conquistas hasta ahora reconocidas sin dar un paso atrás. Las organizaciones de mujeres a nivel nacional trabajan en temas de violencia, femicidio, despenalización del aborto, como los temas más fuertes y de su interés particular, proponiendo otras miradas para fortalecer la democracia y la ciudadanía política de las mujeres, cuestionando las formas masculinas y androcéntricas de abordar la sexualidad y la vida misma.

Según los datos de la OMS, en el Ecuador 1 mujer, aborta cada 4 minutos, en condiciones de total inseguridad, siendo la segunda causa de muerte materna, el aborto es sin duda un asunto de clase,



puesto que afecta directamente a las mujeres más pobres que carecen de recursos para acceder a un tratamiento adecuado y seguro. La ausencia de información el número de atenciones en el servicio de salud pública por complicaciones de aborto y la falta de protocolos para atender los abortos no punibles, solo corroboran la intención de invisibilizar el problema.

En tanto que según datos del INEC, 1 de cada 4 mujeres en el Ecuador ha vivido violencia sexual. En el año 2010, se reportaron 4.664 denuncias de violación, lo cual representa 12 violaciones diarias, en el año 2012, se habían reportado 2.183 denuncias de violación, lo cual representa 14 violaciones diarias.

14 mujeres denuncian violencia, de esas mujeres 5 pueden quedar embarazadas.

De cara a lo expuestos el Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos propone la reforma al artículo 477 del COIP, vigente desde hace 70 años y que busca incorporar la despenalización del aborto por violación a todas las mujeres, sin necesidad de ser dementes o idiotas.

En este marco con el propósito de respaldar y cualificar los argumentos y el trabajo de vocería e incidencia de las organizaciones de mujeres, se ve la necesidad de contar con datos claros, actuales y reales sobre DSDR, su visión y ejercicio a nivel nacional, para lo cual se promueve la realización de una encuesta cuantitativa y científica que se encarga a CEDATOS para medir el grado de conocimiento, aceptación y percepción de la población ecuatoriana sobre temas como: violencia, DSDR, aborto. Sin duda la información obtenida fue un importante insumo para la incidencia y cabildeo con los decisores políticos que contaron con estadísticas para argumentar su posición y apoyo a las propuestas de las mujeres. Más allá de las decisiones tomadas por los Asambleístas y el Gobierno, la investigación cumplió el objetivo para la que fue realizada, generando información científica sobre la urgente necesidad de que el Estado garantice y reconozca el pleno ejercicio de las mujeres a controlar su sexualidad sin coerción, sin discriminación ni violencia.

Esta encuesta nacional da cuenta que 64 de cada 100 ecuatorianos están de acuerdo con el aborto cuando el embarazo es producto de violación o incesto, 66 de cada 100 ecuatorianos están de acuerdo con el aborto para preservar la salud de la mujer y 75 de cada 100 ecuatorianos están de acuerdo con el aborto cuando peligra la vida de la mujer.

Sin embargo la investigación cuantitativa por sí sola no profundiza ni visibiliza la verdadera situación de las mujeres, su cotidianidad, su autonomía en la toma de decisiones respecto a su sexualidad, maternidad, etc. para profundizar la misma Sendas lleva a cabo una investigación cualitativa con mujeres de la Costa, Sierra y Oriente, que permita conocer de cerca sus visiones y miradas sobre sus DSDR. Qué pasa en los territorios con sus cuerpos, con sus vidas, con sus sueños, más allá de lo político, de la Asamblea, de los discursos.

Los resultados de esta investigación cualitativa se espera sean insumos para fortalecer el trabajo de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de reivindicar el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, a que el Estado reconozca, respete y asegure los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como parte inherente a los Derechos Humanos y como generadora de una verdadera ciudadanía.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

¿Si a los hombres y mujeres como ciudadanos y ciudadanas les es permitido decidir el destino de sus países, cómo se les puede privar de tomar decisiones acerca del destino de sus cuerpos?
(PROFAMILIA)



4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Objetivo General

Conocer las percepciones y vivencias de la población respecto a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y de forma específica sobre violencia de género y aborto.

Objetivos Específicos

- Identificar las perspectivas y significados de la población sobre las diferentes problemáticas que afectan a las mujeres relacionadas a su salud sexual y reproductiva
- Conocer las visiones sobre aborto de la población y en especial de las mujeres ecuatorianas de diferentes contextos socio culturales.

5. METODOLOGIA

Esta investigación cualitativa, tiene un método etnográfico e inductivo con el propósito de que la misma extraiga la realidad, el contexto natural, el sentido, los significados que las mujeres y hombres tienen de los DSDR, violencia y aborto, que son de su experiencia y vivencia personal.

El diseño etnográfico busca describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, la geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes, entre otros). (Lévano*)

Partiendo entonces de que la investigación cualitativa supone que el mundo social está construido de significados y símbolos y que su objetivo es captar reflexivamente estos significados sociales, interesa adentrarse y recuperar el valor subjetivo de las experiencias y vivencias de hombres y mujeres respecto a los temas de la investigación, sin por eso perder la rigurosidad científica que amerita la misma.

En este marco se establecieron los momentos de la investigación que fueron los siguientes:

a) Orientación política estratégica

Para la presente investigación se cuenta con los resultados de la encuesta cualitativa sobre percepción de los DSDR en la población ecuatoriana como punto de partida, cuyos resultados se pretenden profundizar con esta investigación, frente a esto se delinearán orientaciones políticas y estratégicas para la conformación de los grupos focales, número de participantes, mujeres, hombres, edad, pertenencia territorial, inclusión de hombres jóvenes y adultos y la metodología de trabajo.

b) Documentación



Se revisó, a más de los resultados de la encuesta cuantitativa, información bibliográfica y de consulta para identificar conceptos claves para la investigación, conocer otras experiencias similares, datos e información que respalden el análisis y faciliten el trabajo de interpretación.

c) Diseño de la investigación y sus herramientas

Para efectos de esta investigación, se establece que la herramienta más idónea a desarrollar es el grupo focal, por ser un proceso vivo y dinámico, que se desenvuelve naturalmente, permite una interrelación directa con los y las participantes, su flexibilidad permite explorar asuntos no anticipados de antemano, a diferencia de otras investigaciones más estructuradas.

Siendo esta una herramienta que provee datos cualitativos de la percepción de los y las participantes, se buscó que los mismos tengan características homogéneas de edad, territorio, etnia, de ahí que los grupos focales fueron conformados por mujeres adultas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hombres adultos, de la Costa, Sierra y Amazonía, propiciando un ambiente de libre intercambio de ideas, opiniones, sentires y con un principio de confidencialidad y respeto.

Emplear la metodología de un grupo focal es útil para entender las normas sociales de una comunidad, indagar cómo afectan diferentes fenómenos o situaciones a las personas o bien, para explicar y profundizar en las percepciones, sentimientos y pensamientos de los sujetos involucrados en diversas problemáticas.

Al inicio de la investigación se pensó en grupos focales solo con mujeres, en el transcurso del proceso investigativo surgió la necesidad de conocer la opinión masculina y de jóvenes que permita enriquecer y profundizar la información, a partir de una aproximación a su cotidianidad.

Se elabora entonces el cuestionario como herramienta metodológica para el levantamiento de información, el mismo tiene varias preguntas de la investigación cualitativa que se intenta profundizar desde las vivencias y visiones de los y las participantes y otras que permitan visibilizar y completar el análisis del estado de situación de los DSDR, violencia y aborto.

El mismo cuestionario se aplicó en todos los grupos focales para estandarizar la obtención de información y el análisis de la misma. El cuestionario se anexa al final del documento.

Se hicieron 4 grupos focales con mujeres adultas en: Guayaquil, Loja, Macas, Puyo, 2 grupos focales con jóvenes hombres y mujeres en Loja y Guayaquil, 1 grupo focal con hombres jóvenes y adultos en Cuenca. 121 personas: 76 Mujeres y 45 Hombres participaron en los 7 grupos focales.

La convocatoria se hizo con el apoyo de contactos claves que conocen la zonas y realidades y alianzas interinstitucionales en las zonas, con el criterio de diversidad de sexo, etaria y territorial.

Los grupos focales fueron regionales en su mayoría, lo que permitió obtener información clave del estado de situación de los DSDR en el sur y oriente del país.

d) Levantamiento de información

Para la realización de los grupos focales se contó con un equipo investigador de dos técnicas que se movilizaron hacia las zonas de trabajo, previa autorización de los y las integrantes se grabó la conversación, que sirvió de base para el análisis de la información. La duración de cada grupo



focal fue de alrededor de 4 a 5 horas. Se evitó al máximo inducir respuestas o emitir criterios propios de las técnicas, se propició un ambiente de confianza para que todos y todas las integrantes puedan emitir sus visiones, experiencias y opiniones.

e) Procesamiento y análisis de la información

La información obtenida se vació en matrices de trabajo que permitió ordenar el análisis y posterior interpretación, recuperar las principales ideas y testimonios de los y las participantes. Para facilitar el procesamiento y la confidencialidad se utilizó códigos para la identificación de la información y sus informantes:

Codificación	Edad	lugar
MA	Desde 29 años	Mujer adulta
MAP		Mujer adulta Puyo
MJ	De 19-29 años	Mujer joven
MJL		Mujer joven Loja
MJG		Mujer joven Guayaquil
MJM		Mujer Joven Macas
MAM		Mujer adulta Macas
HJ	de 19 a 29 años	Hombre joven
HJG		Hombre joven Guayaquil
HJL		Hombre joven Loja
HA	desde 29 años en adelante	Hombre adulto
HAC		Hombre adulto Cuenca

El análisis e interpretación de la información se hace por temas de la investigación, se identifica los principales hallazgos en cada grupo focal, se establecen coincidencias y diferencias entre ellos, se realiza el informe final y se esboza algunas conclusiones.



6. ENFOQUES DE LA INVESTIGACION

En esta sección se definirán distintos conceptos de los temas de esta investigación y que responden al marco teórico conceptual, sin embargo, es importante señalar que el enfoque principal con que se trabaja esta investigación es la teoría feminista.

Enfoque feminista

Le brinda a la investigación la integralidad que requiere, una mirada profunda que otros enfoques no lo dan, uno de sus logros es la colocación en la agenda pública de temas que antes permanecían en la esfera de lo privado como son los temas de esta investigación, pero como dice Celia Amorós *“el feminismo es un referente necesario, si no se quiere tener una visión distorsionada del mundo, ni una autoconciencia sesgada de nuestra especie”* (issuu.com/acsurlassegovias)

El feminismo aporta al nuevo paradigma humano la construcción de un mismo piso simbólico y político para mujeres y hombres en igualdad y una relación en la que no haya centralidad de ningún sujeto o jerarquía, (supremacía, inferioridad) (Lagarde, Nuevo Paradigma)

Enfoque de género

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.

Según Marcela Lagarde: *“el enfoque de género permite desentrañar las características y mecanismos del orden patriarcal, criticando sus aspectos nocivos, destructivos, opresivos y enajenantes, debidos a la organización social estructurada por la inequidad, la injusticia y la jerarquización basadas en la diferencia sexual transformada en desigualdad genérica”. A partir de esta caracterización, se entenderá que el análisis de género constituye una vía no ya para visualizar las características diferenciales de mujeres y hombres, sino para entender y enjuiciar el orden patriarcal existente en aras de conocer dónde reside la opresión hacia un grupo genérico, determinado por sus componentes biológicos. En este sentido, el análisis de género resulta más específico, se dirige a la base de las desigualdades de género. A través de él se comprende la historia del feminismo a lo largo de los siglos y el porqué de la lucha protagonizada por las mujeres, sus razones y el vínculo de ellas con una realidad que las oprime”*.

Enfoque de Derechos

Los DSDR han sido analizados de forma fragmentada, actualmente se incluyen bajo el paraguas de los Derechos Humanos, gracias a la lucha de las mujeres y su incidencia en el nivel nacional e internacional. El objetivo de este enfoque es integrar en las prácticas del desarrollo, los principios éticos y legales inherentes a los derechos humanos. Los derechos sexuales están constituidos por



una serie de beneficios relativos a la sexualidad que emanan de los derechos a la libertad, igualdad, privacidad, autonomía, integridad dignidad de todas las personas y no discriminación.

El desarrollo de este enfoque coincide con el cambio de paradigma con relación al empoderamiento y avance de las mujeres. Actualmente se reconoce que el empoderamiento y autonomía de las mujeres y la mejora de su estatus político, social y económico son fines en sí mismos. Este cambio de paradigma refleja un enfoque de derechos.

El enfoque basado en derechos precisa del enfoque de género, para profundizar en las causas del incumplimiento de derechos y del irrespeto a uno de los principios claves de los derechos humanos, el de igualdad y no discriminación.

Los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, lo consagra la Declaración de Viena (1993).

Entonces uno de los objetivos claves de este enfoque es el análisis del grado de cumplimiento y aplicación de los distintos instrumentos para la igualdad de género y el avance de las mujeres.

El enfoque de derechos es visto desde el feminismo como punto de partida y no de llegada y está vinculada al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres como sujetos políticos activos y con capacidad de decidir sobre sus opciones personales, su cuerpo, sexualidad y deseos.

Enfoque de Interculturalidad

El Enfoque de Interculturalidad inserta en los procesos de desarrollo el respeto, valoración, de la pluralidad cultural de un pueblo, o comunidad. La interacción entre dos o más culturas de modo horizontal y sinérgico, sin que ninguna se encuentra por encima de la otra, una condición que favorece la integración la convivencia armónica de todos los individuos, respetando su edad, etnia, género, religión, opción sexual, ideología o posición política.

El Enfoque de Interculturalidad está estrechamente ligado con el enfoque de género y el ejercicio de derechos, visibilizando a las mujeres como sujetos políticos protagonistas de su proyecto de vida, lo que hace necesario habilitar el dialogo para construir una sociedad intercultural e igualitaria, donde se valore la riqueza que aportan las personas, independientemente de su sexo, y las culturas que la componen

7. MARCO CONCEPTUAL, POLITICO Y LEGAL

7.2 Marco teórico referencial

- **Derechos Sexuales y Derechos reproductivos**

Los Derechos Sexuales y Reproductivos cobran importancia y relevancia en los distintos foros internacionales al hacerse evidente la necesidad de que sean reconocidos y garantizados como



Derechos Humanos que permiten la vinculación con la democracia y el ejercicio de las libertades individuales.

Uno de los problemas que conlleva la conceptualización de estos derechos es incluir su dimensión sexual y reproductiva, no son conceptos acabados, se dice que estos derechos son los más humanos de todos los derechos y constituyen el pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, una relación íntima con la construcción de sujetos de derechos, esto es con el poder de tomar decisiones sobre el cuerpo y la sexualidad, esto ligado a un conjunto de recursos y condiciones sociales, económicas políticas y culturales que posibilitan su ejercicio

En resumen, los DSDR son aquellos que permiten regular y tener control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad, sin ningún tipo de coacción, violencia, discriminación, enfermedad o dolencia. (PROFAMILIA)

Los Derechos reproductivos se basan en el reconocimiento de la libertad reproductiva de las parejas e individuos, a gozar de una buena salud sexual y reproductiva con servicios médicos accesibles y de calidad.

Los Derechos Sexuales se basan en la libertad dignidad e igualdad inherentes a todo ser humano, donde cobra particular importancia la dimensión del placer sexual posibilitan las decisiones libres y responsables sobre todos los aspectos de la sexualidad, libre de discriminación y violencia.

- **Violencia sexual**

Cuando una persona se ve obligada por cualquier persona que sea o no de su familia a realizar actos sexuales o comportamientos que ella no desea, tanto en público como en privado. La violencia sexual puede ser ejercida sobre una mujer o un hombre de cualquier edad (niñas, niños, adolescentes, jóvenes o adultos) utilizando la fuerza, cualquier tipo de coacción física o psicológica, aprovechando las condiciones de indefensión, desigualdad y poder de la víctima y el agresor. La violencia sexual incluye violación, abuso sexual, prostitución forzada, o daños físicos y emocionales durante el acto sexual. (PROFAMILIA)

Según datos del CONNA el 60% de los casos de violencia sexual son de personas conocidas o familiares en el país.

La violencia sexual acarrea graves problemas como: embarazos no deseados, traumatismos físicos, emocionales, psicológicos, infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida.

- **Violencia de género**

En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales construidas en base al género más que en acciones individuales o acciones al azar; trasciende límites de edad, socio económicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo importante para eliminar la inequidad de género y la discriminación a nivel global.

La violencia de género es un problema de salud pública y un ejercicio perverso de poder y control.



Embarazo no planificado:

Adquiere la connotación de embarazo no planificado a toda gestación que se presenta fuera de los planes conscientes en cualquier miembro de la pareja, por diversas situaciones como: falta de prevención anticonceptiva, uso inadecuado o falla de los métodos anticonceptivos, así como resultado de abuso sexual o de sexo forzado (violación).

Aborto

El aborto o Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILVE) es el procedimiento donde se busca terminar de manera consciente con un embarazo en curso.

En el Ecuador el Código Integral Penal en su artículo 150 señala: “Aborto no punible. - El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.

7.2 Marco político legal (Cordero)

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013: Según el artículo 280 de la Constitución el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.

Plan de Erradicación de delitos sexuales en el ámbito educativo (2006): Como respuesta a la situación de violación permanente de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial de sus derechos sexuales y reproductivos, varias organizaciones de la sociedad civil y del Estado se han articulado para fortalecer su gestión a favor de la niñez y la adolescencia del país.

Plan para la Erradicación de la violencia de género contra la niñez, adolescencia y mujeres (2010): Gracias a la influencia del movimiento de mujeres y del trabajo del Consejo Nacional de las Mujeres, se pone en la agenda presidencial el tema de violencia de género como una prioridad, en este marco el Presidente Rafael Correa por medio del decreto presidencial 620, promulga la importancia del tratamiento del tema, la prevención y la erradicación de la violencia como prioritaria y garantiza el cumplimiento de las responsabilidades del Estado a través de la creación



de un Plan de Prevención de Violencia contra la niñez, adolescencia y mujeres, y el involucramiento de Ministerios claves en el tratamiento del tema.

Plan de Respuesta Multisectorial al VIH/sida (2007-2015): En octubre de 2008, Fondo Mundial convocó a los países a presentar propuestas para la Novena Ronda. Luego de no haber aprobado la propuesta presentada en junio de 2008, durante la Octava Ronda de convocatorias, el mecanismo de coordinación de País de Ecuador ha resuelto presentar una propuesta para el componente de VIH – SIDA, basada en las observaciones realizadas por el Fondo Mundial al proyecto presentado en la Octava Ronda.

Plan para la Prevención del embarazo en la adolescencia (2008-2013): En el 2007, en la Reunión de Ministros de Salud Pública organizada por la Organización Andina de Salud, se declaró al embarazo adolescente como problema de salud pública, ese mismo año en el Ecuador se conforma el Comité Interinstitucional para Embarazo Adolescente CIPEA, desde donde se elaboró un Plan de Intervención para la Prevención de Embarazo Adolescente.

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA) : La ENIPLA es una acción del Estado para garantizar los derechos, en particular los derechos sexuales y derechos reproductivos, y en este marco, el acceso real y efectivo a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. En éstos se brindará educación, consejería en sexualidad y planificación familiar.

8. RESULTADOS Y ANALISIS

8.1 PERFIL DE LOS GUPOS FOCALES REGIONALES

Grupo focal Costa

En esta zona se hace dos grupos focales en Guayaquil:

- Grupo focal con mujeres con la participación de 12 mujeres adultas de El Oro, Guayas y Santa Elena; cuyas edades fluctúan desde los 29 años hasta los 45 Años. Pertenecen a organizaciones sociales y barriales. 4 son liderezas y 8 mujeres de base.
- Una mujer pertenece a la comunidad LGBTI
- 7 mujeres casadas
- 1 divorciada
- 4 solteras (dos madres solteras)
- Grupo focal con jóvenes participan 13 hombres y 8 mujeres de barrios urbanos y suburbanos de Guayaquil, con edades desde 17 a 24 años. Todos son parte de organizaciones barriales de jóvenes.

Grupos focales Sierra

Grupo focal Loja



UNIVERSIDAD DE CUENCA

- Participan 11 mujeres adultas de los cantones de Loja cuyas edades fluctúan desde los 29 a 54 años.
- Todas son mujeres pertenecientes a organizaciones de mujeres, líderes de sus zonas.
- Todas son mujeres trabajadoras, tres de ellas remuneradas, el resto hacen activismo en sus organizaciones y trabajan en el hogar.
- En su mayoría son mujeres del sector urbano cantonal, mestizas y una mujer afro descendiente.

En este mismo sector y con la idea de recuperar las opiniones y visiones de jóvenes del sur del país, se realiza un grupo focal con 25 Jóvenes, 6 hombres y 19 mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones juveniles de Loja y Zamora, sus edades desde 23 a 27 años.

Hacen voluntariado en diferentes espacios como la Cruz Roja o pertenecen a organizaciones barriales juveniles, son estudiantes de nivel superior y algunos de ellos han realizado un trabajo remunerado en temas juveniles con ONGs o el Estado.

Grupo focal regional

Este grupo focal contó con la participación de 24 mujeres de Cañar, Morona Santiago y Cuenca, pertenecen a zonas rurales e indígenas de estas provincias y a sectores urbanos de Macas. Sus edades fluctúan desde los 20 a 38 años.

Son mujeres que lideran organizaciones juveniles y de mujeres en sus zonas, han participado en algunos procesos de formación en temas ligados a género y participación.

De este grupo solo dos mujeres trabajan en relación de dependencia y son solteras, las otras son mujeres que trabajan en la casa, la mayoría tiene hijos y están casadas.

Grupo focal Amazonía

21 mujeres participan en este grupo focal, realizado en Puyo, son mujeres de indígenas y de sectores rurales de Pastaza, sus edades oscilan entre los 23 años hasta los 55 años, la mayoría son mujeres que se dedican a la artesanía como forma de llevar recursos, al hogar. Son líderes de sus comunidades y de organizaciones micro empresariales, solo una es soltera sin hijos y otra mujer es madre soltera.

Su convocatoria se hizo en alianza con el Movimiento de Mujeres Rurales del Ecuador y una actora clave del GAD Municipal.

Grupo focal con hombres

Con la idea de conocer sus sentires y percepciones sobre los temas de la investigación y que les atañe directamente por el rol que cumplen en la sociedad, en Cuenca se hace el grupo focal con 7 hombres de diferentes edades desde 21 años hasta 50 Años.

Son hombres que tienen una representación fuerte en organizaciones juveniles, estudiantiles y grupos de teatro y comunicación.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Son profesionales y tienen un trabajo remunerado a excepción de un joven que es estudiante, vienen de procesos de trabajo en temáticas de violencia, derechos y otros que tienen una aproximación a los mismos.



8.2 RESULTADOS

8.2.1 PROBLEMAS DE LAS MUJERES

Las mujeres comparten historias de vida, testimonios, aprendizajes y experiencias que las hacen iguales y diversas al mismo tiempo; y también comparten los mismos problemas, aquellos que les ha sumido en la pobreza, en la violencia, sin oportunidades de educación, esto último es un factor importante en la construcción de relaciones de equidad e igualdad entre hombres y mujeres y muy sentido en las mujeres indígenas

“En mi comunidad hay falta de conocimiento en todos los temas porque en los temas de sexualidad la mayor parte de las mujeres no sabemos, por no saber hay peleas en el hogar hay machismo, no pueden sobresalir las mujeres, si le invitan a las mujeres a los talleres los esposos dicen no y no vienen” MJP

“Muchas dificultades he tenido nos falta una mejor educación a las mujeres desde niñas en las comunidades, fui madre a los 16 años no me dediqué a estudiar porque mis padres no tenían no les alcanzaba para darnos el estudio, yo no tuve un colegio o una universidad, me dediqué a tener hijos sin darme cuenta que es necesaria la educación para que los hijos no sufran, como indígenas es necesario que hayan profesionales en las comunidades. A las mujeres es necesario darles apoyo para que continúen los estudios” MAP.

Hay una mirada de procedencia territorial entre lo urbano y rural de los problemas que aquejan a las mujeres

“Ser mujer, esposa y madre es diferente en la vivencia de la ciudad, cuando hay problemas ellas pueden defenderse, salirse, irse lejos, nosotras que dependemos y vivimos en la comunidad, siempre hay mismo tenemos que estar, obligan a regresar” MAM

El rol reproductivo las hacen las guardianas de la familia, responsables de la vida, las sostenedoras de las buenas costumbres, un peso injusto otorgado por una sociedad que busca cargar en los hombros femeninos la prolongación universal.

“El hombre siempre dispone cuántos hijos debemos tener, que se hace en la casa, y siempre nosotras atentas a los hijos, al esposo, a los padres y en la comunidad, tenemos que ser como Dios, todo lo sabemos y todo lo solucionamos, y eso cansa” MAL

Las mujeres más ciudadinas señalan a la violencia naturalizada, aborto, embarazo adolescente, machismo y la influencia de los medios de comunicación como reproductores de estereotipos que contribuyen a mantener el control de cuerpo de las mujeres y la obligación de ser madres, como



los problemas que no dejan ser libres a las mujeres y que a pesar de no ser nuevos, siguen siendo la saga que ata a las mujeres a un rol que no tiene fin

“los medios de comunicación determinan la objetivación de las mujeres, el estereotipo se refuerza por los medios, en las noticias se horrorizan de las actitudes de las adolescentes pero no se fijan en sus programas que refuerzan un rol violentador” MAG

Surge también y entre líneas una forma de discriminación de mujeres hacia otras que salen de sus casas a espacios públicos o de participación, se visibiliza más en los territorios y las culturas indígenas, no se acepta que algunas mujeres rompan con el papel que les asigna la sociedad, la comunidad y la familia

“Demasiado machismo cuando una mujer perfila para lo político a veces las mujeres juzgamos las mismas mujeres, eso no nos permite avanzar, dicen no tiene nada de hacer” MAP

“Me acato a la vivencia de la nacionalidad que una tiene, es diferente, falta en las comunidades capacitaciones especialmente en las mujeres, el problema es que las mismas mujeres nos atacamos” MJP

En los espacios donde participan mujeres que han caminado en la lucha feminista suman a los problemas ya mencionados, otros que se refuerzan en el momento actual como la inseguridad, la cyber violencia, la objetivación del cuerpo.

“es un peligro la información sobre sexualidad que se comparte en las redes sociales y todo a través del cuerpo femenino” MJG

La violencia económica visibilizada más en la ciudad, en lo rural e indígena no la perciben como un problema; y finalmente la migración, un fenómeno social que ahonda la problemática de la mujer

“las mujeres son padres y madres a la vez, la responsabilidad es muy alta y todo es culpa de la mujer, el embarazo de la hija, el alcoholismo del hijo, todo”. MAM

“no tienen acceso a recursos y medios de producción como la tierra, el crédito y la herencia, no reciben el mismo salario que los hombres, y la mayor parte de su trabajo no es remunerado”. MAL

Los hombres alcanzan a mirar los problemas de las mujeres y lo hacen desde el análisis, hay un nivel de debate que se queda en lo simbólico, sus actitudes en el grupo focal (miradas y voces vacilantes) denotan un cierto temor a escudriñar más allá de los discursos, identifican como el principal problema de las mujeres la violencia y el machismo ligado a la familia y la sociedad

“Machismo desde la familia, disfrazado de protección y desde la sociedad las mujeres son menos valoradas que los hombres” HAC



La inclusión de la mujer en el espacio público también ha posicionado públicamente otros problemas como la inequidad en salarios, la no valoración de su aporte que es considerado por los hombres como un problema para las mujeres.

De otro lado la autonomía de las mujeres crea tensiones y aumenta la violencia masculina. El hecho de que los hombres no tengan el poder económico y al mismo tiempo las mujeres reivindican una mayor autonomía ha creado formas de violencia masculina contra las mujeres que se pueden ver en todo el mundo.

“La violencia es un problema principal, es un tema complejo en la medida en que lo público es privado y hay una infinidad de abusos, hay tipos de violencia estandarizados, los problemas se complican cuando lo privado pasa a lo público, aun no hay un entendimiento a la hora de incorporar el discurso de derechos” HJC

Se ha demostrado que las sociedades que discriminan con base al género, cuentan con una mayor pobreza, un más lento crecimiento económico, un gobierno más débil y un nivel de vida más bajo de sus ciudadanos. Por tanto, las desigualdades de género en las sociedades en desarrollo inhiben el crecimiento económico y el desarrollo, por lo que el mejoramiento de la igualdad de géneros es un componente crítico de cualquier estrategia de desarrollo.

Siendo de vital importancia los problemas anotados y de preocupación de las y los participantes en los grupos focales, desde su espontaneidad no surgió en primera instancia problemas ligados a salud, vivencia de la sexualidad, autoerotismo, placer y autonomía del cuerpo, por lo que se provoca el análisis de estas temáticas.

Las vivencias y percepciones son múltiples, las subjetividades salen a flote y también su voz, la mayor parte de las mismas están ligadas al rol reproductivo, relaciones sexuales, embarazo y autoestima.

“Cuando uno es casado no puede vivir la sexualidad, no tienen las mujeres libertad, las mujeres esperan siempre la palabra de los esposos” MAM

“Nunca nos vemos desnudas al espejo, nuestros esposos no nos dejan, pero ni tiempo hay para eso, con tantas cosas de hacer, apenas se puede peinar” MAM

De otro lado la salud sexual la asocian con servicios de salud y su acceso al mismo, que siempre tiene un tinte de territorialidad, mejor y mayor acceso en la ciudad, en lo rural lleno de obstáculos

“Si hay acceso a la salud, pero en medio del camino ya me muero si espero ir al hospital, las mujeres paren en la casa” MAP



Los hombres tienen un discurso elaborado y lo definen desde el rol masculino otorgado por la sociedad, cuando señalan

“Vivimos en una sociedad en que la mayoría de los hombres no conoce el mundo de la sexualidad femenina” HJC

“El cuerpo se maneja como un tabú, el cuerpo femenino es condenado, la diferencia en el autoerotismo desde las mujeres y de los hombres es la aceptación y el rechazo”. HJC

8.2.2 DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

Hablar de Derechos Sexuales y Reproductivos con los y las participantes de los grupos focales fue una tarea algo compleja, puesto que entran en el análisis y debate varias cuestiones relacionadas con la vida sexual y reproductiva, que van desde el derecho a decidir, cuando y cuántos hijos tener, relaciones libres de violencia, autonomía del cuerpo y decisiones hasta el reconocimiento de las diversidades sexuales, por la consideración que existe de que estos temas no se hablan en público y son privados de la familia.

Los conceptos de los derechos sexuales y derechos reproductivos en la población entrevistada van ligados al tema de la anticoncepción en su mayoría, las mujeres consideran que estos derechos son importantes para poder tomar decisiones sobre su cuerpo. Sin embargo, a pesar de esa conciencia plena de la decisión a elegir métodos de prevención de embarazo o elegir cuántos hijos/as tener en la práctica no es una decisión libre.

“Tenemos derecho a decidir cuándo y con quien tener relaciones sexuales” MJL

“Yo puedo utilizar métodos anticonceptivos, el esposo no tiene porqué decidir pero lamentablemente el marido exige cuántos hijos tener” MJG.

En este sentido resalta el tema de la anticoncepción ligada a un asunto femenino para el uso y la responsabilidad de uso, sin embargo, sigue pasando por una decisión masculina.

El acceso a la anticoncepción como derecho sexual y reproductivo es parte fundamental de la autonomía del cuerpo, dicho ejercicio libertario da cuenta de la capacidad de las mujeres para autodeterminarse en temas tan relevantes como la reproducción y la sexualidad. La defensa de la libertad sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo es un principio ético político irrenunciable.

“Una mujer debe cuidar su cuerpo y no ser obligada por la pareja en los campos no sucede eso, las mujeres vivimos oprimidas por los hombres” MJM.

Desde épocas anteriores a las mujeres se les ha negado el derecho a conocer temas referentes a la sexualidad, esto implica todo lo que tiene que ver con su vida individual, y sus relaciones con su entorno:



“En mi comunidad hay falta de conocimiento en todos los temas porque en los temas de sexualidad la mayor parte de las mujeres no sabemos, por no saber hay peleas en el hogar hay machismo, no pueden sobre salir las mujeres” (MAP)

El proyecto de vida de las mujeres es un tema importante que está inmerso en su auto determinación, es en este sentido que el reconocimiento o no de los derechos sexuales y derechos reproductivos va ligado a la forma de vida que tienen las mujeres y a cómo ellas se proyectan

“ lo que siempre he pensado para mi vida es que me voy a juntar con mi esposo y ser mamá, no sé ni siquiera si lo he pensado, o sea porque no pensaba que podía ser diferente, cuando uno nace mujer, nace para ser madre pensaba yo, no como ahora que uno ve que algunas señoritas se quieren quedar solteras, aunque será también porque tienen sus problemas no?... porque las mujeres nacemos para ser madres llegada cierta edad... ”. MAL

La maternidad como sentido y propósito de vida es reconocida como fundamental en las mujeres adultas, más que en las jóvenes que reconocen tener un plan de vida no solo enfocado en la maternidad, lo que refuerza el conocimiento y vivencia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

“Muchas dificultades he tenido nos falta una mejor educación a las mujeres desde niñas en las comunidades, fui madre a los 16 años no me dediqué a estudiar porque mis padres no tenían no les alcanzaba para darnos el estudio, yo no tuve un colegio o una universidad, me dediqué a tener hijos sin darme cuenta de que es necesaria la educación para que los hijos no sufran, como indígenas es necesario que hayan profesionales en las comunidades. A las mujeres es necesario darles apoyo para que continúen los estudios” MAL

Las construcciones sociales no aportan al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, porque la educación está basada en estereotipos que aprueban o condenan las manifestaciones de la sexualidad:

“No conocemos las mujeres que tenemos derechos sexuales, desde niñas nos han enseñado que eso es malo y que una mujer que no debe saber sobre la sexualidad, cuando era niña nada mismo decían” MJM.

Respecto a la vivencia de la sexualidad en pareja es necesario anotar que el tema es anulado, sobre todo porque la construcción de lo femenino persiste significativamente como un patrón exclusivo y único. Es entonces donde la maternidad entra en juego como lo fundamental en la vida de las mujeres.

Los matrimonios duran porque las mujeres les guste o no les guste tienen que tener relaciones sexuales y los hijos que pueda, la esposa empieza a terror a las relaciones”. MAP

Los derechos sexuales y reproductivos son un reto importante cuando se habla de una ciudadanía plena, no es fácil articularlos desde lo legal y político hacia las vivencias personales hacia su vivencia y ejercicio, su concepción no entra exclusivamente en el terreno de la salud como un



derecho, sino que se refieren a la autonomía personal, al poder sobre el propio cuerpo, a tomar decisiones sobre el mismo e incluso al ejercicio de las libertades individuales:

“Mi esposo ha sido gavilán en el sexo cuando yo estaba durmiendo me doy cuenta de que el ya estaba sobre mi, todo depende del esposo” MAP.

En el caso de la sexualidad y reproducción, no podemos dejar de lado a un actor que es el sustrato en el cual vivimos mujeres y hombres: el Estado. Desde el poder que sustenta, está representado no solo por quienes plantean y objetan leyes, está también representado en los y las proveedoras/es de salud y de justicia que son actores y representantes de una institucionalidad y legalidad que muchísimas veces atentan contra las mujeres cuando les niegan atención de calidad, técnica y oportuna:

“Es muy difícil algunas veces que queremos informarnos nuestras parejas no quieren y si logramos ir en los centros de salud no tienen información para que nosotras podamos decidir que anticonceptivo ponernos ni nada, piensan que somos ignorantes”. MJP

El control sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres pasa por controlar sus opciones y restringir su capacidad de tomar decisiones. Poder decidir sobre todo lo concerniente al cuerpo incluyendo la maternidad o la no maternidad, ha posibilitado la independencia de las mujeres. Sexualidad y reproducción son ejes esenciales para las vidas del conjunto de las mujeres, y son también, por tanto, los ejes esenciales de la represión fundamentalista

“La religión es un determinante, la exploración y el placer está aprobada desde el matrimonio, el cuerpo, a la mujer le recuerdan la sumisión y no pensar en nada concerniente a la sexualidad” HJC

El auge de ideologías religiosas conservadoras absolutamente contrarias a la ampliación de derechos humanos hacia espacios de autonomía del cuerpo de las mujeres se concreta en las vivencias y experiencias de las mujeres adultas parte de los grupos focales:

“Es que no aprendimos de derechos sexuales porque eso está mal pues para nuestros padres era un pecado hablar de eso porque dios castigaba a las mujeres que tenían malos pensamientos o hablaban de esas cosas” MAP

Para las mujeres los derechos sexuales tienen un especial significado pues involucran el derecho a ser tratadas como personas integrales y no como seres exclusivamente reproductivos y a ejercer la sexualidad de manera placentera sin que esta conlleve necesariamente un embarazo.



8.2.3 VIOLENCIA

El proceso de *naturalización de la violencia* se apoya básicamente en algunas construcciones culturales de significados que atraviesan y estructuran el modo de percibir la realidad. Entre ellas, podemos citar como relevantes: *Las concepciones acerca de la infancia y del poder adulto* (se ha concebido históricamente a la infancia como sometida al poder de los adultos, entendido como instrumento de dominación y no como formas del cuidado y la protección. Cuando esta subordinación deviene en abuso y maltrato, se convierte en el primer modelo de violencia para los niños) *Los estereotipos de género* (construcciones culturales que adjudican a lo masculino y a lo femenino rasgos diferenciales que deben adoptarse en el proceso de incorporación a la cultura).

Todas estas construcciones se apoyan en dos ejes conceptuales: *estructuración de jerarquías y discriminación de lo “diferente”*. Según algunas investigaciones acerca de los parámetros culturales de la “normalidad”, la misma se define coincidente con la descripción del varón adulto de raza blanca y heterosexual. Por lo tanto, la violencia dirigida hacia niños, niñas, mujeres, minorías sexuales o étnicas, tiende a justificarse como un modo de ejercer control sobre todo aquello que se aparte del paradigma vigente o que amenace sus bases.

Las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que contribuyen a naturalizar la violencia. Sirva como ejemplo el hecho de que han pasado siglos antes que existieran leyes de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Las instituciones educativas durante gran parte de la historia han utilizado métodos disciplinarios que incluían (y en algunos casos todavía incluyen) el castigo físico. Las instituciones del sector Salud todavía se resisten a reconocer el efecto de la violencia sobre la salud física y psicológica de las personas. Los medios de comunicación continúan vendiendo violencia cotidiana. Los gobiernos todavía no incorporan el problema de la violencia doméstica a las cuestiones de Estado. Todo ello forma un conjunto de acciones y omisiones que tiene como resultado la percepción de la violencia como un modo normalizado de resolver conflictos interpersonales.

El tema de naturalizar la violencia hace que las mujeres no la reconozcan como tal porque su entorno ha sido marcado y vivido por relaciones de poder, es por ello que en comparación con las concepciones masculinas, las mujeres no reconocen algunas formas de violencia que los hombres si lo hacen como por ejemplo los piropos, que se han mantenido como parte del relacionamiento diario y se han convertido en el cortejo y la forma de contacto.

“Algunas veces no creemos que el piropo es una forma de violentar a las mujeres y por eso lo hacemos como algo normal, ya no es una forma de halagar sino más bien es una forma de violentar” HJC

“La música es una forma de violencia no reconocida a veces las letras del reggaetón son tan sucias que denigran a las mujeres y se cree que es una dedicatoria y que son lindas cuando en realidad son asquerosas” HJG

“A algunas chicas les gusta que les digan cosas en la calle y piensan que es una forma de sentirse lindas cuando les dicen suciedades, el problema es que ellas no reconocen la violencia en las palabras y si no les dicen nada se sienten feas” HJG.



A más de reconocer la violencia en lo sutil, en las situaciones cotidianas de la vida el fondo del tema es la condena del cuerpo femenino que se refuerza con prejuicios que se siguen manteniendo discursos que colocan a las mujeres como causantes de su propia violencia:

“En las instituciones educativas las mujeres provocan con su forma de vestir” HJG
. “Tenemos una categoría para llamarlas a las chicas que no acceden a tener relaciones sexuales y otra categoría para las que si acceden” HJC

La posesión del cuerpo femenino y la subordinación resultan siendo las constantes para que se produzca la violencia y se mantenga naturalizada y perpetuada en las relaciones de pareja sobre todo, en este sentido el poder de decisión de las mujeres se sujeta a concepciones masculinas que asignan lo permitido y no permitido:

“El hombre puede decidir que es ético y que no sobre todo al cuerpo de las mujeres” HAC

El por qué se produce la violencia y por qué estas relaciones de poder siguen perpetuándose en la sociedad responden a construcciones culturales y machismos normalizados:

“el inconsciente colectivo hace que se acepte la violencia y se la vea como natural, en realidad ninguna violencia es normal pero en algunos casos se pasa como normal porque no se la reconoce, se cree que los novios o esposos tienen derecho a controlar el cuerpo de las mujeres y eso no es así” MAL

“La violencia es un tema cultural” MJG.

“Las mujeres también tienen la culpa de que haya violencia, o sea las madres son quienes sirven a los hombres cuando llegan del trabajo y ellas también están cansadas, eso ven los hijos y aprenden lo mismo, cuando son grandes aprenden y hacen lo mismo” HJG.

“Si yo salía mi esposo siempre me recibía con puñetes y patadas” MAM
“La esposa le empieza a tener terror a las relaciones sexuales porque todo es golpe, si tienen golpe, si no tienen también golpe, si tienen sexo muy abiertamente el esposo cree que es una puta entonces se sorprende y le pega” MJP

El reconocimiento de las formas de violencia se da principalmente en el ámbito público:

“Yo estoy de candidata y no me han invitado a hacer campaña dicen que las mujeres no tenemos que decir” MAP

“La gente duda de las capacidades de las mujeres no solamente hay que ofrecer cosas en función a las necesidades de la gente no solo ofrecer cosas como hacen las mujeres” MAM

“Hay envidia de otras mujeres cuando una mujer sale adelante” MJM

La investigación coincidió con la coyuntura electoral es por ello que se reconocieron violencias en este contexto, en el que la voz de las mujeres se ve opacada por la de los hombres como dueños del poder:



“No he visto mujeres en altos rangos no hay confianza en las mujeres, que una mujer te mande y tenga poder no está buen visto porque las mujeres quieren hacer lo que los hombres hacen”
MAP

En el Ecuador la violencia está en todos los espacios, en todos los estratos sociales, se la vive en todas sus formas y manifestaciones, desde lo “sutil” hasta el femicidio. En cada zona de la investigación hay el testimonio de todas las mujeres que alguna vez en su vida han sido víctimas de la violencia en sus diferentes formas, lo más preocupante es que en cada zona los testimonios también responden a la ineficiencia de las instituciones de justicia para responder las agresiones sobre todo sexuales:

“A la edad que tengo recién me estoy dando cuenta de lo que es hacer el amor yo de vieja supe, mi primera relación sexual yo no quise me violaron me violó, no conté a nadie porque no iban a hacer nada, en estos casos no se logra mucho porque el agresor dirá que es mentira” MAL

“No hay una justicia para las personas que cometan una violencia porque hoy en día un ladrón un violador dicen que tiene derechos humanos” MAM

A pesar de la falta de confianza en la justicia en algunos casos, en otros existe una cierta seguridad y un desconocimiento del contexto violento que viven las mujeres:

“La que se deja maltratar lo hace por cojuda porque ya se conoce que hay como denunciar”
MAL

El reconocimiento de los derechos de las mujeres se da como un proceso de empoderamiento, no solo basta la información sino que los derechos sean interiorizados, vividos y sentidos en la vida cotidiana:

“De acuerdo a la cultura las mujeres hemos alzado las alas y volamos somos capaces, hay mujeres que ni siquiera conocen la ciudad, quien habla del derecho de las mujeres que llegan a tener hijos en la comunidad, el hombre no entiende no quiere planificar familia no hay esa comprensión por eso la mujer siempre tiene miedo como líder hay que apoyar a las mujeres”
MAP

Cuando las mujeres reconocen la violencia como tal, se dan cuenta que el medio, el contexto en el que viven tiene formas violentas y que el auto cuidado y el cuidado de las otras es importante:

“En el Ecuador es el índice más alto de violencia, hay que tener ojo con las hijas no hay que dejarlas solas ni con el padre yo no tengo confianza con nadie” MAM

Violencia Sexual

“A la edad que tengo recién me estoy dando cuenta de lo que es hacer el amor yo de vieja supe, mi primera relación sexual yo no quise me violaron me violó... (Silencio prolongado y llanto)”
MAL

“La violencia sexual y específicamente la violación sexual afecta a las mujeres más pobres”.
MAG



El Ecuador no resuelve todavía su problema de pobreza pues La mitad de la población de mujeres en edad fértil o aptas para procrear son pobres (50.4%), expuestas a violencia sexual, violaciones y embarazos no deseados.

El reconocimiento de la violencia sexual está presente en la mayoría de mujeres entrevistadas en los grupos focales que dicen alguna vez haber sido víctimas por parte de sus parejas, obligadas a mantener relaciones sexuales, obligadas a realizar actos en contra de su voluntad.

La violencia sexual no es un acto alejado a la realidad de cada una, la viven y sienten casi a diario. La violencia entre parejas se concibe como un reflejo de una cultura más amplia de violencia social, forma parte de un patrón que se reproduce y legitima en la sociedad:

“Una vez mi esposo vino borracho, todo él grosero, apataba a licor, no podía ni pararse, yo que me hago la dormida para que no me moleste y el que me destapa y me abre las piernas, era la primera vez que lo hacía y yo aunque no quería pues tenía que dejarme porque mi mamá me decía que si no hago lo que dice él, me dejaría y yo no quería por mis hijos sobre todo, pero bueno dejé que pase de ahí se hizo una costumbre y cada vez que pasa me da unas iras, una impotencia, unas ganas de pegarle” MAP

La violencia contra la mujer por parte de su pareja se explica en las relaciones de género imperantes en la sociedad en la que existe una notable desigualdad de poder entre mujeres y hombres, lo que conlleva a una injusta reproducción :

“Es que nosotros no reconocemos la violencia porque así han nacido muchos de nuestros hijos a la fuerza, cómo le vamos a decir a nuestros hijos que ellos nacieron porque su padre me violó borracho” MJP

Aunque la violación hace visible un sistema patriarcal de dominación, todas las sociedades tienen mecanismos para justificarla, legitimarla y darle consentimiento silencioso. En consecuencia es perpetuada, vista como esporádica y como producto de situaciones individuales, de tal forma que las condiciones que la propician permanecen ocultas.

“a mí me violaron cuando tenía 14 años, era una niña y el un hombre mayor, él fue a pedir disculpas a mi papá y quería que me entregue para vivir juntos, que bueno que mi papá no quiso, porque no sé cuál sería mi vida, no quiero pensar, ni recordar fue muy terrible y marcó mi vida” MAL

Las experiencias de las mujeres víctimas de violencia sexual van más allá de los discursos y acciones de las organizaciones e instituciones que trabajan en los temas, el trabajo va mucho más allá de los discursos públicos, leyes y normas, el tema es reconocer los patrones socioculturales, atacarlos con fuerza, utópicamente construir un mundo diferente y pelar contra las relaciones de poder inequitativas que marcan la violencia.

“Hace como unos 15 años me violaron a mí y a una amiga al mismo tiempo, era horrible, en la playa a la fuerza era un conocido y me sacó la ropa a la fuerza, me golpeó y me quedé embarazada del violador, nadie hizo nada, no quise hacer denuncia porque sé cómo es la justicia, como es todo, mejor dejé así todo” MAG.



"A una prima la violó su padrastro y nadie hizo nada, nadie le creyó, fue horrible, creo que como este hay muchos casos". MJL

Los casos de violencia sexual son más cercanos de lo que se imagina, las personas reconocen a las instancias pertinentes de denuncia, se acercan a lo que se considera ruta de denuncia, sin embargo también reconocen las trabas que existe en el sistema de justicia. Al preguntarles qué hacer en caso de violencia sexual la mayoría de personas responde que acudirían a la fiscalía y las mujeres que no viven en la ciudad ven a la policía como la única ayuda, pero no la solución a su problema.

Se registran sentimientos entre las entrevistadas como la impotencia, la rabia, enojo, frustración, coraje y tristeza al plantearles esta temática sin embargo hay quienes encuentran una evasión del tema:

"Yo nunca he sentido violencia de ningún tipo, no sé qué es la violencia, no me ha pasado por eso no se de lo que están hablando" MAM.

Se percibe claramente que la violencia sexual ocurre con mucha mayor frecuencia contra las mujeres,

"Porque son más débiles", "más a mujeres entre 18 y 30 años, que es cuando están más buenas y maduritas" HAC

Consideraron que ocurre en mayor medida entre conocidos, pero también se dijo que *"es frecuente entre familiares"*, mencionándose padre, tío, primo, hermano, esposo y madre. La violación sexual incestuosa del padre a la hija o del hermano a la hermana se visualizó como probable en circunstancias de alcoholismo o drogadicción: *"en sus cabales no pasaría"*.

Los hombres más jóvenes no se asumen como sujetos violentos ni mucho menos como victimarios; ellas sí los perciben a ellos como sujetos violentos, ligando el hecho a su naturaleza masculina y a la forma en que son educados: *"así son por naturaleza", "desde chicos se les mal educa"*. Ellos consideran que son otros hombres quienes "violan" y "maltratan de más"; ellas aceptan que otros hombres son más violentos.

La violencia se origina, según sus narraciones, por múltiples factores como invisibilización e influencia social:

"si tienes influencia de los otros, se hacen las cosas sin meditar, se le ve como algo que tiene que pasar"; MJG, machismo: "siendo hombre, sería para sentirse más hombre, decir –yo soy el más macho-"; HAC, cultura de inequidad de género: "hay muchos lugares que la tradición es que se piense, mi hijo es hombre y puede tener relaciones con quien quiera, donde quiera y como quiera"; MJL, patrones familiares de violencia: "los padres muy machistas influyen en sus hijos, éstos tratan de imitar esta imagen machista y violenta"; MJP; falta de información sexual: "la falta de información sexual origina más curiosidad, muchos lo hacen por esto" HJC; falta de información sobre violencia sexual: "no se sabe, bien a bien, qué es, cómo prevenirla, cómo denunciarla, no se sabe nada" MJM



Como motivos relacionados con la persona agresora hay algunas justificaciones para que se de la violencia:

"si estás nervioso o enojado lo haces, y también para vengarte", "...Por ganas", "... Llamar la atención...", "... Ver lo que se siente", "... Uno llega borracho y quiere agarrar a la fuerza", "a veces las cosas pasan, pero no se había pensado en hacer un daño", "... por placer o diversión".

En cuanto a la persona que es víctima, hubo una especie de polémica tanto de hombres como de mujeres al considerar si el riesgo para sufrir violencia sexual era o no provocado por las mismas víctimas. Las razones percibidas y expresadas por ellos y ellas como circunstancias femeninas propiciadoras fueron: *"ser llamativa"* *"muy bonita o vestir provocativamente"*; el comportamiento *"coquetear"*, *"decir cosas: me gustas, estás muy guapo"*; *"andar sola en la calle sobre todo de noche"*; *"ejercer la prostitución; practicar el marraneo (tipo de baile juvenil), no saber decir que no y no poner un alto"*. Se describió como vestimenta femenina provocativa: *"blusa transparente"*, *"pantalones muy apretados"*, *"falditas que no tapen"*, *"blusitas escotadas"*, *"licra"* y *"short"*.

El poder ligado a la violencia se visualiza como característica masculina: *"ellos son así"* y masculinizada: *"para sentirse muy macho"*, *"para hacerlo hombre"*. El ejercicio de la violencia es posible gracias a esta forma social de poder en la que la masculinidad se liga a la fuerza, al dinero y a la autoridad. La violencia, además, se constituye como una estrategia de mayor empoderamiento.

Las estrategias o recursos mencionados como utilizables para lograr perpetrar sobre una persona algo en contra de su voluntad fueron, por un lado, de tipo abiertamente violento, la violencia física ejercida o como amenaza; y por otro, de tipo más encubierto como la invalidación de la razón, la imposición, el convencimiento y la generación o aprovechamiento del impulso sexual.

Las estrategias abiertamente violentas referidas fueron la fuerza y la violencia física: *"golpear"*, *"sujetar"*, *"amarrarla"*, *"te pueden obligar a golpes"*, *"las castigan, les dan de palazos, no las dejan salir"*; las amenazas: *"decirle -si no lo haces, o si me acusas, te voy a matar-"*, *"si no te dejas, me voy contra tu hija"* y aprovechar la situación de discapacidad física: *"puede darse la violencia sexual de una persona sana a una con discapacidad"*.

Las estrategias mencionadas con las que se buscaba invalidar la razón o aprovechar la invalidez ya existente fueron: *"embriagar"*, *"drogarla"*, *"emborracharla"* y aprovechar discapacidad mental: *"abusar de alguien que no está bien de la razón"*.

En cuanto a la imposición, en función de roles de autoridad y obediencia y de condiciones de dependencia económica o afectiva, se señalaron como estrategias: aprovechar relación de confianza o afectiva: *"abusar de la amistad o de los lazos familiares"*, *"hacer sentir a una mujer que tiene el compromiso..."*, *"si me quieres, dame la prueba de amor"*; aprovechar el status de autoridad familiar, laboral o escolar: *"pasa cuando ella le hace mucho caso al que le ordena, si es por ejemplo el padre si no te vas"*, *"si te dejas te subo la calificación"* y la dependencia económica: *"manteniendo a alguien, tú puedes obligar a que haga lo que tú quieres"*.



La violencia sexual pocas veces es denunciada, por circunstancias que tienen que ver con la víctima o con el sistema de justicia. En cuanto a las razones relacionadas con la víctima, los hombres expresaron más cuestiones de agrado y ellas de temor y vergüenza: *"porque le gustó", "les gusta la mala vida", "les gusta no les importa", "a veces no se denuncia por miedo de que lo vuelvan a hacer", "no se platica de esto por pena, da miedo o vergüenza", "la esposa no lo denuncia, porque lo quiere y no puede hacer nada en contra de él"*.

Respecto a las razones relativas al sistema de justicia, ellos y ellas coincidieron en la poca efectividad, recalcando, sobre todo ellas, la situación de impunidad que gozan los victimarios:

*"la denuncia aquí en Ecuador, no creo que sea así como que en todos los casos tan efectiva",
"lo efectivo de la denuncia depende del tipo y grado de la violencia, en acoso sexual no es"*

MAG

"es un gran problema probar la violencia" MJG

"falta información de cómo hacerlo", "si denuncias, te echan la culpa y te tratan bien mal", MJG

8.2.3 ABORTO – DERECHO A DECIDIR

Si hablar de violencia, DSDR y violencia sexual, fue complejo, el tema de aborto requirió de mucha atención y cuidado, los silencios, las lágrimas, las miradas, el miedo a decir lo que sienten y piensan los hombres y mujeres que fueron parte de esta investigación, dio cuenta de alto nivel de controversia que genera el tema, pero también de que el mismo es la parte escondida de la vivencia de la sexualidad de las mujeres.

"Cuando me violaron estaba asustada y no me bajaba la regla, esperé y esperé como 15 días más hasta que me hice una prueba y resultó positiva, era complicado, yo no podía tener un hijo en esas condiciones, yo no quería embarazarme y menos tener el hijo del hombre que me hizo tanto daño, entonces con una amiga averiguamos un lugar, nos dieron tantas direcciones, fuimos a dar hasta en la bahía, finalmente nos dieron una dirección donde un médico que ya está muerto además, fue algo complicado, yo tenía miedo sentí todo lo que me hacía, fui maltratada, y luego tuve que irme adolorida a mi casa. Nadie supo qué es lo que me pasó. Sentí el dolor más fuerte que he sentido en mi vida, pensaba que me iba a morir, sin embargo lo que ahora digo es que pese al dolor que tuve, si volviera a pasar por una situación así otra vez, lo hiciera sin pensarlo dos veces, yo no quiero tener un hijo de un violador que me recuerde todos los días lo que pasó. Desde ahí creo que cada mujer debe decidir si tener o no un hijo de estas condiciones". MAG



Cuando se piensa en aborto no se toma en cuenta las historias de miles de mujeres que lo hacen, el aborto en primera instancia se considera, por los y las participantes de los grupos focales como: *“pecado” “delito” “terminación con la vida de un ser humano” “una violación al derecho fundamental que es la vida” “una solución rápida a los problemas”*, etc. De estas concepciones es importante considerar que hay dos posiciones que se visibilizan a lo largo de la investigación: la primera que surge al mencionar el tema y la segunda que surge cuando la situación se hace personal, es ahí cuando cambia su percepción y ya no lo piensan como pecado sino como una opción.

Pese a que existen algunos tabúes y creencias culturales distintas, los problemas que genera el aborto en la salud de las mujeres y en su entorno familiar deben ser motivo de preocupación de todos y todas.

A las mujeres desde pequeñas se les enseña que deben ser madres, que su futuro es tener hijos. La familia, la iglesia, la educación, el Estado, les inculca la maternidad desde la infancia y este aprendizaje les lleva a ser madres sin plantearse si quieren serlo o no.

“Yo tuve mis 10 hijos, pero yo he querido tener a todos cuando era joven tuve mis hijos, como dicen buena hembra, buena madre” MAP

El aborto se reconoce como derecho entre las mujeres con un alto nivel de conocimiento y lucha por los DSDR, como un tema de salud pública y como un tema de autodeterminación femenina:

“Va más allá de las concepciones personales es un tema que tiene que ser un derechos” HAC

“El tema del aborto debe ser considerado como el control que las mujeres tienen sobre su cuerpo, va mucho más allá de lo moral y religioso” MJG

El aborto ha existido siempre y en todos los estratos sociales, sin embargo las mujeres indígenas y de los territorios entrevistadas no lo reconocen como tal, al plantearles el tema consideran que es “un pecado”, ellas para referirse al mismo hecho utilizan otros términos como:

“me lo saqué” “tomé una agua que me dieron y me bajó la regla” MAP

“cuando tenía un retraso en mi regla yo fui a donde las curanderas para que me den algunas hierbas y me baje” MAM

El aborto es difícil analizar debido a su práctica clandestina y el estigma social que lo rodea, a más de la carga cultural religiosa y su relación directa con el embarazo no deseado.

Se utilizan dos variables de control: la valoración de la vida y la moralidad sexual que determinan en gran medida las opiniones hacia y sobre la despenalización del aborto.

“Una sobrina política abortó pero no avisó a nadie se puso una inyección y el doctor le mando a hacer fuerza y trabajando hasta botar el bebé casi se muere, luego la llevaron donde el doctor le hicieron un lavado y le salvaron la vida, ella se estaba volviendo mañosa se estaba acostumbrando a abortar” MAM

“Yo tenía una amiga en el Puyo convivía con una pareja estuvo embarazada y no quería tener al hijo yo en eso no le podía ayudar se fue donde mi amiga y le había comprado diprosan y se



UNIVERSIDAD DE CUENCA

tomó tres pastillas por la boca y tres por la vagina eso le hacía efecto a los 15 días le dolía el vientre tenía dos meses de embarazo como que tuviera 8 meses, se fue al hospital y no tuvo el guagua” MAP.

Mucho más allá del tema del hecho mismo del aborto lo que se analiza con preocupación son las consecuencias, muchas opiniones coinciden con el hecho de que las mujeres que se someten a abortos inseguros tienen secuelas graves:

“La mujer se ha quedado loca porque ha abortado” MJL

“ Cuando una mujer aborta se queda con problemas en el útero, luego no puede tener hijos nunca más” MAG

“Hay contracciones en el útero que producen daños terribles en la mujer que aborta, una amiga que abortó casi se muere con los dolores que le produjo” MJL

El aborto es un tema cotidiano y está muy cerca de la vida de las personas, en especial de las mujeres, en todos los grupos focales se identifica alguien que conoce casos de aborto cercanos o personales, es por ello que no se puede considerar un tema alejado de las vivencias cotidianas.

En esta ocasión y para este tema, es importante regionalizar las opiniones, por ejemplo en la Sierra específicamente en Loja, son los y las jóvenes quienes hablan más abiertamente sobre el aborto, lugares, métodos y de forma muy natural conversan del tema

“Nosotros sabemos bien aquí quien hace abortos seguros, yo le acompañé a mi amiga, cuesta 300 dólares yo incluso le presté la plata”. MJL

“Aquí hay una doble moral, está bien cuando lo hago yo, pero está mal cuando lo hace la otra, es una ciudad muy religiosa, curuchupa e hipócrita”. MJL

En Cuenca, otra ciudad de la Sierra, las visiones de los hombres intentan rescatar su rol masculino en el aborto, un rol de toma de decisiones y cercano a las relaciones de pareja, y que, a pesar de su sensibilidad hacen ejercicio de su rol de control del cuerpo de las mujeres

“El aborto como un derecho ha sido político, hay un problema de salud pública, yo no concibo al aborto como un derecho exclusivo de las mujeres y adicional al tema de la autodeterminación del cuerpo femenino” HJC

“La paternidad ha sido uno de los componentes abandonados en el debate” HAC

“Los hombres también tenemos algo que decir en la paternidad” HJC

*“Es importante la corresponsabilidad del hombre, partiendo de ello hay evidencia de que las 12 semanas no representan una vida, es una decisión que debe ser consultada con el compañero”.
HJC*



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Al indagar un poco más sobre sus visiones en casos de aborto por violación aseguran que la decisión de aborto es un acto de rebeldía y subversión de las mujeres

“Yo como hombre no estoy en ninguna posición de obligar a las mujeres a tener hijos que no lo deseen” HJC

“Es la única forma que tienen las mujeres de invertir el orden social, es un acto subversivo” HJC

“No puede llegar a ser un derecho es un tema de subversión” HJC

“Es un tema de salud pública, si una 'persona en su soberanía o fue violada es un tema de salud que debe ser garantizado” HAC.

En la Costa, específicamente en Guayaquil, las percepciones de las y los jóvenes muy conservadoras, defensores de la vida del “hijo”, con un discurso religioso muy fuerte

“Las mujeres que han tenido un hijo, que no ha sido deseado, al principio no les agrada pero luego son muy felices” MJG

“Depende de su ideología religiosa Dios perdona cuando te arrepientes” HJG

Frente a este tema también está uno de gran fuerza: el derecho a la vida *“el bebé no tiene la culpa, “el feto en si es un ser vivo y tiene derechos”* se convierte en una situación de persecución y condena social contra la mujer, de no reconocer su derecho a la vida, en estos casos no se piensa en la cantidad de mujeres que mueren por un aborto inseguro, *“sin duda el aborto es una cosa de clase”*

Los y las integrantes de los grupos focales con jóvenes y mujeres son frontales al señalar que a pesar de lo que sienten y piensan frente al aborto, nunca una mujer debe ir a la cárcel por hacerse un aborto producto de una violación.

En el Oriente las mujeres de Puyo y Macas recurren a los discursos religiosos, las costumbres de la comunidad, al matrimonio y la familia para conversar sobre el aborto

“yo cuando supe que estaba embarazada no quise tener, mi prima si lo hizo, me dio las pastillas pero no me tomé porque mi marido me dijo que nos vamos a casar”

Es interesante analizar la postura de muchas mujeres que al inicio de la conversación se mostraron cerradas ante el tema, sin embargo cuando se plantea el aborto como una situación personal, cercana, la posición es otra:

“Yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque es una vida que se pone en peligro” MAM



La misma mujer cuando se pregunta “qué haría si la violaran a usted o su hija? Y queda embarazada?

“No tendría, yo me saco pero en lo íntimo, sin que nadie sepa, y a mi hija también yo no le obligo a tener” MAM

Pastillas, hierbas, inyecciones, combinadas o solas, las mujeres cuentan las formas como escuchan se hacen o cómo lo han hecho. El tema se da desde lo que se escucha sin ningún fundamento científico, hasta el conocimiento de misoprostol y su forma de utilización:

“A mí me parece que el miso es el mejor método que existe porque las mujeres podemos hacerlo en nuestra casa en compañía de quien queramos o totalmente solas, el miso es el mejor método que existe sin duda pero difícilmente se puede acceder” MJL

El reconocimiento del misoprostol como el medicamento seguro para la interrupción del embarazo también pone en la palestra el acceso restringido que hay. Algunas mujeres hablan del costo totalmente exagerado llegando a sobre pasar los 300 dólares por las 12 tabletas, otras cuentan sobre la estafa en el mercado negro:

“A veces venden las pastillas y no son las originales, son una estafa, alteran y las venden carísimas eso no es justo porque las mujeres que necesitan no es que les sobre la plata y pueden botar así no más, además puede ser que la estafa ponga en riesgo si vida” MJG

Busque una clínica por seguridad, lo peor de mi vida, me dijeron que era una sacadita de muela me rasparon lo sentí todo al siguiente día me dio fiebre, me tenían que intervenir nuevamente, me dio escalofrío”. MAG

En general para las mujeres valores y creencias religiosas se contraponen a la posibilidad de optar por el aborto, se crea entonces una tensión entre esos valores y la toma de decisión por el aborto, una mujer que está segura de la validez moral de interrumpir un embarazo enfrenta el peso del tratamiento social de su decisión, estigma social, vergüenza y miedo que sin duda están asociadas a las prácticas abortivas.

“A mí si me da recelo y miedo de hablar de mi experiencia, prefiero olvidarlo porque más daño me ha de hacer la gente si sabe, esto es un secreto, que no se ni porque lo cuento”. MJG

Las mujeres continúan y continuarán quedándose embarazadas sin que lo deseen, seguirán teniendo embarazos como fruto de la violencia por causa de las violaciones sufridas en la calle o en sus casas por eso las mujeres se encuentran en la necesidad de tomar una decisión extremadamente difícil y conflictiva, optar o no por la interrupción del embarazo

“Si yo me hubiese quedado embarazada cuando me violó, yo hubiera hecho todo por no tener”. MAL

A las mujeres se les hace muy difícil compartir sus experiencias en aborto, viven en el silencio, a pesar de que lo consideren una solución, deben hablar de él como algo trágico y lamentable por



miedo a la crítica, a esto se suma la soledad con la que asumen y ejecutan su decisión que las hace más vulnerables

“Enfrentar un aborto sola es lo peor de la vida”. MJG

“Las mujeres que están decididas lo hacen así sea con ayuda o sin ayuda lo hacen, de afuera se ve como algo fácil es una circunstancia que es complejo” MAG

“¿se puede tener voz? Se debe contar la historia de una?, donde están los espacios para que las mujeres podamos hablar sobre lo que sentimos y pensamos?” MJM

Las evidencias, las experiencias, las dudas, las expectativas y ansiedades de las mujeres reflejan la problemática de una sociedad violenta, basada en un pensamiento patriarcal heredado y en algunos casos reconocidos y otros lamentablemente naturalizados.

Los silencios, llantos, emociones vividos vinculados a sus experiencias reflejan las inequidades sociales y la necesidad de atención integral en los temas, a más de la preocupación constante de la naturalización de temas que no permiten la vivencia plena de los derechos y de la sexualidad en general.

9. CONCLUSIONES

- La violencia sexual contra las mujeres es extremadamente frecuente, deja huellas permanentes muy difíciles de sobrellevar sin ayuda incluso profesional, a pesar de ello y de lo que ha realizado las organizaciones feministas no hay políticas claras desde el Estado que detenga la inseguridad para las mujeres en todos los espacios.
- El aborto vive en nuestra casa, es un tema de cotidianidad de las mujeres, la sobrina, la amiga, la hija, la mamá, las mujeres lo han vivido de cerca, lo han sentido, ya no es un tema de solo investigación, hay un sufrimiento evitable y que la política no lo resuelve y que es urgente que lo haga.
- A 2014, el aborto sigue siendo clandestino para la inmensa mayoría de mujeres, jóvenes y niñas que abortan en el país. En lo político, es una cuestión pendiente, en términos de sexualidad, género, salud y derechos de las mujeres.
- Las mujeres de todas las clases sociales interrumpen sus embarazos, cuando esa es su decisión, la clandestinidad y la inseguridad no las detiene, más bien crean un contexto de injusticia e inequidad.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

- El desconocimiento de los DSDR es un factor común, en todas las zonas del país, estos temas no son nuevos, tenemos investigaciones similares, trabajamos incansablemente y siguen siendo temas no superados y siguen siendo temas cotidianos de las mujeres. Por qué?
- La autonomía del cuerpo está en nuestras cabezas, no solo en leyes o discursos, es hora de vivirlas, exigir las y ejercerlas

Mayo, 2014

SENDAS

Carmen Ortiz

Paola Hidalgo

Cuenca-Ecuador

INVESTIGADORAS

Carmen Ortiz Gómez

Paola Hidalgo



Cruce de variables, software Atas Ti

